



Nápoles, 2025

mientrastanto.e

Número 246 de junio de 2025

Notas del mes

Presentación del informe del Centre Delàs «Beneficio colateral»

Eduardo Melero Alonso

Debates sobre el declive de la izquierda

Albert Recio Andreu

Del apagón al cuadrilema energético

Pablo Massachs

Entre broma y broma, la verdad asoma: la liberación LGTBQ en la Costa del Sol de los sesenta

Álvaro González Montero y Richard Cleminson

Combatir la guerra híbrida neocortical del actual neofascismo

Enrique Javier Díez Gutiérrez

Fusiones bancarias

Albert Recio Andreu

Ensayo

Perspectivas de la izquierda alternativa

Antonio Antón

Burguesía y fascismo

Soledad Bengoechea

De otras fuentes

Y Europa, ¿qué hacía mientras Israel asesinaba en Gaza y cantaba en Eurovisión?

Olga Rodríguez

10.471 millones para preparar la guerra y contribuir a un genocidio

Quique Sánchez Ochoa

«Hacer gritar la economía» de Venezuela

Vijay Prashad

Alex Gourevitch: «Las universidades han traicionado su razón de ser»

Sebastiaan Faber

Las «tradwives» presagian un colapso sistémico

Meagan Day

Aforismos necrocomerciales

Gustavo Duch

Militarizar la ecología, el nuevo espíritu del imperialismo

Clément Quintard

La Biblioteca de Babel

El problema de la vivienda

El orden del capital

Los descendientes. Un siglo de historia y memoria familiar

En la pantalla

Pepe Mujica

Sicilia, azotada por la sequía

Documentos

Informe 73: De la mina al campo de batalla. Materiales críticos para la industria de defensa

Teresa de Fortuny y Xavier Bohigas

Más de 200 organizaciones europeas denuncian que la UE está ocultando información sobre los proyectos mineros declarados estratégicos

Ecologistas en Acción

...Y la lírica

Marta Valdés

Notas del mes

Eduardo Melero Alonso

Presentación del informe del Centre Delàs «Beneficio colateral»

Hechos fundamentales que pone de manifiesto el informe «Beneficio colateral»

Hay dos líneas fundamentales en el informe: 1) Poner de manifiesto la importancia de las relaciones armamentistas que existen entre la industria militar israelí y la industria de defensa con sede en España. Estas relaciones se despliegan a través de las exportaciones. Pero sobre todo por medio de importaciones y adquisiciones de armamento israelí; 2) Denunciar la inactividad del Gobierno en el control de los tránsitos.

Las exportaciones de armas son el aspecto menos importante. Según la información de las bases de datos públicas de Israel, este país adquirió armamento español por valor de 5,3 millones de euros. Cuatro veces más de la cantidad que aparece en la base de datos española DataComex que gestiona el Ministerio de Economía.

Una cuestión importante es que la mayoría de las exportaciones a Israel se produce en el marco de proyectos conjuntos de la industria israelí y la española. En este sentido es destacable la exportación de 18 vehículos blindados de la empresa Santa Bárbara a Israel (por valor de 43 millones de euros) para que la empresa israelí Elbit Systems les instalara la torre de mando y control, y un cañón de 105 milímetros. El destino final de estos blindados era Filipinas y se exportaron antes del 7 de octubre de 2023.

En cuando a la adquisición de armamento israelí, desde el 7 de octubre de 2023 se han celebrado un mínimo de 46 contratos con empresas israelíes por valor de 1.044 millones de euros. Los contratos más importantes se ejecutan por empresas españolas y empresas israelíes a través de acuerdos de transferencia de tecnología: el sistema lanzacohetes SILAM por valor de 576 millones de euros o los misiles contracarro SPIKE por valor de 237 millones de euros.

Este hecho pone de manifiesto una relación cada vez más estrecha entre la industria de defensa israelí y la industria española. Esta relación también se extiende a otros proyectos militares de origen español, en los que se incluyen componentes israelíes. Como es el caso del vehículo blindado 8 por 8 Dragón, en el que se utilizan cinco componentes israelíes.

En cuanto al tránsito de material de defensa con destino final a Israel llegamos a la conclusión de que es la norma y no la excepción. Los tránsitos de material de defensa con destino final a Israel se realizan, fundamentalmente, de cuatro maneras diferentes: 1) Buques militares o buques mercantes fletados por EE. UU. que hacen escala en la Base de Rota; 2) Buques militares o comerciales adscritos al Programa de Seguridad Marítima, que normalmente hacen escala en Algeciras; 3) Navíos comerciales de la empresa israelí ZIM que, a través de líneas regulares, conectan puertos de EE. UU. e Israel, pasando por los puertos de Valencia y/o por Barcelona; y 4) Mercantes que provienen de Asia. El tránsito también se produce a través de aeronaves que hacen escala en el aeropuerto de Zaragoza o en la base de Rota.

Un informe del Palestinian Youth Movement, de noviembre de 2024, ha identificado 944 envíos de material de defensa con destino a Israel que habrían pasado por el puerto de Algeciras. Esto después de que el Gobierno español anunciara que no autorizaría tránsitos de material de defensa con destino final a Israel. En el informe llegamos a la conclusión de que el Ministerio de Asuntos Exteriores mira para otro lado en relación con todos estos tránsitos.

El Gobierno ha incumplido la legislación. Podría y debería haber adoptado más medidas con la normativa en vigor

El Gobierno ha incumplido la legislación sobre comercio de armas en lo relativo a las exportaciones de armamento a Israel y también en relación con los tránsitos.

Según el Gobierno, no se han otorgado autorizaciones de exportación de material de defensa desde el 7 de octubre de 2023. Pero no se han revocado ni suspendido las autorizaciones concedidas con anterioridad que siguen en vigor. Se supone que la JIMDDU (la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso) ha revisado estas autorizaciones y no ha encontrado razones para revocarlas o suspenderlas. Estas autorizaciones vigentes habrían justificado la exportación, en noviembre de 2023, de 987.000 euros en municiones a Israel; así como las exportaciones de componentes relacionadas con los vehículos blindados cuyo destino final era Filipinas, exportaciones de componentes que se realizaron después del 7 de octubre de 2023.

El Gobierno debería haber revocado, o al menos suspendido, las autorizaciones de exportación de material de defensa en vigor en aplicación del artículo 6.3 del Tratado sobre el Comercio de Armas. Este artículo prohíbe la exportación de armamento si se puede utilizar para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad, ataques contra la población civil y otros crímenes de guerra. También deberían revocarse las autorizaciones a Israel con base en la Posición Común 2008/944/PESC de la Unión Europea. Especialmente con base en el criterio 2: respeto de los derechos humanos en el país de destino final y respeto del derecho internacional humanitario.

El Tratado sobre el Comercio de Armas y la Posición Común 2008/944/PESC también regulan los tránsitos de armamento. El tránsito se aplica al transporte de material de defensa proveniente de EE. UU., en buques o aeronaves que hacen escala en territorio español cuyo destino final es Israel. Por las mismas razones que hemos señalado anteriormente, el Ministerio de Asuntos Exteriores debería denegar los tránsitos de material de defensa cuyo destino final sea Israel. No sólo eso: las autoridades aduaneras españolas deberían retener el material de defensa con destino a Israel en tránsito por los puertos y aeropuertos españoles. Es una obligación impuesta por la Ley 53/2007.

En el caso de los tránsitos de armamento que se están realizando a través de la Base de Rota, hay que destacar que el Convenio de cooperación para la defensa con EE. UU. impide que se puedan realizar inspecciones a los buques de las Fuerzas de los Estados Unidos, entre los que se incluyen los buques fletados por el Departamento de Defensa de este país.

En relación con los contratos, teniendo en cuenta la legislación en vigor, el Gobierno no puede excluir a las empresas armamentistas israelíes. Eso en la hipótesis de que quisiera hacerlo, porque, en la práctica, en muchos casos contrata directamente con empresas israelíes al

considerar que sus productos son técnicamente superiores.

La importancia de adoptar un embargo integral de armas

La imposición de un embargo integral de armas a Israel es una medida imprescindible. La comunidad internacional debería adoptar un conjunto de sanciones más amplio en relación con Israel. Por ejemplo, los dieciséis paquetes de sanciones que ha impuesto la Unión Europea a Rusia desde febrero de 2022. Una de cuyas medidas es un embargo de armas, incluyendo las importaciones de armamento ruso.

El Gobierno español no ha querido aprobar ningún tipo de embargo de armas a Israel. Considera que las medidas que ha adoptado equivalen a un embargo de armas en la práctica.

Esto no es correcto. Un embargo integral de armas permitiría, entre otras medidas:

- Prohibir las importaciones de armamento israelí.
- Impedir la adjudicación de contratos a empresas armamentistas israelíes, estableciendo prohibiciones de contratar en la legislación de contratación pública.
- Prohibir la financiación de la industria de defensa israelí.
- Prohibir el tránsito de material de defensa con destino a Israel a través de puertos y aeropuertos españoles.
- Prohibir el tránsito del combustible para aeronaves militares del tipo JP-8. Un tipo de combustible necesario para las operaciones de la fuerza aérea israelí en Gaza y que no tiene la consideración de material de defensa, por lo que no se encuentra sometido a los controles del comercio de armamento.

Todas estas medidas las podría aprobar el Gobierno por decreto-ley. En el Consejo de Ministros del próximo martes. Y podrían estar vigentes el miércoles, una vez publicadas en el Boletín Oficial del Estado.

Qué intereses de fondo hay. Por qué se ha mantenido esta política y no se adopta un embargo de armas

La política gubernamental puede explicarse por la coexistencia de distintos intereses o lógicas que no se contradicen entre sí.

En cuanto a las importaciones y adquisiciones de armamento israelí, el Ministerio de Defensa considera que las empresas israelíes son las únicas empresas que ofrecen determinados tipos de armamento. Empresas a las que adjudica los contratos sin competencia, amparándose en que las empresas israelíes o sus filiales son las únicas capacitadas técnicamente para suministrar el objeto del contrato (ejemplos: lanzacohetes SILAM, el designador POD para sistemas de combate aéreo o los misiles contracarro SPIKE). Adquisiciones anteriores a la industria israelí implican una situación de dependencia tecnológica en cuanto al mantenimiento y actualización de los sistemas de armas. Además, se está reforzando la relación entre la industria israelí de armamento y la industria militar con sede en España. Aunque no lo hemos analizado en el informe, esta relación puede estar siendo promovida por el Gobierno español como una compensación que exige a la industria israelí. Esta situación interesa a la industria militar con sede en España.

En relación con los tránsitos, Israel ha recibido centenares de envíos a través de barcos y aviones procedentes de Estados Unidos. Este país es el principal exportador mundial de armas a Israel. El Gobierno español ha preferido mirar para otro lado en relación con los tránsitos de material de defensa procedentes de EE. UU. Ha actuado, así, como el aliado fiel que siempre ha sido sin oponerse nunca a su política militar.

El Gobierno ha pretendido ocultar a la opinión pública esta política

El Gobierno ha pretendido que la opinión pública no conociera la realidad de las relaciones armamentistas existentes entre España e Israel. Lo ha hecho ocultando información, pero también a través de medidas verdaderas e incluso por medio de mentiras.

En primer lugar, hay que destacar que han sido los movimientos sociales y la prensa quienes han hecho públicos los casos más escandalosos en lo que se refiere a las exportaciones, los contratos de adquisición de armamento israelí y los tránsitos de material de defensa con destino a Israel a través de puertos y aeropuertos españoles.

El Gobierno ha pretendido hacer creer a la opinión pública que no se ha vendido ni adquirido armamento a Israel desde el 7 de octubre de 2023. Para convencernos de ello, ha puesto en marcha una campaña de desinformación en la que han participado el Presidente del Gobierno, la Ministra de Defensa, el Ministerio del Interior, la Secretaría de Estado de Comercio e incluso la Ministra de Educación y portavoz del Gobierno.

En el informe utilizamos el término «desinformación» porque consideramos, siguiendo la definición del término por la Unión Europea, que el Gobierno español ha difundido información verificablemente falsa o engañosa que se crea, presenta o divulga para engañar deliberadamente a la población. En el informe recogemos diez declaraciones de autoridades que son matizables, engañosas o que no se corresponden con la realidad.

Consecuencias para la democracia

Esta política gubernamental tiene sus consecuencias. Las más graves están teniendo lugar en Gaza. Aunque sea de forma indirecta, el Gobierno español tiene cierto grado de corresponsabilidad, ya que no ha adoptado medidas para dificultar el suministro de armamento a Israel procedente de Estados Unidos. Además, el Gobierno está financiando la industria de

defensa israelí y está favoreciendo las relaciones entre la industria española de defensa y la industria armamentista israelí. Este apoyo a la industria militar israelí contribuye al mantenimiento de la ocupación ilegal de Palestina y del régimen de apartheid contra su población. Una situación que existe desde hace años y que no parecen haber tenido en cuenta los gobiernos españoles al planificar las adquisiciones de armamento. El apoyo a la industria militar israelí también contribuye a las graves violaciones de derechos humanos que está cometiendo Israel desde el 7 de octubre de 2023.

Pero esta política gubernamental también tiene sus consecuencias hacia dentro. La campaña de desinformación del gobierno para ocultar su corresponsabilidad ejemplifica el déficit estructural que existe en la definición democrática de las políticas de defensa. Debería formar parte de esa política debatir si queremos comprar armamento a un país que vulnera los derechos humanos como es Israel. En el actual contexto de rearme europeo también se pone de manifiesto este déficit democrático en la definición de las políticas de defensa.

Hemos elaborado este informe para denunciar las relaciones armamentistas existentes entre España e Israel. Creemos que aportamos la suficiente información para que se abra un verdadero debate social sobre la política gubernamental en este ámbito.

[Intervención en el acto «Armas España-Israel: la complicidad continúa», celebrado en el Ateneo La Maliciosa de Madrid, el 7 de mayo de 2025, presentando el informe del Centro Delàs de Estudios por la Paz «Beneficio colateral. Relaciones armamentísticas entre España e Israel desde el 7 de octubre de 2023», elaborado por Alejandro Pozo y Eduardo Melero. El informe se puede consultar en el siguiente enlace: <https://centredelas.org/publicacions/beneficio-colateral/?lang=es>]

Albert Recio Andreu

Debates sobre el declive de la izquierda

Electoralmente, la izquierda está en declive. Un declive de larga tendencia, jalonada con cortos momentos de recuperación. Un declive que afecta tanto a la moderadísima socialdemocracia como a la izquierda radical o transformadora. Aunque los sistemas electorales, y la propia estructura de partidos, difieren de un país a otro, el retroceso es bastante generalizado. En algunos países, notoriamente Italia, ha casi desaparecido. España es actualmente un caso atípico, aunque si miramos el conjunto de ciclos electorales desde 1977 constatamos que, en muchos momentos, la izquierda transformadora ha estado al borde de la inanidad. Y ahora, tras las elecciones portuguesas y la publicación de diversas encuestas, todo apunta a que nos vamos a confrontar, de nuevo, a una situación crítica. Por eso, hoy es más necesario que nunca investigar tanto las causas de este declive como los condicionantes de la coyuntura. Es la única forma de encontrar pistas para buscar respuestas que conduzcan a revertir la situación. Durante los últimos días se han formulado planteamientos que considero que merecen cierta atención, y que paso a comentar.

Sánchez-Cuenca y la crisis de intermediación

En dos sugerentes artículos, Ignacio Sánchez-Cuenca aporta una explicación alternativa o complementaria a los diferentes intentos de explicar tanto el auge de la extrema derecha como el declive de la izquierda. En el primero ([«El “grado cero” de la democracia»](#)) se centra en considerar que la crisis de la democracia se debe a la pérdida de confianza respecto al habitual papel intermedio de partidos y a su autoridad jerárquica (que se extiende, también, a la pérdida de prestigio de la intelectualidad como referente a la toma de adoptar posiciones políticas). En sus palabras: «La digitalización nos ha enseñado a hacer las cosas por nosotros mismos en muchos ámbitos de la vida. La mayoría de los intermediadores nos resultan inútiles y detestables»; y concluye: «quizás hemos ganado en libertad y autonomía personales, pero el precio a pagar es encontrarnos en una barahúnda permanente».

En el segundo artículo ([«Una explicación del retroceso de las izquierdas en Europa»](#)), aplica este análisis al caso específico de la izquierda. Su punto de partida es que la izquierda política siempre se ha centrado en promover una propuesta que trasciende a la percepción inmediata de la clase obrera real que trata de representar. Hay algo de los viejos debates sobre la conciencia externa y el papel del partido. Para él «esta necesidad de articular y organizar una clase obrera socialista tuvo siempre un elemento paternalista», puesto que en su trabajo trataban de impulsar una conciencia revolucionaria que era todo menos espontánea. Esta necesidad de articular un pensamiento global que influye en las acciones colectivas e individuales es aún más compleja por la aparición de nuevas cuestiones, antes no consideradas, como el feminismo, la ecología o los derivados de la globalización que obligan a desarrollar propuestas más elaboradas. Ello refuerza una imagen moralista de la izquierda que «se ha vuelto especialmente antipática en nuestros días» y que choca con una «época de individualismo empoderado [...] donde nadie quiere que se le diga lo que tiene que pensar, el líder político solo tiene éxito en la medida en que se ponga al mismo nivel de sus seguidores».

Cómo única línea interpretativa resulta demasiado simple, pero aporta una cuestión crucial que tiene que ver con la formación de la conciencia, el comportamiento individual, y su traslación a la acción política. Siempre he estado convencido de que uno de los mayores lastres de la tradición marxista ha sido el olvidar el comportamiento psicológico individual. Ha habido demasiada preocupación en analizar las dinámicas estructurales y en pensar las clases sociales como espacios cerrados, y se ha olvidado el análisis de los comportamientos psicológicos. Algo en lo que sí que han trabajado mucho la derecha y el capital, para desarrollar políticas exitosas en campos tan diversos como el marketing económico, el político, o la gestión de personal. Y en el proceso al que alude Sánchez-Cuenca han jugado tanto elementos psicológicos —en buena parte explotados al máximo por las técnicas de manipulación de masas— como factores estructurales.

La izquierda histórica basó su fuerza en su capacidad de articular procesos comunitarios, básicamente utilizando métodos de adoctrinamiento parecidos a los de las diversas religiones. Una labor que pudo desarrollarse en una sociedad donde las diferencias de clase eran muy marcadas, las posibilidades de movilidad social ascendente escasas, las condiciones de vida de las masas trabajadoras eran bastante homogéneas, los roles de género muy definidos, y la actividad social extralaboral era fundamentalmente relacional y colectiva. Como apostilló el gran historiador Eric Hobsbawm, lo que definía la vida de la clase obrera británica, masculina, era el fútbol y el pub. Dos espacios de socialización primaria y creación de identidad (la inmensa mayoría de clubs de fútbol ingleses de esta época, a excepción del Chelsea, estaban arraigados en ciudades y barrios obreros, de voto laborista). Todos estos factores que producían una experiencia colectiva han sido dinamitados a partir de los años cincuenta. Algunos para bien, como la crisis de las estructuras de género, que apuntan hacia una ampliación de los proyectos igualitarios. Otros no tanto, y tienen que ver tanto con los cambios en la estructura laboral como con las formas de ocio y consumo.

El principal cambio de la estructura laboral es la quiebra de la homogeneidad (aunque siempre fue menor de lo que pensaba alguna izquierda). Un cambio que ha venido tanto por la transformación del modelo empresarial (de la empresa compacta a la empresa-red), por el cambio de las actividades (crecimiento del empleo en los servicios, en condiciones mucho más atomizadas que en los tradicionales sistemas fabriles) como, sobre todo, por la formación de una amplia capa de asalariados con formación académica que cubren espacios productivos diferentes (lo que algunos han llamado trabajadores simbólicos) y que constituyen el núcleo de la movilidad ascendente que ha ocurrido en las décadas pasadas. La aparición de este importante núcleo de trabajadores «educados» es el resultado tanto de necesidades del capital (tecnificación de los procesos productivos, aparatos burocráticos necesarios para gestionar grandes empresas, servicios especializados) como del éxito de las propias reivindicaciones obreras, tanto en el acceso a la educación como en el desarrollo de servicios públicos (educación, sanidad, etc.) que son una parte sustancial de los empleos de estos trabajadores «educados». Si a ello añadimos la llegada masiva de inmigrantes extracomunitarios (una verdadera alteración del viejo orden migratorio desde el centro a la periferia), que ocupan los empleos manuales más duros, peor retribuidos y devaluados socialmente, tenemos bastantes pistas de cómo se ha producido esta explosión de la conciencia grupal, se han fragmentado experiencias, y se han debilitado los espacios comunes. El caso de los trabajadores educados es especialmente notorio: su socialización en el proceso educativo es especialmente individualista, su «ascenso» social,

cuando se produce, se interpreta como resultado de su propio mérito (y le suele distanciar de su entorno de partida). Por contra, en algunos casos, su mayor formación intelectual les permite entender mejor la complejidad de algunos procesos, lo que explica que sea en este segmento social tan contradictorio donde la izquierda transformadora tiene su base más estable de votos. A cambio de alejarse de los otros segmentos de clases trabajadoras.

Si la estructura laboral se ha transformado, el cambio ha sido tanto o más brutal en la esfera del consumo y la vida cotidiana. La masificación del transporte rodado, por un lado, y la sucesiva incorporación de medios en actividades de ocio (televisión, vídeo, videojuegos, internet...) han propiciado formas de vida mucho más individualizadas, menos relacionales. Hasta llegar a la situación actual, donde incluso el aprovisionamiento de bienes ha pasado a ser una actividad que parte de la población realiza por medios informáticos, y el trabajo de sectores obreros devaluados. Hasta la década de 1950, la actividad comercial generaba (fuera del autoempleo de los tenderos, una parte de la clase media de la época) empleos de relativo prestigio. Un vendedor era alguien cualificado que asesoraba a su clientela. Con el desarrollo del autoservicio, el empleo se devaluó y el «consumidor» adquirió protagonismo. En la era de la compra electrónica, la intermediación desaparece, y el consumidor parece el monarca absoluto. Un monarca habitualmente mal informado, bombardeado por un enorme ejército de propaganda que promueve un consumo compulsivo y, a poder ser, adictivo. Nada que ver con el consumidor consciente y reflexivo que se requeriría para que los movimientos de consumidores pudieran tener capacidad transformadora.

He tratado de enmarcar los procesos que explican la crisis de representación y el auge del individualismo que plantea Sánchez-Cuenca. Todo apunta que es un proceso efectivamente de largo alcance, en el que a la izquierda le cuesta adaptarse. Construir la izquierda siempre ha significado levantar un proceso político desde la precariedad. Los poderes económicos tienen siempre muchos recursos, y los utilizan a discreción. Conocer de dónde vienen nuestras limitaciones, y la naturaleza de los procesos en marcha, es, al menos, una condición imprescindible para desarrollar propuestas viables.

Alberto Garzón: dos apuntes de coyuntura

En su habitual colaboración en *ElDiario*, el exlíder de Izquierda Unida ha realizado dos aportaciones de coyuntura que considero complementarias del trabajo de Sánchez-Cuenca. La primera, de abril, bajo el nombre [«Claves para una unidad realista de la izquierda»](#). La segunda, [«Portugal y España, ¿el mismo futuro?»](#), en mayo, tras el ascenso de la derecha en Portugal.

El tema central es, sin duda, el del enfrentamiento entre Sumar y Podemos por el espacio de la izquierda alternativa. Un enfrentamiento que, planteado tal cual, conducirá (en esto creo que coincidimos mucha gente) a una nueva debacle. No sólo por la división del voto, sino porque el hartazgo que provocan estos enfrentamientos suele acabar espantando a mucha gente, que deja de votar o acaba votando al PSOE. Hay tantas evidencias de que esto ocurre casi siempre que parece increíble que quien se pretende líder político lo desconozca.

Pero lo que más interesante me parece de estos artículos no es tanto su sensatez, sino el resaltar la evidencia de que en el momento actual la gestión ministerial, por buena que sea (y muchas de las cosas que se han hecho en el Gobierno por parte de Sumar o, anteriormente, de Unidos Podemos, o incluso en muchos Ayuntamientos del cambio, han estado bien), no

trasciende a una población que sólo se queda con el trazo grueso y la acción política. Garzón sugiere que la única forma de superar el impasse actual es que los ministros de Sumar pasen de hacer gestión a actuar en la arena política, con un discurso claro, con determinación. En cierta medida, es complementario del análisis de Sánchez-Cuenca; en tiempos de baja politización, hace falta una visibilidad contundente, atractiva, creíble, para movilizar al personal y animarle a votar.

No tengo claro, sin embargo, que la receta sea aplicable. Podemos se ha enquistado en una batalla mediática que sólo sirve para mantener a sus fieles (y ampliar sus fosas de separación con el resto, pues muchos de sus mensajes son más irritantes que educativos). Y Sumar está atrapado en el dilema de su presencia en el Gobierno; sabe que cualquier acción brusca podría implicar su caída, y que lo que vendría después es mucho peor (y, además, se le cargaría el muerto de la ruptura). Y se mantiene en un Gobierno obligado a hacer mil y un equilibrios parlamentarios, que frenan sus propuestas más contundentes y en el que el PSOE tiene muchas más bazas para rentabilizar lo poco o mucho que se hace. Para mayor complicación, empieza a haber tensión en su propio espacio, como lo muestra que Izquierda Unida ya ha empezado a hacer su propia campaña. Romper este círculo vicioso pasa por potenciar un liderazgo atractivo (que recupere la iniciativa que en algún momento representó Yolanda Díaz) y desarrollar una campaña política que sea lo suficientemente atractiva.

Afrontar los problemas estructurales, generar una iniciativa movilizadora

La izquierda transformadora tiene una suma de problemas estructurales (que, en parte, comparte con la descafeinada socialdemocracia), y su base social y su proyecto son mucho más complejos que en el pasado. Las formas de socialización han cambiado y alterado los procesos de adscripción. Y todo ello sin tener en cuenta dos cuestiones adicionales: el peso muerto que significa la fallida experiencia soviética, y la necesidad de ajuste en las formas de vida que comporta la crisis ecológica. Afrontar estos problemas no es sencillo. Y es aún más difícil hacerlo con pocos recursos humanos y con una serie de aliados más proclives a la bronca que a la cooperación. Pero son cuestiones que hay que enfrentar si de verdad se quiere buscar una salida aceptable a la crisis ecosocial. Exige, de entrada, construir un buen espacio de reflexión, de experimentación social, de difusión de ideas y experiencias que permite llevar a cabo un trabajo sostenido en el tiempo. Algo que debe construirse fuera de una construcción política pensada para la acción cotidiana.

Pero, en el corto plazo, hay otra tarea urgente. Más urgente que nunca, a la vista de lo que está generando el huracán Trump y la deriva ultra en toda Europa. Y sabemos, además, que la toma del poder por esta derecha ultramontana no va a significar una mera transferencia de mando. Los vientos de la derecha autoritaria y reaccionaria están conduciendo a retrocesos en derechos políticos y sociales de largo alcance. Y es evidente que sus tropelías nunca tienen una respuesta inmediata; si utilizan la coacción, el acoso y la represión, es porque saben que son medios que paralizan las respuestas, que les permitirá profundizar en su proyecto.

Por eso, aunque los plazos sean cortos, debería ser el momento de lanzar un llamamiento a la resistencia cultural, política, social. Basada tanto en la movilización como en la construcción comunitaria. Una propuesta de una acción no partidista, cívica. Que conmueva conciencias y que, cuando menos, vuelva a ser un animador social como en su momento fue el 15-M. Más que

enfrascarse en los tediosos e inútiles debates entre las élites, debemos pedir a nuestros dirigentes políticos que contribuyan a generar una corriente de acción y opinión que insufla un aliento, que llame a la gente a ser protagonista. Es más fácil que, si esto ocurre, aunque sea de rebote, se salve un declive que, de consumarse, puede condicionar el futuro social por bastante tiempo.

Pablo Massachs

Del apagón al cuadrilema energético

El capitalismo de desastre se aprovecha de las crisis para consolidar el poder y enriquecer a unos pocos a costa de muchos.

La doctrina del shock (Naomi Klein)

Todos recordamos lo que hacíamos el pasado 28 de abril a las 12:33h, el momento del apagón total en la península Ibérica. Para algunos no fue más que una anécdota, un parón forzoso del trabajo; mientras que para mucha otra gente tuvo consecuencias dramáticas y, en global, hubo pérdidas millonarias difíciles de cuantificar. En pocos días, las tertulias se centraron en el evento, y rápidamente nos hemos familiarizado con lo que para muchos eran términos novedosos: cero absoluto, generación sincrónica, isla energética, inercia sintética, etc.

A pesar de las dificultades para averiguar las causas del apagón, incluso para el operador del sistema eléctrico, en tiempo récord aparecieron voces que con toda certeza identificaron el culpable: las energías renovables. Más allá de que en todo «cisne negro»^[1] hay avispados que aseguran que lo vieron venir, la batalla contra las renovables no es nueva, y durante los años ha adoptado diferentes formas: culpar a las renovables de los aumentos de precios, bloquear el acceso al autoconsumo^[2] o, más recientemente (y de forma más sutil), la campaña a favor de alargar la vida de las centrales nucleares. Tampoco es nuevo atacar a las renovables cuando hay un apagón masivo: ya se hizo en Texas y en Australia del Sur, aunque finalmente se vio que la presencia de renovables no fue la causa de estos sucesos^[3].

El trilema del sistema eléctrico

Hoy en día, hay consenso a nivel generalizado (a nivel técnico, legislativo y social) respecto a que un sistema eléctrico ha de cumplir 3 características principales que conviven en difícil equilibrio: cumplir la seguridad de suministro, suministrar energía a un precio asumible, y garantizar la sostenibilidad. Encontrar simultáneamente el punto óptimo de los 3 vértices del trilema no es posible, así que se trata de encontrar un punto de equilibrio satisfactorio. Hay que recordar que el tercer punto clave, la sostenibilidad, se introdujo hace pocas décadas, a raíz de una mayor conciencia ambiental derivada de la constatación del cambio climático^[4], y que su consolidación como eje del trilema ha sido desigual. Sin embargo, en el sistema eléctrico Ibérico, la integración de tecnologías renovables ha sido notable, y el operador del sistema ha sido visto como un referente mundial en este aspecto.

Las energías renovables en el trilema energético

No hace tanto que las energías renovables eran también conocidas como «energías alternativas», lo que no hacía sino desvelar su falta de presencia en el mix eléctrico. Sin embargo, en pocos años las mejoras tecnológicas y de precio, así como la demanda social, han hecho que actualmente las energías renovables sean las principales tecnologías energéticas de

presente y de futuro[5]. De hecho, la fotovoltaica es la tecnología más económica, y la eólica la segunda en cuanto a coste nivelado de la energía[6]. En cuanto a la sostenibilidad ambiental, aunque la fotovoltaica o la eólica no son en absoluto inocuas, debería resultar sonrojante nombrar las centrales de carbón, gas o nucleares en un contexto de sostenibilidad ambiental, por mucho que lo diga la UE[7]. Por tanto, ante las ventajas de las renovables en precio y sostenibilidad, solo cabe atacarlas por el tercer elemento del trilema: la seguridad de suministro. Da igual que todavía no se conozcan las causas del apagón; da igual que existan tecnologías para que las renovables mantengan perfectamente la frecuencia de red. Ante un pequeño *shock* como el del apagón, hay quien ha visto la oportunidad perfecta para señalar a las renovables. Además, ha coincidido con el *crescendo* de la campaña por resucitar al zombi nuclear.

¿Qué molesta tanto de las renovables?

A pesar de los palos en las ruedas que se han ido poniendo para la implantación de las renovables, su aumento en el mix eléctrico peninsular ha sido muy destacado, y las empresas tradicionales del oligopolio eléctrico no han permanecido precisamente ajenas a este *boom* ni a sus beneficios[8]. Sin embargo, para estas empresas sería mucho más cómodo tener un sistema de generación como el de antes, con pocos actores controlando centrales muy grandes, que tener que repartir el pastel con cualquier persona que decida instalar unas pocas placas fotovoltaicas en su casa. La fotovoltaica, en concreto, es una tecnología barata y tremendamente modular, y hoy en día puede generar su propia energía: la pesadilla del oligopolio. En el otro extremo se encontraría la nuclear, que precisa de centrales enormes con una tecnología al acceso de muy pocos. Por eso, puestos a tener que aceptar la presencia inevitable de las renovables, las grandes eléctricas prefieren las instalaciones «macro» (macroparques eólicos; centrales fotovoltaicas multimegavatio), y, si se puede, mantener el parque nuclear actual con todas las ayudas estatales que les sea posible conseguir.

Avanzando hacia el cuadrilema energético

Introducir el eje de la sostenibilidad en la generación eléctrica ha sido un logro que ha marcado la evolución del sistema eléctrico ibérico en muchos aspectos: tecnologías de generación, mejora en el control de redes, planificación estratégica, etc. También ha facilitado que, una vez derogados los bloqueos regulatorios, cualquier consumidor pueda disponer de una instalación de autoconsumo renovable. Pero la situación actual dista mucho de ser óptima en cuanto a la calidad democrática del sistema eléctrico. Se siguen fomentando las grandes instalaciones, y unas pocas empresas siguen controlando la generación, distribución y comercialización en porcentajes escandalosos[9]. Por eso es necesario pasar del trilema al cuadrilema energético: frente a las campañas de desprestigio de las renovables y en pro de la nuclear, urge avanzar hacia un sistema que no solo mantenga el eje de la sostenibilidad, sino que también tenga como aspecto principal la generación distribuida, con la mayor cercanía posible entre generación y consumo y la participación del mayor número de actores posibles. De lo contrario, siempre estaremos a merced de los intereses que unos pocos quieran imponer al resto, aún en contra de las necesidades sociales, económicas o ecológicas de la mayoría.

Notas

1. La teoría del cisne negro, de Nicholas Nassim Taleb, aplica para los sucesos sorprendentes y de gran impacto. Según la teoría, cuando suceden este tipo de eventos aparecen

explicaciones a posteriori que lo racionalizan, haciendo de esta forma que parezcan predecibles y esperables, cuando en realidad no lo eran ?

2. Ya en 2012 (Real Decreto-ley 1/2012) se suprimieron los incentivos económicos para la implantación de energías renovables, con una campaña mediática que acusaba a las energías renovables de haber disparado los costes del sistema eléctrico. Posteriormente el conocido como «impuesto al sol» (en realidad un peaje de respaldo que apareció en el Real Decreto 900/2015) bloqueó de facto las instalaciones fotovoltaicas por hacerlas inviables económicamente. ?
3. Terrazzino, Hernan. «Lecciones del apagón de South Australia de 2016», *La Vanguardia*, 6 de mayo de 2025. <https://www.lavanguardia.com/participacion/lectores-corresponsales/20250506/10646039/lecciones-apagon-south-australia-2016.html> ?
4. Puntualmente, ha habido sucesos que han puesto el énfasis en uno de los ejes clave. Por ejemplo, a raíz de la catástrofe de Fukushima, hubo varios países que pararon sus centrales nucleares o renunciaron a este tipo de energía, como Japón o Alemania, poniendo así un mayor énfasis en la sostenibilidad. ?
5. La nueva demanda eléctrica fue atendida en 2024 en su mayoría por las energías renovables (38%), seguidas por el gas natural (28%). Además, la nueva potencia instalada de energías renovables (700 GW) supuso un récord anual por vigésimo año consecutivo. Barrero F. Antonio. «El mundo ha instalado en 2024 siete mil megavatios de potencia nuclear y 700.000 de renovables». *Energías Renovables*, 24 de marzo de 2025. <https://www.energias-renovables.com/panorama/la-demanda-mundial-de-energ-a-ha-20250324> ?
6. «Levelized Cost Of Energy (LCOE)». Acceso 25 de mayo de 2025, <https://www.transicionenergetica.es/energias-renovables/lcoe/> ?
7. «Taxonomía: el Parlamento acepta incluir el gas y la energía nuclear». Acceso 25 de mayo de 2025, <https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220701IPR34365/taxonomia-el-parlamento-acepta-incluir-el-gas-y-la-energia-nuclear> ?
8. Endesa, Iberdrola y Naturgy, además de todo el parque nuclear (7 GW) disponen de más de 36 GW de potencia instalada en energías renovables Masa, Raúl. «Iberdrola, Endesa y Naturgy produjeron tanta energía con nuclear como con renovable en 2023». *Economía Digital*, 3 de marzo de 2024, <https://www.economiadigital.es/empresas/iberdrola-endesa-naturgy-nuclear-renovable.html> ?
9. A pesar de que hace décadas que se liberalizó el sector eléctrico en España, éste sigue estando dominado por unas pocas empresas. Por ejemplo, Endesa, Iberdrola y Naturgy tienen el 80% del negocio doméstico. Además, estas 3 empresas y EDP controlan el 95% de la red de distribución y gran parte de la generación. ?

Álvaro González Montero y Richard Cleminson

Entre broma y broma, la verdad asoma: la liberación LGTBQ en la Costa del Sol de los sesenta

¿Cuánto de verdad hay en una broma? ¿Tiene sentido entender que una broma equivalga a una tontería, una locura, una incongruencia? Al calificar algo de broma, hacemos ver que se trata de algo cómico y gracioso, a la vez que se le quita seriedad e importancia. Sin embargo, el chiste puede ser, al mismo tiempo, tanto un descalificativo como una estrategia de resistencia frente a ideologías hegemónicas y regímenes autoritarios. Comprender el funcionamiento de la broma es clave para entender la resistencia de grupos socialmente marginados, tal y como demuestra el siguiente ejemplo que ocurrió en la última etapa del régimen dictatorial franquista en una localidad costera de la provincia de Málaga.

En 1969, el alcalde de Marbella, Paco Cantos, calificó como broma la acción de pegada de carteles (a modo “agitprop”) que tuvo lugar en San Pedro de Alcántara, el 22 de enero, quitándole importancia ante las autoridades a cuya atención había llegado esta acción. Pongámonos en situación: seis carteles que piden “la liberación del mariquita”, escritos en hojas de almanaque de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ronda, aparecen pegados en algunas calles de San Pedro, una pequeña localidad perteneciente al municipio de Marbella. No se sabe quién los colocó ni cuánto tiempo permanecieron visibles. Parece que no mucho, a juzgar por la actuación de la policía local, que pasaron el asunto de inmediato a la guardia civil. Aún no se han encontrado los carteles originales, pero los mensajes fueron transcritos en una [nota informativa](#) de la guardia civil para el gobernador civil de la provincia de Málaga. Tampoco se sabe a ciencia cierta el número de autores o si fue obra de una sola persona. Sin embargo, sí que parecen tener una estrecha relación con la existencia de un bar clandestino, Miss Dragón, en el que una clientela ecléctica se reunía para ver espectáculos de transformismo. El ambiente en torno a este bar ha sido recreado en una novela, titulada *Miss Dragón*, escrita por Miguel Ángel Parra, que ha llevado a cabo una cuidadosa labor de documentación.

Hay que reconocer que las proclamas que aparecen en los carteles tienen un cariz claramente humorístico: “arriba el tercer sexo” o “solo queremos que algunos hombres [...] nos deje la Juana”. Incluso en la frase “día de la liberación del mariquita”, el término “mariquita” tiene una connotación más ligera y coloquial que el término más médico, al menos en aquella época, “homosexual” – aunque la mención a un tercer sexo parece indicar que veían la identidad sexual estrechamente relacionada con la identidad de género. Sin embargo, estas mismas proclamas proponen la “igualdad de oportunidades” o la “liberación del mariquita”, dos ideas que, en el año 1969, tenían una valencia revolucionaria. Por supuesto, este tipo de acciones reivindicativas, aunque relativamente frecuentes en el tardofranquismo, podían acarrear problemas con las autoridades. En este sentido, no debemos olvidar la existencia de la Ley de Vagos y Maleantes, una ley que se creó en época republicana pero que el régimen franquista modificó para incluir, entre otras categorías, las relaciones homosexuales como delito. Las consecuencias de ser homosexual eran por lo general más duras para aquellas personas que no pertenecían a las clases altas e incluían penas de prisión e incluso trabajos forzados.

Si bien ya hemos estudiado en profundidad algunos de los aspectos históricos y culturales que

rodean a esta acción y este lugar en concreto, tales como el auge del turismo en el tardofranquismo, o los incipientes cambios en sexualidad y género dentro del régimen franquista, así como la propia naturaleza verídica de los hechos, una de las cuestiones que aún requieren un mayor análisis es la de la seriedad o no de la acción. De hecho, cuando comenzamos a indagar al respecto, uno de los primeros comentarios que recibimos de algunos otros investigadores fue, precisamente, que era probable que solo se tratara de una broma intrascendente. Un chiste, una gracia, algo que, a primera vista, carece de la importancia necesaria para poderse considerar desde el punto de vista histórico. Conviene, sin embargo, analizar y desmontar esta afirmación, ya que este punto de vista tacha de irrelevante evidencia que muestra como los protagonistas de esta acción, forzados por la situación social marginal en la que vivían, tenían que resguardarse en lo chistoso para poder expresarse.

Es en este contexto donde la noción de broma que se observa al final de la nota informativa deviene más importante, ya que aparece un mensaje manuscrito que reza: “dice Cantos que cree ha sido una broma”. La declaración del alcalde de Marbella de aquella época, Paco Cantos, de que se trata de una broma puede interpretarse a través del concepto del desplazamiento que Sigmund Freud explica en su *El chiste y su relación con el inconsciente*. En este sentido, podemos entender la etiqueta de broma como aquello que permitía a las autoridades desplazar el componente de reivindicación, lucha e, incluso, asociacionismo local (el cartel menciona grupos de “mariquitas” diferenciados según su procedencia) hacia el campo de lo anecdótico, lo aislado, lo débil, lo individual – una estrategia de sobra conocida. También se puede advertir otro mecanismo freudiano, el del contrasentido: en la ideología dominante del régimen franquista, las proclamas de los carteles tienen tan poco sentido que no pueden más que ser una broma. Por ende, una actuación reivindicativa que ponía en cuestión el género y la sexualidad heteropatriarcal se despachó enseguida como un chiste cualquiera, para evitar que el gobernador civil la considerara seriamente.

Esta falta de consideración es más compleja de lo que pueda parecer a simple vista. Si bien los mecanismos de contrasentido y desplazamiento se encontraban operativos, esto se debe a que tenían una razón de ser en los propios individuos que llevaron a cabo la pegada de carteles. En el fondo, estas personas (o esta persona) eran más que conscientes del sistema autoritario y opresivo en el que vivían, en especial en lo que respectaba a la moral sexual. Aunque se atrevieran a lanzar estas proclamas, quizás animados por la situación de inestabilidad en el país aquel año, dos días antes de la instauración de un estado de excepción que el gobierno franquista llevó a cabo el 24 de enero de 1969, en un clima de revueltas estudiantiles, la realidad de ser perseguidos por la justicia podía ponerlos en una situación más que complicada. De ahí la aclaración, en los propios carteles, de que no buscaban “comunismo” o “marihuana”, dos conceptos asociados a las manifestaciones de estudiantes. Esto subraya la comprensión que estos individuos tenían de su propio mundo; a fin de cuentas, esta pegada de carteles tuvo lugar el mismo día del asesinato de Enrique Ruano en Madrid, un joven estudiante universitario y militante antifranquista, a manos de la policía franquista.

Más allá de este hecho en particular, la Costa del Sol ya tenía una cierta tradición de lugar turístico para homosexuales. En concreto, Torremolinos, por aquel entonces un barrio más de la ciudad de Málaga, donde hubo una cierta permisividad en las costumbres sexuales, como bien mencionaba la prensa de la época como los diarios *Sol de España* o *La Tarde*. Esto cambió bruscamente en el año 1971, cuando la policía llevó a cabo una redada en la zona de

Torremolinos frecuentada por homosexuales, el Pasaje Begoña, donde fueron arrestadas 114 personas de diferentes nacionalidades. La situación de Torremolinos hacia finales de los sesenta es paralela a la de San Pedro, con diferencias de tamaño del núcleo urbano. Miguel Ángel Parra lo describe en detalle en su novela *Miss Dragón*, y muestra el cierto grado de permisividad existente en la zona, lo que podría catalogarse como un “espacio de excepción”. Este espacio se formó por una alianza tácita entre los propios usuarios, que no eran solo homosexuales o transformistas, sino también turistas, lugareños, aristócratas, miembros de la jet-set, y sus patronos, quienes defendían a sus empleados. Esto es así porque los transformistas que llevaban a cabo espectáculos en el bar también trabajaban como empleados domésticos en las casas de la burguesía marbellera. Esta especie de alianza entre la clase trabajadora y la clase alta, si bien problemática en muchos aspectos, demuestra que la moral nacionalcatólica franquista no era tan ubicua y generalizada como a veces se interpreta. Esto no significa que no hubiera mucha homofobia, que la había, ni que no estuviera teñida de clasismo. Lo que sí indica es que las actitudes morales respecto a la sexualidad no eran tan extremas y uniformes como a veces se plantea y que podían adaptarse, sobre todo cuando se trataba de personas que se consideraban cercanas o útiles. De ahí que la figura del “mariquita de pueblo”, una figura muy maltratada, pero para nada extraña en el franquismo, no fuera necesariamente eliminada, sino que servía en sí para cristalizar la idea de lo femenino como lo “otro”: lo opuesto a la masculinidad, lo relegado a la casa y a las tareas domésticas.

Entre bromas asoma la verdad, como bien dice el refrán que titula este artículo, y prestándoles la debida atención se revela una gran cantidad de información sobre determinadas épocas históricas y su ideología inconsciente. El estudio de evidencia de este tipo, limitada en su contenido pero que puede generar ricas y variadas interpretaciones, es de importancia clave para una historia LGTBQ que incluya tanto a los centros, Torremolinos o Barcelona, como aquellas localidades en las periferias sociohistóricas. Asimismo, estas nuevas lecturas añaden detalles necesarios para hacer más compleja nuestra memoria histórica, a través de la investigación de las estrategias de resistencia ante el fascismo y los autoritarismos. A su vez, esto nos puede ayudar a entender y resistir la oleada política ultraconservadora actual, que está teniendo un impacto claro en colectivos socialmente marginados, tales como las personas trans o los migrantes. La lucha por la igualdad social y la redistribución de la riqueza no debería ser, queridas lectoras, ninguna broma.

Enrique Javier Díez Gutiérrez

Combatir la guerra híbrida neocortical del actual neofascismo

El reciente libro titulado [*Guerra cognitiva y cultural. Claves para combatir el auge del neofascismo*](#), nos ofrece un análisis del actual auge del neofascismo y nos da claves para combatir la guerra híbrida neocortical y el *neofascismo* que éste impulsa. Un auge que parece habernos pillado desprevenidos como les pilló a la Europa de los años treinta el avance del fascismo y el nazismo.

Rearmar la barbarie

En el ciclo neoconservador que se despliega desde los ochenta con fuerza, y prosigue en un ascenso aún más rápido desde inicios del siglo XXI, la guerra ha sido y es parte fundamental de la dominación del sistema, en un mundo donde las grandes potencias se disputan recursos estratégicos, mercados, posibilidades de futuro en este capitalismo de saqueo, que condena a países y personas al empobrecimiento y la desesperación. Mientras Europa impulsa un plan «rearme» que supondrá recortar 800.000 millones de euros de inversión social en sanidad, educación, pensiones y servicios sociales para destinarlo a armamento.

Europa, en su loca carrera suicida, ha optado por cavar aún más su propia tumba, como colonia al servicio de un imperio que se derrumba, siguiendo los dictados del último nerón enloquecido que, en su delirio, conduce al mundo al abismo, sin importarle arrastrar consigo a buena parte de la humanidad. Vemos cómo los gobiernos europeos asumen el marco narrativo del neofascismo sobre la seguridad de los Estados basado en el aumento del gasto militar (comprado a EE. UU.) en detrimento de la seguridad humana que es la auténtica preocupación de la población: salud, educación, trabajo, vivienda y derechos sociales.

Porque ya no se trata únicamente de una guerra geopolítica por los recursos del planeta cada vez más escasos. Esa guerra económica (y militar cuando no es suficiente la económica) en la que una élite no ha dejado de enriquecerse, incluso en los peores momentos de crisis, catástrofes o pandemia, mientras la gran mayoría es expoliada de la posibilidad siquiera de acceder a una vida digna. Es la sociedad del 1/95 que nos muestran los informes de Oxfam Intermón, donde el 1% de millonarios poseen ya más riqueza que el 95% de la población mundial y donde la democracia ha sucumbido por la concentración de poder en manos esa oligarquía global.

Se trata de una guerra híbrida, una guerra de tercera generación, como les gusta denominar a los actuales «estrategas» de la guerra. Pero no en el sentido que éstos plantean, sino en el sentido de una guerra cognitiva, neocortical y cultural, que han desatado en todos los frentes, en la que no se hacen prisioneros. Es una guerra por la «conquista de nuestras almas», del «sentido común», del «imaginario social», de los sueños, del futuro, de la propia capacidad de utopía y esperanza.

Guerras de tercera generación

Desde que Margaret Thatcher, la adalid neoliberal junto con Ronald Reagan y Juan Pablo II,

popularizara aquella expresión de «no hay alternativa» (There is no alternative –TINA–), se ha desatado una guerra híbrida total en todos los frentes, en la que ya no se hacen prisioneros. Una guerra que se está dando en las narrativas que se expanden a través de las redes sociales y los medios de comunicación e incluso en la construcción de un neolenguaje que ha sido capaz de resignificar los términos tradicionalmente atribuidos a la izquierda (hoy la libertad ya no es la libertad republicana frente a la tiranía..., es la libertad de «tomarte una caña en el bar en plena pandemia»).

La extrema derecha lee a los intelectuales de izquierda, estudia sus escritos, analiza sus propuestas, disecciona sus planteamientos. Y los reutilizan, pero con fines totalmente opuestos. Así han aprendido de Gramsci que el poder no se ejerce solo por medio de la fuerza física, de la guerra militar, de la conquista económica, sino también por medio de la influencia social para generar hegemonía ideológica, buscando que la gente dé su consentimiento a la dominación, y utilizando para ello las instituciones formales (como la educación), pero también las informales (los medios culturales y sociales).

Este *neurofascismo* ya no solo aboga por el modelo disciplinario y violento de conquista. Han aprendido de Antonio Gramsci, de Michel Foucault, de Byung-Chul Han, que para todo «imperio» que quiera perdurar, el gran desafío consiste en domesticar las almas. Ya no se trata solo del poder militar y económico, sino también de la capacidad de persuasión. Pasado el tiempo de la conquista por la fuerza, llega la hora del control de las mentes y las esperanzas. La *McDonalización* es más profunda y duradera en la medida en que el dominado es inconsciente de serlo, que es incluso partícipe apasionado en su afán de ser parte del sistema.

La manufactura del consentimiento

En esta guerra neocortical se utiliza lo que Chomsky denomina la «manufactura del consentimiento». En la cual colabora una nueva clase intelectual, financiada por los ultrarricos, que triunfa porque le dice al poder lo que quiere oír. Son los denominados «líderes de pensamiento» en la academia, «tertulianos» en los medios e «influencers» en las redes sociales. Coinciden en que nuestro mundo funciona razonablemente bien, que su orden es adecuado y que el reparto social es el menos malo posible. Y, a continuación, promocionan algún mantra de «pensamiento positivo», para que en el futuro «todo te vaya mejor» en el terreno del bienestar individual y el optimismo en sus diferentes versiones, a través del «mindfulness», de la autorrealización o del emprendimiento, como forma de explotar los propios límites, «salir de tu zona de confort» y «tomar las riendas de tu propia vida». Porque, nos aseguran, que toda crisis es una oportunidad y si no la aprovechas es que el responsable de tu desgracia solo «eres tú». Convirtiendo así a la propia víctima en culpable de su situación.

La baza definitiva de estos «gurús» consiste, no obstante, en decirnos una y otra vez que no hay ninguna alternativa digna de consideración, que «otro mundo no es posible», que éste es el mejor (o el único) de los mundos posibles. Puede que sea imperfecto, dicen, pero es el único sistema viable. Solo hace falta «orden y disciplina», «trabajo duro» y «esfuerzo» para recuperar otra vez ese pasado mítico de una «nación grande».

Este *neurofascismo* paraliza el entendimiento y la ausencia de alternativas paraliza la acción. En la conciencia colectiva se instala la tesis de la futilidad e impotencia del empeño humano individual o colectivo, pues nada se puede cambiar. Por eso, incluso la lucha de los grupos y

personas desfavorecidas está siendo por la inclusión en el sistema, por ser explotados por el sistema, ya no para cambiarlo, transformarlo y, mucho menos, para hacer una revolución y derrocarlo y superarlo.

Es el nuevo orden hegemónico, que, a través de los medios de comunicación y las redes sociales ayuda a caminar hacia la «aldea global», «imponiendo el pensamiento único» y silenciando cualquier disidencia acusándola de practicar o alentar el «terrorismo». Lo cual ha supuesto la criminalización de todo movimiento de oposición. Terminamos actuando de común acuerdo, sin tener necesidad de ponernos de acuerdo. Nuestra «comunidad» con las ideas dominantes hace inútil la conspiración.

Como dice Howard Zinn la desobediencia civil no es nuestro problema. Nuestro problema es la obediencia civil. Nuestro problema es que multitud de personas en todo el mundo ha obedecido los dictados de los líderes de sus gobiernos y han ido a la guerra, donde millones han muerto por causa de esa obediencia... Nuestro problema es que en todo el mundo la gente es obediente ante la pobreza y el hambre, ante la estupidez, la guerra, el genocidio palestino y la crueldad. Nuestro problema es que la gente es obediente mientras las cárceles están llenas de ladronzuelos y los grandes ladrones rigen el país. Éste es nuestro problema.

La impotencia y la desesperación como espacios para incubar el odio

La eficiencia de este sistema reposa fundamentalmente en esa guerra neocortical del *neurofascismo*, que produce mecanismos de sumisión que van más allá de la tierra conquistada y dominada en un proceso de interiorización colectiva del modelo que asume ampliamente la lógica del sistema, que se adhiere «libremente» a lo que se le induce a creer.

El capitalismo genera así lugares de desesperación y frustración, que están siendo ocupados con una velocidad inusitada por los operadores de la ideología del odio y la manipulación emocional, una estrategia de difusión y permeación de la subjetividad altamente eficaz. Asistimos a la disputa por el relato y a la modelación de subjetividades afines a este orden de barbarie que alimenta sin cesar la base social de la ultraderechización política.

Marcos Roitman, María José Rodríguez o Peter McLaren desvelan en ese libro publicado en 2025, por la editorial La Vorágine, [*Guerra cognitiva y cultural. Claves para combatir el auge del neofascismo*](#), algunos ejes para problematizar nuestro tiempo y entender que la violencia estructural de amplio espectro en la que vivimos inmersos, discursiva, simbólica, ideológica, social, económica, emocional, es parte del capitalismo neoliberal que ha hecho de la guerra neocortical una estrategia necesaria para su reproducción, equivalente a la concentración de poder y riqueza que genera, al nivel de contradicciones que desata y al control social que requiere para mantener su base social de reproducción.

Gestionar el miedo y la inseguridad

Son tiempos de nuevas guerras que ya no requieren necesariamente de frentes de armados, sino que se libran contra los ciudadanos de a pie; donde no se necesita siquiera disparar una bala, sino gestionar la incertidumbre, el miedo, la inseguridad en todas sus manifestaciones al mismo tiempo que canalizar el odio hacia el igual, que pasa a ser percibido como una amenaza, el que viene de afuera, el que tiene otro aspecto, el que se organiza para resistir la debacle. Guerras en

las que el uso de la información, la producción dirigida del discurso, la modelación del sujeto a través del proceso educativo y la incidencia en los procesos cognitivos, directamente vinculados a la toma de decisiones, son fundamentales; más aún cuando las sofisticadas tecnologías de información y comunicación, así como la cibernética, tienen la capacidad para actuar con un amplio potencial de despliegue en el ámbito público, a una velocidad que hace de la inmediatez su característica, permeando las prácticas de la vida cotidiana.

En esta batalla semiótica y performativa contra la democracia, la igualdad y la justicia social, las plazas públicas han sido ocupadas mediante poderosas técnicas desinformativas que difunden vía WhatsApp, Instagram o TikTok, y que polarizan y crispan los debates en los bares, en las cenas con los «cuñados», en cualquier escenario cotidiano, repitiéndolas *ad nauseam*. El miedo y el malestar social son las nuevas armas de guerra que se emplean a discreción, de forma altamente eficiente. Porque en la guerra neocortical el objetivo es la mente y el corazón de cada sujeto. Menos mal que en la segunda parte del libro se ofrecen alternativas a esta *neuropolítica* de la barbarie en la que se asienta el actual auge del neofascismo que se une así a la dominación persistente del capitalismo neoliberal como único espacio de lo posible.

[Enrique Javier Díez Gutiérrez es catedrático de la Universidad de León. Director de la Investigación Europea «Construcción de una Europa inclusiva y democrática frente al auge del fascismo y la xenofobia». Premio CODAPA 2023 de la Confederación Andaluza de AMPA por su defensa de la educación pública y la difusión de alternativas para construir una pedagogía inclusiva, democrática y del bien común. Entre sus últimas publicaciones se encuentran: *Guerra cognitiva y cultural: Claves para combatir el auge del neofascismo* (La Vorágine, 2025); *Emprendimiento educativo: Educar en las reglas del capitalismo* (Miño y Dávila, 2025). *Pedagogía del Decrecimiento* (Octaedro, 2024). *La memoria histórica democrática de las mujeres* (Plaza y Valdés, 2023)]

Albert Recio Andreu

Fusiones bancarias

Cuaderno de locuras: 21

Es incierto cómo acabará el culebrón de la fusión del BBVA y Banc Sabadell. Sobre todo, por su carga política, que va mucho más allá del mero cálculo financiero. Hay una batalla entre élites económicas que se ha trasladado al espacio de la confrontación territorial. Una enésima repetición del Catalunya versus España, ahora en versión financiera.

La verdad es que, si uno atiende a la propiedad de ambas entidades, difícilmente les puede asignar ningún tipo de nacionalidad. El BBVA tiene su origen en la banca vasca (Banco de Vizcaya y Banco de Bilbao), dos de los grandes grupos bancarios beneficiados por el *statu quo* bancario impuesto por el régimen de Franco tras la victoria militar para agradecer su colaboración. Tras la fusión de los dos bancos vascos, el gran salto se produjo en 1999, cuando el BBVA absorbió a la banca pública Argentaria, un regalo del Gobierno de Aznar que puso al frente del mismo a su amigo del colegio Francisco González. Éste se preocupó de eliminar la influencia de las antiguas familias vascas sobre el banco. En la crisis bancaria, el BBVA acabó absorbiendo a gran parte de las pequeñas cajas catalanas reunificadas en Unnim y Catalunya Banc. El Sabadell tiene una historia diferente; tradicionalmente, era un banco local ligado a la industria textil (y, posteriormente, metalúrgica de la ciudad). Empezó una política de expansión, con pretensiones de gran banco, de la mano de Josep Oliu. Hijo del antiguo director del banco, tras un corto período de izquierdismo juvenil en su época estudiantil, pasó a ser un ambicioso banquero con ganas de influencia social (ha sido también el presidente de la Fundación Fedea, uno de los *think tanks* más influyentes de política económica). Llevó a cabo una sucesión de compras de pequeños bancos (Herrero, Atlántico, Urquijo, Guipuzcoano) que culminó, en la crisis financiera, con la adquisición de la levantina CAM y el Banco Gallego. Un crecimiento en parte orientado a obtener el tratamiento de banco «que no puede quebrar». Más allá de la historia, lo que resulta vistoso es que ambos bancos están controlados por diversos fondos financieros, figurando en ambos como primer accionista el *megafondo* estadounidense Black Rock. No hay ni rastro de grandes inversores, españoles, vascos o catalanes entre los principales accionistas. Más bien, la batalla se dirime entre élites gestoras y grandes fondos de inversión. Lo único que quizás influye a la hora de explicar la movilización catalana contra la absorción es la experiencia anterior que tuvo BBVA al comprar Unnim y Catalunya Banc, donde desmanteló todo el atisbo de banca amable que mantenían las viejas cajas locales.

Tras la crisis de 2007-2008, el sistema financiero español se vio sometido a un brutal proceso de concentración, generosamente financiado por el Estado (a costa de los ajustes en políticas sociales). Esta concentración ha dado bancos más fuertes, menos empleo, menos servicios a los clientes, cierres de oficinas. Y la continuación de los abusos y los malos tratos que siempre ha caracterizado al sector. Basta ver la diferencia de los bajos tipos de interés que pagan los bancos a sus clientes y la remuneración que han obtenido los bancos con sus depósitos en el Banco de España (3,7% de interés, 8.000 millones de euros ganados sin hacer nada)^[1]. Sin perder de vista la obscena campaña lanzada por los bancos contra un impuesto moderado en época de inflación y beneficios desbocados. O la experiencia colectiva de lo que ha significado el proceso de concentración y racionalización del sector en términos de atención a los clientes, especialmente a

los de menor nivel económico, y de empleo. Otra fusión más significaría un reforzamiento del oligopolio bancario, y el peligro de un nuevo descenso en la calidad de los servicios. No hace falta ser nacionalista de uno u otro bando para entenderlo, aunque lógicamente es en Catalunya (y en alguna otra comunidad como el País Valencià y Asturias) donde es más temida por la mayor implantación del Sabadell. Aunque no vayamos a llorar porque una élite empresarial pueda perder su estatus y el control de un banco.

Que la CNMC haya generado un informe favorable a la operación, tras negociarlo con el BBVA, no es sorprendente. El estrecho esquema intelectual que se aplica a la noción de competencia casi nunca es una traba a los procesos de concentración de capital. Que el Gobierno tome algunas distancias tampoco sorprende, pues está obligado a tener una visión más comprensiva y teme, además, el impacto que su decisión puede tener en sus equilibrios políticos (empezando por el propio Gobierno y continuando con sus aliados parlamentarios). Más insólita parece la maniobra de la UE, una injerencia en toda la regla. Sorprendente porque prioriza el crecimiento de grandes bancos, los bancos sistémicos —a los que no se puede dejar quebrar— ante cualquier otra consideración. Tras la brutal crisis bancaria de 2008, las masivas ayudas a los bancos y las políticas de austeridad, parecía que debería abrirse una fase de estricta regulación, de reducción del riesgo que generan los macros bancos, de poner vallas a las fórmulas financieras más arriesgadas. Pero ni casi nada de ello se ha hecho (se están dando carta de normalidad a las *cibermonedas*, una nueva fuente de especulación y sobresaltos), y sigue apostándose por reforzar el poder de los grandes grupos financieros.

El sistema financiero siempre ha tenido un componente especulativo y una enorme capacidad de orientar la vida económica. El intenso proceso de financiarización de las últimas décadas no sólo ha consolidado oligopolios bancarios, sino que también ha generado una multiplicidad de mecanismos financieros que están en la base de la enorme concentración de riqueza de los megarricos (incluyendo en ello el circuito de paraísos financieros, algunos de los más importantes en la propia UE, como Luxemburgo, Irlanda o Países Bajos), y ha cambiado incluso la gestión de muchas empresas productivas ahora gestionadas por fondos. Bastante tiene que ver este modelo con la especulación en la vivienda que padecen muchas grandes ciudades.

Necesitamos otros modelos de financiación. Que faciliten el acceso a la vivienda, que promuevan de verdad la transición ecológica justa, que favorezcan el desarrollo de una economía social, que traten bien a la gente, que ayuden al conjunto de la sociedad. En España, se perdió la oportunidad de promoverlo a través de la red de cajas de ahorro que cayeron en las manos de las élites especuladoras locales y de gestores insensatos. Otros países, por ejemplo Alemania, han tenido más visión y mantienen una red de banca regional. Tenemos también la experiencia, modesta, de la financiación alternativa con ejemplos tan respetables como Fiare o el Coop 57. Más allá de la batalla actual, lo que debería ser urgente es crear mecanismos financieros, bancas públicas bien orientadas que podrían jugar, por ejemplo, un papel activo en la política de vivienda. Precisamente, lo que se perdió cuando se liquidó el antiguo Banco Hipotecario y se incluyó en el regalo público que hizo el estado al BBVA. Sea cual sea el final del culebrón BBVA-Sabadell (que ha dado lugar a algunos de los mejores spots publicitarios de los últimos tiempos), el esfuerzo de la izquierda debería concentrarse en conseguir un mayor control regulativo y en promocionar un sistema financiero público.

1. Andreu Missé, «[Beneficios privados y costes públicos](#)», *El País*, 5 de mayo de 2025. ?

Ensayo

Antonio Antón

Perspectivas de la izquierda alternativa

La fragmentación de la izquierda alternativa y su reconfiguración y renovación es un campo complejo y delicado, pero necesitado de análisis objetivo y constructivo para contribuir a su recomposición. Tiene implicaciones para la conformación de las izquierdas y la gobernabilidad progresista del país, en un marco de cierto agotamiento del ciclo de progreso en España. Acabo de publicar un libro, *Encrucijadas. Para la democracia, las izquierdas y el feminismo*, sobre todo ello. Aquí voy a intentar clarificar los diagnósticos y propuestas existentes para abordar su problemática trayectoria.

Doy por supuesta la complejidad de los conceptos 'izquierda' y 'alternativa', y las controversias derivadas de la adjudicación de pertenencias de los distintos grupos políticos, así como la experiencia de la colaboración y la división entre ellos, junto con la voluntad legitimadora de sus élites dirigentes y sus intereses corporativos por reforzar su estatus.

Dejo al margen al Partido Socialista, considerado ambivalente en este eje izquierdas/derechas, con un componente doble, conectado con el poder establecido y vinculado con una amplia base social de izquierdas. Por otro lado, no entro en la valoración de la izquierda nacionalista y sus relaciones con las izquierdas estatales o confederales.

Señalo la importancia de la interacción entre las izquierdas sociales y las políticas; entre la acción sociopolítica de las movilizaciones sociales con sus procesos específicos de articulación, y la construcción de los campos electorales y su expresión político-institucional. Es una cuestión que se suele dejar de lado en las interpretaciones más politicistas o institucionalistas.

Me refiero, por tanto, al conglomerado en torno a la coalición Sumar y a Podemos, dando por supuesto que son fuerzas de izquierda (o progresistas), a la izquierda del Partido Socialista, con políticas similares y, al mismo tiempo, diferencias estratégicas y de alianzas significativas, pero diferenciado respecto de las derechas y, particularmente, con la mayoritaria identificación de izquierdas de sus bases sociales y su militancia, con valores democráticos comunes.

De entrada, hay que hacer una precisión relevante. Normalmente, en los análisis políticos no se valoran suficientemente las características de la base social y electoral de izquierdas, las dinámicas que las conforman y las tendencias sociopolíticas y culturales, en los contextos concretos de cada etapa. Se suelen centrar en las particularidades de los grupos dirigentes y sus intereses, discursos y estrategias. Con ello se pierde un necesario enfoque sociohistórico que explique las tendencias sociopolíticas de fondo y poder aventurar las dinámicas previsibles y las respuestas más realistas y transformadoras. En ese sentido, es cierta la idea de que lo mejor existente en España es esa base socioelectoral crítica, la izquierda social y cultural.

El declive de la izquierda alternativa

Desde 2019, más de la mitad del electorado alternativo estatal —unos seis millones—, expresado en los años 2015/2016, tras el amplio proceso de protesta social progresista de los años 2010/2014, ha sido recuperado por el Partido Socialista, la izquierda nacionalista y algo la

abstención. La última estimación de voto del CIS, de abril, da un 6,2% a Sumar y el 4% a Podemos (en las elecciones europeas, 4,67% + 3,30%, respectivamente). Hay una dinámica de descenso del voto a la coalición Sumar que, conjuntamente, había llegado hasta el 12,3% y tres millones de votos en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, y de ascenso de Podemos; incluso alguna encuesta privada augura cierto empate, sumando entre ambas formaciones algo más del 10%, hasta unos dos millones y medio de votos, y unos ocho escaños cada una.

Su transformación en escaños, dada la normativa electoral, al ir por separado se vería perjudicada todavía más, con una disminución de la representación parlamentaria alternativa. Los 31 escaños en total (26+5 en el reparto inicial entre ambas formaciones) en 2023, con esos datos del CIS, con un sesgo favorable a las dos formaciones gubernamentales, y considerando otros estudios demoscópicos, se reducirían hasta 4/6 para Podemos y 9/16 para Sumar. Su reparto, con sus respectivos intereses y expectativas, podría ser: Movimiento Sumar, 3/5; Izquierda Unida, 3/4 (Andalucía); Catalunya en Común, 3 (Barcelona); Más Madrid, 2 (Madrid); Compromís, 2 (Comunidad Valenciana).

La particularidad es que los escaños de Movimiento Sumar y de Podemos saldrían en esas cuatro zonas, en competencia entre ellos y con esos cuatro grupos territoriales, además de la polarización por ser cabeza de lista a la presidencia del Gobierno. Con los mismos votos, conjuntamente, se podría acceder a unos 6/8 escaños más en las provincias medianas, cuya adjudicación volvería a ser complicada en una posible negociación o proceso de primarias.

Por otro lado, la incorporación de líderes de Movimiento Sumar a las listas del Partido Socialista es dudoso que consiguiese el desplazamiento de su base electoral hacia él; es decir, al propio PSOE, por mucho que pretenda absorber una parte relevante de ese espacio para intentar remontar y gobernar en solitario, le sería poco operativo. Menos interesante sería para la dirección de Movimiento Sumar, que disolvería su base social y su proyecto político.

Al mismo tiempo, esas cuatro formaciones territoriales —considerando el peso electoral y municipalista de IU, sobre todo, en Andalucía— tienen suficiente entidad para mantener su actual base social, conservar esa representación institucional, quizá algo disminuidas, y frenar un poco el flujo hacia el PSOE (o hacia Podemos). Aun así, *queda pendiente el gran problema: conseguir suficiente representatividad parlamentaria por parte del conjunto de ese espacio alternativo para contribuir en la reedición negociada de una mayoría de progreso.*

A tenor de la últimas encuestas y los resultados de las elecciones europeas, damos por supuesto que Podemos, a pesar de la marginación y el acoso recibidos, ha salvado su mayor peligro de la irrelevancia política y se está recuperando, de momento con ese techo del millón de votantes; y en el caso de Sumar, con amplias posiciones institucionales y apoyo mediático, hay una trayectoria electoral descendente, aunque sigue manteniendo todavía un millón y medio de votantes, más fragmentados en su articulación política.

El hecho decisivo, cuando se pretende formar una fuerza política con una capacidad electoral significativa para tener posiciones institucionales, es alcanzar en el Estado, al menos, una representatividad superior al 10% del electorado, dadas las constricciones de la normativa electoral.

Con esa previsión parlamentaria, sin un proceso de reactivación unitaria y remontada electoral,

con un estancamiento del Partido Socialista y un ligero ascenso de las derechas (PP y VOX), no se podría conformar, junto con el PSOE y las fuerzas nacionalistas, una alianza de progreso, o simplemente continuista, que impida un gobierno de derechas extremas y la consolidación de un nuevo ciclo reaccionario.

Además, con un posible predominio institucional de las derechas, tampoco se podría condicionar significativamente, desde ese ámbito parlamentario, su anunciada dinámica gubernamental y legislativa regresiva y autoritaria, con una impotencia transformadora mayor de la izquierda alternativa y el conjunto de las fuerzas progresistas y democráticas.

Con esas perspectivas de involución democrática y de condiciones y derechos sociales, así como de frustración ciudadana, *el foco principal del activismo político alternativo pasaría a la esfera sociopolítica y cultural y la oposición parlamentaria*, para recomponer y ampliar un nuevo campo socioelectoral y político-institucional como mecanismo para reiniciar otra fase de cambios sustantivos de progreso para las mayorías populares.

Superar el sectarismo partidista

En el contexto de declive de la izquierda transformadora, se produce una fuerte pugna por el relato de sus causas, las responsabilidades partidistas y las salidas que legitimen los respectivos liderazgos y estrategias.

Se producen diagnósticos contrapuestos y performativos, poco realistas, que expresan los deseos de cada cual. Por un lado, la muerte de Podemos; por otro lado, la descomposición de Sumar. Se genera la incompatibilidad de liderazgos, con los vetos cruzados: Yolanda Díaz/Irene Montero. Se da por inevitable la persistencia de solo un grupo dirigente para articular ese espacio alternativo, con la prevalencia de una parte y la subordinación de la otra.

Así, las dos propuestas existentes son hegemónicas y no demasiado sensatas para articular la cooperación, considerada imposible o innecesaria por ambas partes.

Por un lado, el modelo de Sumar del 23J, con la continuidad de la primacía del Movimiento Sumar y el equipo de Yolanda Díaz, y la sustitución de Podemos en el liderazgo y su marginación, con una política moderada de afinidad con el Partido Socialista. Es la que la dirección de Sumar pretendió imponer en el proceso que culminó el 23J, con los reajustes gubernamentales y parlamentarios excluyentes consiguientes, plan que ahora se reproduce sin valorar su fracaso fáctico y antipluralista. Es la actual alternativa oficial de Movimiento Sumar, imposible de repetir ante el reequilibrio representativo de Podemos, y la actitud más reequilibradora y unitaria de Izquierda Unida. O sea, no es operativa y solo tiene una función legitimadora para mantener una aparente iniciativa unitaria.

Por otro lado, el de una 'izquierda valiente' en torno a Podemos, con una estrategia confrontativa con el Gobierno de coalición, poniendo el énfasis en la movilización contra la guerra, intentando absorber partes de la coalición Sumar, tras la supuesta integración de otra parte en el PSOE. Se basa en la hipótesis de la descomposición de Sumar: que el PSOE incorpore al núcleo dirigente de Movimiento Sumar, y Podemos articule, atrayendo el grueso de su base social, a varios grupos de la coalición Sumar (IU y los Comunes —sin ICV—), junto con otros activistas sociales. Sería una especie de nueva Unidas Podemos, con prevalencia de la dirección morada, dejando a

la intemperie a Más Madrid y Compromís (o Mes y Chunta), difíciles de asimilar para ellos.

Es una hipótesis deseable para Podemos, para fortalecer su liderazgo, pero poco realista, al menos, antes de la comprobación del probable batacazo electoral en 2027, aunque las encuestas negativas precedentes y los reajustes internos de expectativas podrían adelantar las tensiones internas y la búsqueda de apaños para evitar la pérdida de credibilidad social.

Además, está la propuesta razonable de Izquierda Unida, de reunir al conjunto en una nueva plataforma sin vetos y con programa mínimo compartido, más horizontal, con un procedimiento democrático consensuado —primarias a negociar—, pero que adolece de cierto irrealismo que los lleva a admitir la posibilidad de una tercera lista por separado, con lo que se agravaría la situación todavía más.

Hoy es difícil de concretar ese frente amplio o bloque histórico, sin mayor autoridad moral y política de sus liderazgos y dada la predisposición de cada parte, incluida IU, para consolidar en este proceso transitorio su respectiva hegemonía orgánica y su línea política particular.

Así, de entrada, la dirección de Movimiento Sumar y el equipo liderado por la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, valoran su política y su posición como las más útiles e innegociables, ya que el radicalismo de Podemos lo consideran un lastre para ensanchar su influencia. Mientras que la dirección de Podemos las considera imposibles de consensuar, por la gran distancia existente entre una estrategia que llaman de *régimen de guerra*, en la que involucra a todo el Gobierno, y otra de paz, que defienden y que, según ellos, es determinante para la formación de la izquierda en la fase actual.

La situación se agrava con la posición exclusivista, en sus respectivas comunidades autónomas, de Más Madrid y Compromís, que excluyen cualquier alianza electoral con Podemos e Izquierda Unida para reforzar su posición prevalente, infravalorando sus consecuencias negativas.

Se puede constatar que, con los liderazgos actuales, es difícil avanzar en una colaboración, institucional, social o de base, que pudiese culminar en un acuerdo electoral y de estrategia política para el inmediato reto político-electoral y, particularmente, para la próxima etapa. Es un camino que requiere varias condiciones y necesitaría más altura de miras y capacidad de liderazgo colectivo.

Dinámicas regeneradoras

Caben tres dinámicas, necesariamente combinadas, que pueden desbloquear y modificar algo esas actitudes y estrategias de los núcleos dirigentes actuales, en el marco de una presión democrática más general, incluido por los intereses corporativos del resto de las fuerzas progresistas y del propio Partido Socialista, que pretende evitar su desalojo gubernamental.

Primera, una significativa activación cívica y de masivas movilizaciones sociales —feministas, vivienda, sanidad y educación públicas, solidaridad con Palestina, contra el rearme...—, junto con una dinámica más global contra la involución regresiva y autoritaria, que presionen desde la base popular para una trayectoria transformadora y unitaria.

Segunda, unos resultados especialmente positivos, comunes y visibles, de las pocas experiencias colaborativas existentes

—Por Andalucía, Contigo Navarra u otras dinámicas locales y sectoriales—, que abran mayores caminos cooperativos y de confianza.

Tercera, una reconsideración reflexiva y constructiva de las direcciones partidistas —y de otras organizaciones sociales y la intelectualidad progresista—, con la capacitación de nuevos liderazgos unitarios, democráticos y con una perspectiva transformadora a medio plazo.

De momento, parece que las dos espadas principales están en alto, sin dar el brazo a torcer, y en espera de que los cambios de la realidad de la crisis político-orgánica se hagan más evidentes, y aparezcan factores favorables para cada cual en su pugna por la prevalencia política y orgánica.

Es decir, contando con el precedente de las elecciones andaluzas, habrá que esperar hasta la debacle previsible —quizá asimétrica— de los resultados electorales (municipales, autonómicos y generales) de 2027, constatar la impotencia frustrante y la crítica de la izquierda social y política ante los graves retos existentes, y valorar su representatividad específica, su fuerza comparativa y la credibilidad de sus liderazgos.

Será el momento, trágico, de reactivar las tres dinámicas antedichas, activación cívica, experiencias colaborativas y renovación de liderazgos, seguramente en condiciones sociopolíticas más desfavorables que la actual etapa transitoria, previa pugna competitiva por la adjudicación de responsabilidades del fracaso y los intentos de asentar nuevos liderazgos y estrategias políticas. Entraremos en otra fase, dura y delicada, que demostrará la valía de las actuales estructuras dirigentes de la izquierda alternativa.

El riesgo de involución y la voluntad transformadora

Se trata de desafiar al mal mayor, frente a la prioridad contra el mal menor, prevenir la pugna sectaria y corporativa en la izquierda alternativa y apostar por su renovación, colaboración y refuerzo. La tendencia probable es una realidad externa desfavorable para las fuerzas transformadoras. No obstante, al mismo tiempo que el declive y el desconcierto de las izquierdas alternativas, se abre la oportunidad para otro ciclo de reactivación cívica y recomposición sociopolítica y partidista, para el que se genera una fuerte pugna política y discursiva por la primacía para influir en su nueva dimensión, sus características y su liderazgo.

Por otro lado, respecto de las condiciones externas, hay que remarcar la diferencia entre, por una parte, una gestión ultraliberal, regresiva, imperial y autoritaria de las derechas extremas, reforzadas por la trayectoria *trumpista* y ultra en Europa, con fuertes componentes racistas, antifeministas y antiecológicos; y, por otra parte, una gestión centrista o continuista (o posibilista/oportunista), con componentes neoliberales y de contención de derechos sociales y democráticos. En ambos casos, en un ámbito de cierta democracia liberal debilitada, se puede condicionar su gestión por su necesidad de legitimación social y democrática, o sea, por la presión cívica, si la hay en el corto plazo.

El foco principal de la acción política y la influencia transformadora pasaría a la capacidad de activación cívica y articulación sociopolítica de las organizaciones sociales y culturales, así como de su representación política, en un papel menos institucionalizado. Esta, con pocos recursos de poder institucional, tendría que basarse en su arraigo social, su cultura democrática y pluralista y su capacidad articuladora y de liderazgo popular. Constituye una nueva prueba para las

estructuras de la izquierda alternativa, y la propia influencia de la socialdemocracia.

En todo caso, hay que valorar la especificidad de la interacción entre las dos corrientes de izquierdas, la moderada y la transformadora; también en su capacidad articuladora de las demandas sociales. Igualmente, hay que tener en cuenta cómo frenar la gestión política de las derechas y los grupos de poder, que pueden combinar imposiciones excluyentes a unos grupos sociales con concesiones parciales y privilegios relativos a otros. Por tanto, frente a su dinámica de reforzar ventajas comparativas de unos sectores sociales frente a otros más vulnerables y en desventaja, para incrementar la división social y apropiarse de la legitimidad o la representatividad de sectores populares descendentes, o desafectos, en términos relativos, e impedir el avance de las fuerzas progresistas. Si terminamos ahí, con un Ejecutivo de derechas extremas y una oleada segregadora y reaccionaria, el camino antifascista y contra la reacción no será nada fácil, aunque aparezca el adversario con claridad.

Desafiar al mal mayor, frente a la prioridad contra el mal menor

La conclusión estratégica no es la de subordinarse a los intereses de ese bloque centrista/continuista, el llamado *malmenorismo*, sino la de oponerse al mal mayor, la involución social y democrática de las derechas extremas, y consolidar las fuerzas sociopolíticas transformadoras. En ese sentido, hay que valorar el carácter ambivalente o contradictorio de las corrientes moderadas, posibilistas o socioliberales respecto del poder establecido y las derechas, adversario principal de las fuerzas progresistas y de izquierda.

El riesgo principal es un refuerzo derechista y de los grupos de poder y una destrucción mayor de las fuerzas transformadoras y de izquierdas, incluidos los movimientos sociales y el sindicalismo. También es problemática la crisis de las fuerzas liberal-democráticas o centristas, sin grandes acomodos en los poderes fácticos, y su deslizamiento hacia la derecha conservadora. El desafío estratégico para las izquierdas frente a los poderosos será resistir frente al retroceso político-social y avanzar en condiciones, derechos y fuerzas sociales, en plena travesía del desierto institucional, con una dinámica doble de unidad y diferenciación, o cooperación y crítica, con las fuerzas moderadas o socioliberales, dentro del campo democrático y según las características de cada fase histórica.

En todo caso, como se adelantaba, una decisión trágica sobre la configuración institucional puede venir en 2027, en los procesos electorales municipales, autonómicos y generales —si no se adelantan— sobre la constitución de mayorías de gobierno, si se da una coyuntura similar de equilibrios parlamentarios como la de 2023. Sumar lo tiene claro: su firme alianza con el Partido Socialista.

La principal condición morada para llegar a acuerdos con el PSOE es que respete su autonomía política (para disentir), aunque esa posibilidad negociadora, como política flexible, está contrarrestada por el análisis, la crítica frontal y la polarización como representación del 'régimen de guerra' a derribar. No obstante, se afianza la idea de la imposibilidad de participar en un gobierno conjunto con los socialistas (y Sumar) o de compartir un programa mínimo de legislatura.

El interrogante sería sobre la decisión del apoyo (o la inhibición) en la investidura socialista, si su voto es determinante para que no gobiernen las derechas. Y a qué precio. La cobertura del relato justificativo de la oposición a esa posibilidad ya se avanza: la responsabilidad de la victoria de las

derechas sería del gobierno de coalición, que les ofrece una 'alfombra roja', al hacer políticas de derechas, y la única alternativa a ese consenso bipartidista bélico, con diferencias irrelevantes entre ese bipartidismo formal, es la 'izquierda valiente', que se puede fortalecer en esa polarización con el bloque de poder, al que pertenecería el Partido Socialista y el grueso de Sumar.

Aunque habría que diferenciar entre la función discursiva actual para intentar reforzar el espacio propio de las consideraciones prácticas sobre sus efectos cuando se produzca la decisión morada, según su contexto, y que podrían condicionarla.

Preservar las fuerzas transformadoras

En el peor de los casos, el de un gobierno de derechas y una débil representación progresista y alternativa, otra hipótesis problemática para la izquierda política transformadora sería su caída en la irrelevancia institucional y político-cultural, con fuerte aislamiento político y desarraigo social, con la tendencia hacia la pasividad y la rendición político-ideológica. Supondría una etapa prolongada de crisis y recomposición.

La respuesta morada es un partido cohesionado, con autonomía y capacidad comunicativa... hasta ampliar el electorado a lo largo de la próxima legislatura. Y generar las condiciones sociopolíticas de movilización y articulación social y política para acumular más fuerzas 'en la calle' y luego en las instituciones parlamentarias y ejecutivas, ya que se mantiene el criterio fundamental de ser partido de poder y de gobierno. Veremos la consistencia de sus mimbres.

En el caso de la coalición Sumar, el riesgo de mayor fragmentación se puede producir ante la situación de previsible fracaso representativo y desalojo del Gobierno, probablemente no antes, tras los procesos electorales de 2027. La tendencia puede ser de repliegue local de sus grupos territoriales (Madrid, Catalunya, Comunidad Valenciana), con cierta representatividad, la dilución de Movimiento Sumar y su liderazgo, y la persistencia de Izquierda Unida, en su nicho político territorial (Andalucía). Pero es difícil que, de entrada, renuncien a su primacía orgánica y política, en particular en esas zonas. La competencia con Podemos está servida.

La apuesta de Movimiento Sumar y, en gran medida, de la coalición Sumar, es la de revalidar un frente electoral suficiente para mantener el gobierno de coalición progresista otra legislatura, y mantener el peso institucional y de gestión que les permita seguir legitimándose por su política 'útil', dentro de la unidad —con forcejeos— con el Partido Socialista.

No obstante, la derechización política y, en particular, el bloqueo continuista gubernamental y los límites y compromisos socialistas con los grupos de poder, generan nuevos conflictos que dificultan esa legitimidad basada en limitadas mejoras para el bienestar de la gente, en el marco de una política de progreso sin mayoría parlamentaria y una gestión, a veces, regresiva, belicista o neoliberal. No contemplan otra hipótesis, de irrelevancia político-institucional o permanencia debilitada en la oposición parlamentaria. Supone que, de producirse, no habría mecanismos colectivos para hacerle frente y podría haber una salida individualizada o fragmentada. Un futuro lleno de incertidumbres.

Enseñanzas históricas y pugna competitiva

En esta etapa de transición por el declive y la fragilidad estructural de la izquierda alternativa, con la hipótesis de su prolongación en la siguiente legislatura, un obstáculo a remontar es la polarización sectaria por intereses corporativos de las élites dirigentes respectivas, el fanatismo de la ideología propia, en una trayectoria competitiva y destructiva. Es decir, la incapacidad de las actuales élites partidistas para resistir un proceso de mayor fragmentación y destrucción de fuerzas organizadas y la profundización de una crisis representativa, de influencia social y de liderazgo público.

Para sacar enseñanzas, se pueden citar las otras *dos grandes experiencias de recomposición de la izquierda del Partido Socialista, tras su fracaso representativo, sus pugnas corporativas y las dificultades políticas y sociales para una trayectoria transformadora.*

La primera, tras la crisis del PCE y la izquierda radical y el ‘desencanto’ de la transición política, de finales de los años setenta y primeros ochenta, la reactivación de la movilización popular en los años ochenta, con el movimiento pacifista —campañas anti-OTAN—, el sindical —incluida la gran huelga general del 14-D-1988 contra la precariedad y por el giro social— y, en menor medida aunque significativos, el feminista y el ecologista, aparte de la persistencia de los movimientos nacionalistas periféricos. Esa activación cívica se tradujo en el refuerzo de un campo sociopolítico diferenciado de la socialdemocracia y la formación de Izquierda Unida, cuyo mayor influjo político y electoral, desde la oposición, pervivió una década, hasta mitad de los años noventa, junto con el declive socialista.

La segunda, tras un reflujo alternativo pronunciado de tres lustros —con movilizaciones significativas como contra la guerra de Irak en 2003 y la renovación socialista con Zapatero, en su primera legislatura—, se reinició con un gran proceso de protesta cívica (2010/14), con la movilización e indignación popular progresista simbolizada por el movimiento 15-M frente a la austeridad y la prepotencia del bipartidismo, y por la justicia social y la democracia. Se amplió y conformó un nuevo campo sociopolítico y electoral a la izquierda del PSOE, representado por Podemos y sus alianzas y convergencias, en el marco de Unidas Podemos, luego debilitado y fragmentado entre Podemos y Sumar, que pretendía sustituirlo y reorientarlo, en una operación, finalmente, en parte fallida.

Ahora, si se mantiene la trayectoria actual de la izquierda alternativa, se aventura otra crisis de su capacidad orgánica, representativa y de influencia institucional y transformadora, aunque está por ver el grado de asimetría entre los dos bloques actuales y su impacto comparativo.

La dificultad adicional para un marco constructivo conjunto es la cierta inclinación sectaria existente entre formaciones democráticas o progresistas, con mucha tradición entre las izquierdas en estos dos siglos. Consiste en trazar una línea rígida entre dos bloques incompatibles, defensores de su específico patrimonio político y orgánico, apropiándose de una identidad embellecida y descalificando la identidad contraria: amigos/enemigos. Frente a los poderosos no habría un campo popular-progresista, amplio y plural, sino que, para unos, las corrientes moderadas o posibilistas forman parte del poder establecido, no son izquierda, y, para otros, las corrientes radicales o transformadoras son 'izquierdistas', marginales y perjudiciales para el avance social y democrático. Todo ello, a pesar de que el grueso de sus bases electorales, esa izquierda social —o progresismo rojo, verde y violeta—, tiene ideas, posiciones y valores de izquierda bastante similares.

Existen dos versiones. La justificación moderada de Sumar, despreciando o marginando a Podemos como grupo radical, minoritario o contraproducente. Y la explicación radical de la dirección morada, aventurando la descomposición de Sumar por su política contemporizadora con el PSOE y su política de rearme, que favorecería a las derechas. En la situación actual, estos últimos esquematizan una polarización entre la llamada 'izquierda' (Podemos y sus aliados políticos y de la sociedad civil) y las fuerzas del 'régimen de guerra' (incluido PSOE/Sumar).

Los puentes entre las direcciones partidistas se rompen. El riesgo es caer en el doctrinarismo y la descalificación discursiva, estéril para la reactivación popular y la articulación de un frente común, social y partidario, diferenciado de la socialdemocracia. Su prioridad es otra, la primacía particular de cada liderazgo alternativo.

En esa situación defensiva y de división, se acentúan los relatos sobre las responsabilidades por el declive y por la legitimación de nuevos liderazgos y estrategias. Cobra virulencia y gravedad la pugna sectaria y corporativa, por su carácter destructivo y la ausencia de acumulación —unitaria— de experiencias de lucha cívica, activación democrática y articulación político-orgánica y electoral. No hay escucha ni diálogo con argumentos, predomina la descalificación; se resiente el talante democrático.

Aparte del reparto de las responsabilidades de las direcciones partidistas, se produce el desgaste adicional de su crédito político y moral ante la ciudadanía, por su impotencia o incapacidad transformadora y articuladora. Se añade la posibilidad de la travesía del desierto para la recomposición de la izquierda social y política en el siguiente ciclo político, con la agudización de las tensiones internas que pueden profundizar dinámicas destructivas, sin perspectivas de una estrategia unitaria de resistencia cívica y cooperación partidaria.

La perspectiva explícita en la dirección de Podemos parece ser la de resistir como minoría parlamentaria —en la oposición, sin mucha capacidad institucional de influencia transformadora— ante un amplio bloque de poder derechista y belicista, y acumular fuerzas sociales y culturales para ampliar electorados y contrapoder social e ideológico, a medio plazo, con la expectativa de un relanzamiento de la movilización social por la paz y contra el rearme que desborde la denominada representación moderada o posibilista de la coalición Sumar.

En unas circunstancias desfavorables, con limitados arraigo social, contrapoder asociativo, influencia cultural y legitimidad cívica, ¿aguantará una estructura de cuadros políticos, con poco

arrote institucional y difícil arraigo popular? ¿o se prolongará y agudizará la crisis orgánica y la necesidad de una renovación profunda y la recomposición de las élites y plataformas partidistas?

El camino hacia la recomposición

Ante una salida difícil hay que prevenir la inercia autocomplaciente de unos diagnósticos embellecidos para adecuarlos a una subjetividad voluntariosa pero, a veces, irrealista, que vuelva a generar desilusión. Como decía Gramsci, hay que *combinar el pesimismo de la inteligencia —del análisis— con el optimismo de la voluntad —transformadora—*.

La apuesta deseada en la izquierda alternativa, particularmente en Podemos, es la conformación de otro proceso de movilización general, más o menos similar al del origen de este ciclo, el 15M, en una versión, a veces, idealizada. Así, en este periodo de transición se pueden extremar las expectativas subjetivas de la resistencia y movilización popular progresista (aparte del nacionalismo) para dar verosimilitud al deseo del ascenso de la radicalización sociopolítica y cultural, con objeto de conseguir una nueva hegemonía en torno a esa estrategia radical contra el 'régimen de guerra' y el apoyo a ese liderazgo discursivo.

La cuestión es que hay que ser realistas respecto de las contradicciones, tendencias y fuerzas presentes para diagnosticar la trayectoria movilizadora y articuladora de la izquierda social, especialmente juvenil. Hay que valorar la experiencia, con las diferencias de los contextos de otras épocas históricas en los procesos de conformación de los sujetos sociales, sin paralelismos forzados, y profundizar el análisis concreto de la situación concreta.

En particular, como se decía, hay que explicar, aparte de los nacionalismos, los procesos de movilización colectiva progresista. Singularmente, como enseñanzas articuladoras, el movimiento antifranquista (1968/78), el anti-OTAN y sindical (1981/85/88), el de 'No a la guerra' (2003) y el movimiento feminista (2018/23); y, especialmente, el simbolizado por movimiento 15M. Igualmente, hay que valorar los campos de desafección política, deslegitimación social y pugna cultural, para empujar, articular y orientar la movilización cívica, reconstruir una base social progresista y de izquierdas y fortalecer la capacidad vertebradora del activismo social y político. Hay motivos graves para el descontento público, cierta conciencia social y algunas movilizaciones relevantes sobre: la vivienda, la sanidad pública, Palestina, la violencia machista... y ahora la oposición contra el rearme.

La orientación está clara, fortalecer esa activación cívica y participativa, no solo ni principalmente discursiva, aunque también con una pugna ideológica y una teoría crítica. Y realizar el análisis concreto de la situación concreta, para elaborar la línea política y una plataforma político-electoral compartida, la convencional acumulación de fuerzas sociopolíticas transformadoras o, si se quiere, la articulación de tejido asociativo y de base, así como movimientos sociales con capacidades articuladoras y contractuales.

Al mismo tiempo que el declive y el desconcierto en las izquierdas alternativas, con una fuerte ofensiva derechista, se abre la oportunidad para otro ciclo de reactivación cívica y recomposición sociopolítica y partidista. La otra cara es que también se genera una fuerte pugna política y discursiva por la primacía en el reconocimiento, el estatus y la colocación para influir en su nueva dimensión, sus características y su liderazgo.

El reto alternativo es fortalecer una confrontación popular democratizadora, con arraigo social, frente al poder establecido, y rearticular una dinámica colaborativa de base y de proyecto transformador, que constituya el fundamento para ensanchar ese campo sociopolítico y electoral diferenciado del centrismo socioliberal.

Consiste en promover la participación democrática y la pugna ideológica y discursiva por la vertebración y la hegemonía legítimas con procedimientos organizativos desde el respeto a la pluralidad, la democracia y la negociación de acuerdos y políticas comunes en beneficio de las mayorías populares.

Al mantener la vocación de articular a las mayorías sociales y las expectativas de estatus e influencia institucional, la cohesión partidista se busca en la convicción colectiva del acceso —seguro— a esa posición de poder, la confianza en el camino a recorrer y las condiciones de liderazgo a establecer. Sin embargo, está por ver la capacidad de las actuales élites partidistas de las izquierdas para afrontar ese desafío constituyente, así como su renovación y recomposición.

Bases para abordar la renovación y la remontada

Podemos resumir los fundamentos para impulsar la recomposición político-organizativa y su remontada electoral y de influencia transformadora.

En primer lugar, la activación cívica en el campo sociopolítico, en los movimientos sociales, ante los graves problemas de regresión social y democrática (feminismo, vivienda, servicios públicos como sanidad y educación, desigualdad y capacidad adquisitiva, solidaridad con Palestina, oposición al rearme...). O sea, la colaboración por abajo, el impulso a la actividad reivindicativa, crítica y solidaria.

En segundo lugar, potenciar las posibilidades de acuerdos parciales en territorios (Andalucía, Navarra, Extremadura) y sectores, así como en iniciativas políticas y legislativas compartidas. Y evitar mayor división.

En tercer lugar, una reflexión y renovación de las estructuras dirigentes y los liderazgos partidistas, desde la pluralidad, la cultura democrática y la colaboración. Y, en ese marco, la clarificación ideológica y la nueva vertebración orgánica.

El problema de la legitimidad pública y el encaje de los intereses corporativos de los núcleos dirigentes, con sus políticas y trayectorias, solo se podrá resolver con la realidad de la constatación de la representatividad electoral (y, aun así, será insuficiente, como han demostrado las elecciones europeas) y su influencia político-cultural. Por tanto, existe el peligro de tender hacia el debilitamiento mutuo, con la competitividad sectaria y la demostración de su empoderamiento respectivo por su política y su liderazgo. Son tendencias disgregadoras.

Se constata un punto débil que añade dificultad renovadora. La fragilidad de la constitución ideológica y democrática, sin cultura consistente en el respeto al pluralismo y la negociación de acuerdos y lealtades comunes, con unos objetivos y un plan conjunto que referencie las particularidades y reequilibrios representativos y de poder, así como consensuar los acuerdos

estratégicos y de alianzas y pactar el tratamiento de los desencuentros.

Ante ese problemático escenario, hay una opción definida en el caso de Podemos. Salvarse como izquierda valiente y firme, aunque sea en condiciones de poca relevancia en los equilibrios parlamentarios y gubernamentales hegemonizados por las derechas y la socialdemocracia asimilada, y con la hipótesis de su remontada a medio plazo. Su perspectiva es que las élites de Sumar se pasen al PSOE. Ello les permitiría absorber sus bases sociales, una vez clarificados los campos electorales, tras la previsible debacle político-electoral. El complemento organizativo puede ser la tendencia a la cohesión y la disciplina partidista, minusvalorando tensiones internas, y el retroceso en el respeto al pluralismo, el debate interno y la negociación, descalificados por su ineficacia operativa, ante la dimensión de la nueva tarea de prevalencia dirigente.

Por parte de la dirección de Sumar se trataría de continuar con el actual estatus de superioridad institucional y respetabilidad mediática y política. Pero, ante un escenario en la oposición, queda abierta la falta de previsión y capacidad para superar esa posición menos ventajosa. Y está por ver el desarrollo de la propuesta unitaria de Izquierda Unida que, ante su imposibilidad, también se apresta a prepararse en solitario para la travesía del desierto.

La conclusión es que, *frente al declive representativo y de influencia de la izquierda alternativa, la solución vendrá de abajo, y los liderazgos deberán demostrar su capacidad para articular una dinámica transformadora y democrática, en condiciones desfavorables.* Su renovación y ampliación procederá de la confluencia de la experiencia de acción popular, la articulación democrática y la cultura crítica de una nueva generación, con los valores de libertad, igualdad y solidaridad. Queda abierta la tarea de la recomposición y la remontada de la izquierda alternativa en la próxima década.

Soledad Bengoechea

Burguesía y fascismo

Paralelismos entre el norte de Italia y el área de Barcelona en las primeras décadas del siglo XX

Visto desde nuestra perspectiva, y desde el ámbito de la historia social, es difícil no observar el paralelismo que, con algunos matices, se produjo en la evolución de estas dos zonas geográficas, norte de Italia y entorno de Barcelona, ya desde finales del siglo XIX, que perduró hasta las primeras décadas del XX. Antes de la aparición de los movimientos comunistas, el radicalismo obrero encontró en esas áreas una expresión organizativa propia, en un grado mucho mayor que en cualquier otra franja de la Europa occidental o central. Por ejemplo, en Francia, la Confederación General del Trabajo (CGT) evolucionó hacia el reformismo.

Si ponemos el foco en el tema concreto de la organización de la patronal, los paralelismos se ponen también de manera clara de relieve, especialmente desde el primer decenio del siglo XX. En Italia, por aquel entonces, proliferaron los grupos de presión. El prototipo fue la Liga Industrial de Turín, fundada en 1906. Ella fue la que dirigió la lucha contra las organizaciones del trabajo en aquella ciudad y la que ayudó a establecer asociaciones patronales similares en el Piamonte. La Liga fue la sociedad matriz de la Confederación Italiana de la Industria, fundada en 1910 con el fin de defender los intereses de las industrias ante los sindicatos de trabajadores.

En el área de Barcelona ocurrió algo similar. Con el mismo objetivo que la Confederación italiana, organizaciones patronales de la construcción y del metal se agruparon en 1910 en una combativa Federación de las Industrias de la Construcción.

«La ciudad del pistolero». Así se ha calificado la Barcelona de los años que van de 1917 a 1923. Los atentados contra obreros y patronos llevados a cabo por matones de la patronal, por un lado, y por algunas de las facciones del sindicato anarcosindicalista CNT, por otro, fueron recurrentes. Al mismo tiempo, el enfrentamiento entre los hombres del llamado Sindicato Libre, con grupos armados cenetistas, cubrieron también de sangre las calles de la ciudad. En el mismo período, una serie de huelgas y un cierre patronal de varias semanas conmocionaron la ciudad condal y otras ciudades industriales de la provincia.

En Italia, entre esos años, devino lo que ha venido a denominarse El *biennio rosso*, una sucesión de eventos protagonizados principalmente por los [consejos obreros de fábrica](#). Se le adjetivó como *rosso* debido a la masiva revuelta popular de orientación [socialista](#) y [anarquista](#) que se dio sobre todo en el norte del país.

En aquel período, la radicalización de las posturas patronales y obreras alcanzó su zénit en las dos áreas aquí analizadas. ¿Cuáles fueron los motivos comunes? Aunque resulta imperativo atender a los procesos de larga duración, todo indica que los ecos de la Revolución Rusa de 1917 y las consecuencias económicas, políticas y sociales derivadas de la Gran Guerra (1914-1918) fueron determinantes.

En Italia, la Confederación General de la Industria Italiana (CGII), fundada en Roma el 8 de abril

de 1919, se creó precisamente un día antes de que en Barcelona se diera a conocer a la luz pública la Federación Patronal de Barcelona (FPB). Esta última era continuadora directa de la citada Federación de las Industrias de la Construcción. Ambas organizaciones nacían con el ánimo de actuar como «sindicatos patronales» de resistencia para luchar contra las organizaciones obreras e incidir sobre los propios gobiernos. En Italia, su principal impulsor fue el abogado y economista Gino Olivetti. En Barcelona, el contratista de obras Fèlix Graupera.

Los *Fasci italiani di combattimento* se fundaron en Milán en marzo de aquel turbulento 1919. En Barcelona, en el mismo año, aparecieron los Sindicatos Libres, llamados «rompehuelgas». Sobre la relación de estos sindicatos con el fascismo, en un libro aparecido recientemente, *El fascio de las Ramblas*, sus autores caracterizan a esta organización como un fascismo autóctono: «Desde nuestra óptica, ciertamente el Libre no tuvo todos los elementos que supuestamente caracterizarían al fascismo en el debate académico. Pero a nuestro juicio plasmó un fascismo autóctono cuyo rasgo más definitorio fue su violencia».

¿Cómo recibieron algunos medios empresariales catalanes las noticias que, con respecto al fascismo, iban llegando desde la vecina Italia? Con gran expectación en medios donde se movían los publicistas de los empresariales catalanes, sobre todo entre los más cercanos a la ya llamada por entonces Federación Patronal de Cataluña (FPC). Algunos de los párrafos de su revista, *Producción, Tráfico y Consumo*, son bien significativos al respecto. Concretamente porque entendían que el éxito del fascismo era el de saber combinar lo viejo y lo nuevo a los ojos de poblaciones «cansadas de democracia». Pero, aunque observaban el ejemplo italiano, en un principio los industriales catalanes no se acababan de pronunciar a favor del fascismo porque pensaban que existía la posibilidad de que apareciera un gobierno revolucionario que pusiese en entredicho la independencia de las industrias en España. Las plumas de escritores de la patronal catalana dejaron huella de cómo el fenómeno del fascismo causó entre sus élites una gran curiosidad y un fuerte impacto. Aunque también han dejado constancia de cómo, entre los propagandistas de esas mismas élites, creó una cierta desconfianza. El programa fascista de junio de 1919 esbozaba muchas peticiones demasiado radicales para que las aceptasen los precavidos hombres de negocios catalanes. Y se recibían noticias que indicaban cómo los fascistas solían utilizar en sus declaraciones una verborrea en muchos casos ribeteada de toques anticapitalistas.

No obstante, fueron sobre todo la Marcha sobre Roma en 1922 y sus consecuencias las que pudieron despertar mayores esperanzas entre los industriales catalanes. Ahora, en 1922 y 1923, algunos de estos publicistas se mostraban proclives a ver en Mussolini un ejemplo de lo que podría ser el «cirujano de hierro» que supuestamente España necesitaba. Incluso las mismas plumas que en cierta medida habían desconfiado de la ambigüedad del movimiento aplaudían ahora de forma rotunda algunos elementos de su ideario, que encajaban de manera perfecta en el pensamiento de ciertos sectores de la patronal catalana del momento.

Por ello, la inicial desconfianza que algunos ideólogos de la patronal catalana pudieran abrigar hacia el movimiento fascista no tardaría en decaer cuando algunos de ellos comenzaron a interesarse por lo que había sido la historia y los precedentes del fascismo italiano. Llegaron a la conclusión de que había un hecho clave para saber a qué atenerse a la hora de juzgar al fascismo: a pesar del tono empleado por los fascistas, en los que no faltaban las alusiones anticapitalistas y antiburguesas, los sectores que más le estaban apoyando pertenecían a las

clases acomodadas. Ello producía una inmensa tranquilidad a muchos sectores de la burguesía catalana. Por otra parte, y seguramente este punto era el que resultaba determinante, el fascismo era el único movimiento que iba acabando con el socialismo; algo que, decían, el gobierno liberal no había conseguido. Valgan al respecto los siguientes párrafos:

La aparición briosa y pujante del fascismo italiano, que a la vaga concepción internacionalista y desarraigadora del socialismo opone un vibrante ideal nacionalista, patriótico, lleno de ansias engrandecedoras y elevadas, ha abierto una brecha en el frente, que era tenido por casi inexpugnable, del formidable partido socialista, el más fuerte y extenso de Italia. Núcleos enormes de elementos socialistas se han pasado resueltamente a las filas del fascio. Y muchos de aquellos exaltados jóvenes que soñaban con las rojas teorías de Lenin y provocaban manifestaciones jubilosas ante el hotel donde se hospedaba Chichería, hoy piensan en una patria mejor que no ha de venir precisamente por el camino de las huelgas sistemáticas y de las revoluciones que sirvan de escabel a leaders audaces.[1]

Los fascistas, ya algo más engrosadas sus filas, luchaban denodadamente para neutralizar y combatir estos efectos. Pero la lucha era imposible, sin embargo. Pero vino entonces un nuevo factor a alentarles al combate, a darles ánimos y fuerza. Fueron los burgueses, los industriales, los terratenientes, los que prestaron su ayuda decidida a los fascios locales, que ya empezaban a frecuentar contactos entre sí. Y sin vacilaciones se reanudó bárbaramente con ferocidad inaudita, la batalla contra los comunistas primero, contra los socialistas después, y más tarde contra todo lo que significara un sentimiento acendrado de italianidad, de arraigo a la patria y al lar nativo. [...] Y el poder socialista se fue esfumando poco a poco, lentamente como se iba esfumando en el cielo de Italia el humo de los incendios de las Casas del Pueblo. Desde entonces el fascismo ha seguido una línea ascensional. Los obreros han abandonado en grandes masas el socialismo para ingresar en el fascio, donde al fin y al cabo se asalta a todas horas el nombre de Italia y se habla de nobles valores patrióticos y humanos. [2]

Situados en la coyuntura de la primavera de 1923, desde la Federación Patronal y a través de su órgano de expresión, y de su ideólogo Pedro Valdés, el regeneracionismo se veía como un movimiento normal en un movimiento organizado como el fascismo. En su opinión, esta regeneración que llegaba de la mano de los fascistas y, sobre todo, de su líder, era una reacción normal contra una infección que intentaba destruir la Nación, llena de podredumbre y de corrupción política. El cambio de régimen en Italia tendría como finalidad conseguir esa regeneración, eliminando del cuerpo enfermo —la Nación— todo síntoma de enfermedad, cuya germen sería la democracia liberal. La llegada de un salvador, de un hombre fuerte en el país vecino, era contemplada con verdadera admiración, no exenta de envidia.[3]

Por otra parte, los métodos empleados por Mussolini para tomar el poder no causaban problemas en el ánimo de la patronal. El movimiento fascista, según su opinión, era indudablemente revolucionario y, por tanto, regeneracionista, y había accedido al poder mediante un golpe de fuerza. La Federación Patronal de Cataluña lo justificaba y criticaba a los que invocaban la legalidad. La legalidad, en su opinión, le venía impuesta a Mussolini por su victoria. Desde la publicación de la FPC se veía innecesario tratar de buscar bases legales al gobierno fascista, ya que, si «el fascismo quiso y quiere salvar a la Nación, basta». En conclusión, una buena parte de la patronal catalana admitía que si la Nación iba a salir beneficiada era natural, beneficioso y necesario que se diese un golpe de fuerza. La figura de Mussolini era vista como un modelo y un ejemplo a seguir.[4]

Poco después, el 13 de septiembre de 1923, el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, marqués de Estella, protagonizaba un golpe de estado que había sido auspiciado y fue aplaudido por una buena parte de la burguesía catalana. Finalmente, como ocurrió en el caso italiano con Mussolini, momentáneamente Barcelona dejó de ser el escenario de lucha de clases

que había sido desde tantos años antes.

Notas

1. «Los obreros abandonan el socialismo», *Producción, Tráfico y Consumo*, Barcelona, septiembre de 1922. [?](#)
2. «Los nuevos ideales políticos. Orígenes del fascismo», *Producción, Tráfico y Consumo*, Barcelona, octubre de 1922. [?](#)
3. Valdés, Pedro, «El sentido cultural en las luchas sociales», *Producción, Tráfico y Consumo*, Barcelona, junio de 1923. [?](#)
4. Folco Testena, «Después del triunfo fascista», *Producción, Tráfico y Consumo*, Barcelona, marzo de 1923. [?](#)

De otras fuentes

Olga Rodríguez

Y Europa, ¿qué hacía mientras Israel asesinaba en Gaza y cantaba en Eurovisión?

Esta semana se han cumplido setenta y siete años del inicio de [la Nakba](#), la expulsión por fuerzas israelíes de más de 700.000 palestinos de sus hogares en 1947 y 1948, con masacres y amenazas. Desde entonces hasta hoy esa voluntad de dejar fuera de su tierra a la población palestina [se mantiene](#), a través de crímenes, desposesión, desplazamientos forzados y segregación.

En 1967 se produjo la Naksa, otra expulsión masiva de más de 300.000 palestinos. En las décadas siguientes Israel ha seguido impulsando medidas para apropiarse de tierras ajenas, para anexionarse más territorio, para demoler viviendas y negar derechos básicos a la gente palestina.

“La Nakba no es un acontecimiento del pasado”, ha escrito esta semana [la relatora de la ONU](#), Francesca Albanese. “Es una continua violación del artículo 49 de la Cuarta Convención de Ginebra, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del artículo 1 de la Carta de Naciones Unidas y de los principios más básicos de la dignidad humana”.

El sistema de apartheid israelí, desarrollado con más intensidad en las últimas tres décadas, discrimina, arrincona y castiga diariamente a los habitantes de los territorios ocupados palestinos, más de seis millones. Además, niega el derecho al regreso a su hogar a las personas expulsadas en 1948, en 1967 y en décadas posteriores, así como a sus hijos y nietos.

Nada de esto empezó ayer, ni en octubre de 2023. Y, sin embargo, durante todas esas décadas, durante todos estos años, la Unión Europea ha ido estrechando sus relaciones con Israel con acuerdos y alianzas preferenciales, hasta el punto de que este país es integrante de Eurovisión y de la UEFA, a pesar de que no forma parte del territorio europeo y de que aplica apartheid y limpieza étnica contra la población palestina.

Israel en Eurovisión

Esta semana nuestro continente celebraba con palomitas y alegría Eurovisión, con Israel como participante. Ninguna nación europea consideró necesario ausentarse o condicionar su presencia a la suspensión de Tel Aviv o a la entrada de alimentos en Gaza, o a un alto el fuego, o al fin de las masacres. Nada. Todos los países estuvieron presentes. La Europa del impudor celebró la final del concurso, emitida en prime time, [mientras aviones israelíes bombardeaban](#) otro campo de refugiados en la Franja.

Este sábado por la noche RTVE mostró en pantalla [un mensaje escrito](#), antes del inicio de la emisión del concurso europeo: “Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y Justicia para Palestina”, se pudo leer. Este mensaje representa más de lo que han hecho la mayoría de las cadenas públicas europeas. Pero las palabras no bastan, y deberíamos saberlo a estas alturas. Frente a la violación sistemática de los derechos humanos, no solo hay que condenar el silencio. Frente a las masacres y el apartheid, la falta de acción política y diplomática

no es una opción. El mantenimiento de las relaciones con Israel no es una opción. Lo han entendido bien las personas que llevan más de un año manifestándose y [movilizándose](#) en [todo el mundo](#), exigiendo reacción a sus gobiernos.

La presencia de Israel en Eurovisión merecía un boicot coordinado. Lo confirma la respuesta de la Unión de Radiodifusión Europea (UER), amenazando con multar a RTVE porque durante una emisión en directo dos locutores recordaron que hay más de 50.000 personas muertas en Gaza. Para la UER lo sancionable es la mínima mención de algo que no termina de ser nombrado, y no los crímenes en sí. La persecución a los pronunciamientos y manifestaciones en defensa de los derechos humanos de los palestinos es una realidad que va a más en numerosos países. Advirtió de ello, hace ya más de un año, [la relatora de la ONU, Irene Khan](#): “La crisis de Gaza se está convirtiendo en una crisis global de la libertad de expresión con repercusiones duraderas”.

La normalización del genocidio en Occidente atraviesa y condiciona nuestro presente, de forma obscena. Hay una Europa indiferente y ciega en la que la realidad se reduce a mera teoría, a banalidad, como si todo fuera un juego virtual sin consecuencias. Como si no hubiera cuerpos abrasados por las bombas.

Carros de Gedeón

Eurovisión se ha celebrado mientras el Gobierno de Netanyahu anuncia la ocupación permanente de más territorio de la Franja y despliega su nueva operación de exterminio en Gaza, bautizada como Carros de Gedeón. Este nombre bíblico hace referencia al Libro de los Jueces, en el que se narra y se celebra la masacre de los madianitas, enemigos de los israelitas, y la conquista absoluta guiada por la divinidad.

Tanto Netanyahu como su protector, Donald Trump –[como antes lo fueron](#) Joe Biden y otros- han mencionado en varias ocasiones la posibilidad de forzar el desplazamiento de población palestina de Gaza hacia otros lugares, o de arrinconarla dentro de la Franja en un perímetro más reducido. Un informe desvelado este fin de semana por la cadena estadounidense NBC describe un nuevo proyecto que está estudiando EEUU para [“reubicar” permanentemente en Libia](#) a cientos de miles o incluso a un millón de gazatíes.

“Si se confirma esto, la limpieza étnica de Palestina -que ya es una coalición de crímenes internacionales- se convertirá en una abierta empresa criminal conjunta”, ha denunciado [la relatora de Naciones Unidas](#) para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese.

La nueva fase de matanzas viene acompañada de un asedio que dura ya dos meses y medio, durante los cuales el Ejército israelí ha impedido -e impide- la [entrada de productos necesarios](#) para la supervivencia humana, como alimentos, agua potable y medicinas. En las conversaciones telefónicas con habitantes de Gaza escucho relatos de familias que se alimentan con comida para gatos, con pan duro o con hierbas. Sus historias coinciden con lo que [denuncian estos días](#) las agencias de la ONU presentes en la Franja.

Las [consecuencias del hambre](#) y de la deshidratación son cada día más notables. Decenas de niños y niñas han muerto ya a causa de ello, mientras los bombardeos continúan. Solo en las últimas veinticuatro horas las fuerzas israelíes han matado a más de doscientas personas, en una de las semanas más sangrientas de esta ofensiva que comenzó hace más de un año y medio.

Las relaciones UE-Israel

A pesar de la envergadura de estos crímenes, la Unión Europea sostiene acuerdos preferenciales con Israel. Lo hace mientras el Gobierno israelí anuncia operaciones de terror, comete crímenes y expresa intención genocida. España ha condenado las acciones ilegales de Israel y ha reconocido el Estado palestino, pero mantiene [relaciones armamentísticas](#), comerciales y diplomáticas con Tel Aviv. El Gobierno español ha anunciado la revocación de [un solo contrato](#) de compra de material militar a Israel. Hay otros cuarenta con fecha posterior a octubre de 2023, la mayoría ya formalizados, y algunos [pendientes](#) de la firma final. Entre las adquisiciones, está el designador láser POD, comprado a la empresa [armamentística pública israelí Rafael](#), o los [misiles Spike](#).

Comerciar con empresas armamentísticas israelíes o sus filiales significa engrosar las arcas de compañías que son eje vertebral de la ocupación y del apartheid, que suministran y fortalecen al Ejército israelí y que publicitan sus armas como “productos probados en combate”, es decir, sobre población palestina.

Supone, además, ignorar [el dictamen de la Corte Internacional de Justicia](#), que el pasado mes de julio pidió a las naciones de la ONU medidas “para impedir las relaciones comerciales o de inversión que contribuyan al mantenimiento de la situación ilegal creada por Israel en el Territorio Palestino Ocupado”. El Estado israelí en sí mismo es el impulsor de la ocupación ilegal de Palestina, y las empresas armamentísticas israelíes y sus filiales contribuyen activamente a este crimen continuado desde hace décadas.

Existen mecanismos para suspender relaciones con un Estado y para impulsar medidas de presión. Quedó claro cuando el Ejército ruso invadió territorio ucraniano en 2022. De forma casi inmediata, la UE impuso sanciones a Moscú, expulsó a Rusia de la UEFA y de Eurovisión y pagó gas estadounidense a un precio más caro que el ruso, en sustitución de éste. Incluso envió armamento a Ucrania, reforzando la nefasta idea de que los conflictos se resuelven por la vía de las armas. Las naciones de la UE, a excepción de Hungría, fueron claras con la orden de arresto a Putin, la defendieron con contundencia; en cambio, algunos de los países más grandes de la UE [han llegado](#) a [cuestionar](#) el cumplimiento de la [orden de arresto contra Netanyahu](#) emitida por la Corte Penal Internacional.

Más allá de la UE, los países tienen soberanía para decidir sobre sus relaciones bilaterales. Comerciar con un Estado que segrega, masacra, ocupa y coloniza es evitar acciones básicas para obstaculizar el genocidio. No adoptar medidas de presión real facilita que las masacres continúen. También supone ignorar [la Convención sobre Genocidio](#), que subraya el compromiso de los países firmantes de [“prevenir y sancionar”](#) el genocidio. Esta Convención incluye, en su Artículo III (e) la noción de “complicidad” como elemento que contribuye al crimen.

La Unión Europea actúa sin tener en cuenta las consecuencias del exterminio israelí en las

dinámicas internacionales. Palestina lo cambia todo, porque en el avance de la impunidad israelí, con la complicidad o inacción de los países europeos, se normaliza la vía militar presentada como única opción, en detrimento de la solución política y de la aplicación del derecho internacional. Palestina no es solo una crisis humanitaria, es un escenario en el que se despliega una coalición de crímenes. Es un espejo que refleja el quiebre moral del sistema global.

La gente decente que recuerde este período nunca entenderá, porque no hay manera de entender, cómo Israel mató de hambre, deliberadamente, a palestinos en Gaza, cómo la ayuda alimentaria se acumuló en cada frontera de la Franja y por qué las naciones europeas, socias de Israel, no quisieron desplegar medidas de presión para obligar al Gobierno israelí a levantar el bloqueo. Por qué no se movilizaron con todas las herramientas posibles, ya en 2023 y 2024, para garantizar la llegada de alimentos y de medicinas que se les sigue negando, ahora, en este preciso instante, a más de dos millones de personas cercadas por un Ejército que masacra a civiles.

Quizá llegue un día, quizá no, en el que se pregunte a los gobiernos de Europa qué hacían mientras el Estado israelí masacraba a niños y cantaba en Eurovisión, mientras asesinaba a civiles durante diecinueve meses seguidos, mientras extendía su apartheid en Cisjordania y Jerusalén Este. ¿Se ejercen las [medidas de acción](#) necesarias para dificultar los crímenes israelíes? No. ¿Se han desplegado [mecanismos de presión real](#)? No. ¿Se mantienen relaciones y acuerdos con Israel? Sí. Si no se reacciona en medio de [un genocidio](#), ¿cuándo?

[Fuente: [EIDiario](#)]

Quique Sánchez Ochoa

10.471 millones para preparar la guerra y contribuir a un genocidio

El pasado 22 de abril, el presidente del Gobierno presentaba de forma sorpresiva su plan para que el gasto militar español alcance el 2% del PIB ya en este 2025, y no en 2029 como estaba previsto. El plan, que asciende a 10.471 millones de euros, es todo un ejercicio de prestidigitación, no solo en la forma en la que (a falta de nuevos presupuestos) ha conseguido escamotear recursos a otros ministerios, sino también en cómo consigue presentar un plan de rearme (y nos consta que al presidente Sánchez no le gusta ese término) como un conjunto de inversiones que mejorarán las condiciones de las tropas (35,45% del total), fortalecerán telecomunicaciones y ciberseguridad (31,16%) y servirán para apoyar en la gestión de emergencias y desastres naturales (16,73%). Son conceptos más amables, que la ciudadanía probablemente puede aceptar con mayor simpatía, y juntos suman el 83% del total del plan. El resto se dirige a misiones en el exterior (3%) y a 'Instrumentos de defensa y disuasión' (18,75%), un eufemismo para sistemas de armas y bombas que enorgullecería al mismísimo George Orwell.

Pero el caso es que, si nos fijamos en el detalle de esos tres primeros epígrafes que conforman la mayor parte del plan, nos encontramos con que, bajo esos conceptos quizás más socialmente aceptables, se esconden numerosos programas de armamento. En total, este "Plan industrial y tecnológico" destina partidas a 31 Programas Especiales de Armamento (PEA, ahora llamados de 'Modernización').

Por su ubicación en ciertos epígrafes y por la naturaleza de estas compras, destacamos algunas partidas.

En primer lugar, podemos encontrar más gastos camuflados en la partida de 'Apoyo a la gestión de emergencias y desastres naturales'. 116 millones se asignan a un vehículo lanzapuentes que ayuda a cruzar desniveles o ríos a vehículos de combate (Dragón 8x8); En una partida de 27 millones aparece un programa 'contra-UAS' (Unmanned Aerial System, es decir, contra drones). También se asignan 50 millones al programa de Helicópteros multipropósito, con el objetivo de sustituir los anteriores con una flota de seis nuevos. Si indagamos un poco en el uso que se hace habitualmente de estos helicópteros, su inclusión en la partida de emergencias y desastres naturales resulta sonrojante, pues estos son los helicópteros que utilizan habitualmente miembros de la Casa Real y del Gobierno.

Si saltamos a otra partida, llama la atención cómo la que está dirigida a mejorar las condiciones laborales, de preparación y de equipamiento de las Fuerzas Armadas, que es de hecho la más abultada (3.712,49 millones), solo dedica 679 millones a incrementar las retribuciones del personal y a aumentar efectivos (sin especificar cuánto irá a cada partida). Casi la mitad de la partida de (1.665,37 M€) se dirige, de hecho, a adquirir y desarrollar equipos para entrenar y formar en sistemas de armas y tecnologías vinculadas a los PEA, por unos importes que no tienen precedentes en programas de formación y de entrenamiento de este tipo. La partida más controvertida de este epígrafe es, posiblemente, la de 'Modernización y mejora de capacidades de entrenamiento', que asciende a 928,37 millones de euros y que incluye un listado con varios

proyectos. Entre ellos se ha colado, parece, el 'diseño de POD para combate aéreo', cuya inclusión en este apartado es alarmante por dos motivos. El primero es que genera serias dudas que un designador láser para los aviones de combate Eurofighter que se utiliza, por ejemplo, para iluminar objetivos a los que se dispara con munición de precisión guiada, pueda considerarse una mejora de 'capacidades de entrenamiento'. Esto nos confirma además una sospecha: se han camuflado programas de armamento en esta y otras partidas de este epígrafe, lo que explica lo abultado de este apartado. El segundo motivo es que la empresa adjudicataria de este contrato, que asciende a 207 millones, es la empresa israelí Rafael, una de las más importantes del país, y que tiene en Gaza su campo de pruebas para los armamentos que desarrolla. Y aunque el acuerdo marco de este programa fue firmado antes del 7 de octubre de 2023 (lo cual permite al Gobierno argumentar que la compra es previa a esa fecha), la adjudicación del contrato se produjo con posterioridad, en marzo de 2024. Ahora, con este plan, se la dota de fondos (no sabemos exactamente cuántos), para cumplir con unos pagos que tienen que llegar hasta los 207 millones de aquí a 2027.

Lo mismo encontramos en la partida 'Nuevas tecnologías de telecomunicación y ciberseguridad', que consigna 350 millones para el Sistema Conjunto de Radio Táctica (SCRT), un programa adjudicado a un consorcio de empresas en el que el socio tecnológico es la israelí Elbit, colaboradora necesaria del ejército israelí en el genocidio que está perpetrando contra el pueblo palestino en Gaza.

En este punto cabe un inciso para responder al persistente argumento del Ejecutivo de que no ha comprado armas tras el 7 de octubre, de que las autorizaciones son previas a esa fecha: ¿No se efectúa también una compra cuando pagas por un producto? ¿Puede realmente el Gobierno de Sánchez seguir manteniendo que no compra armas a Israel desde el 7 de octubre? ¿No sería más coherente (y no digamos moral) cancelar o, al menos, congelar esas compras decretando un embargo integral de armas a Israel? Para terminar de desmontar este argumento, vean también [esta investigación](#) del Centre Delàs que desvela cómo el Gobierno de PSOE y Sumar ha adjudicado y/o formalizado al menos 46 contratos de compra de armamento a empresas militares israelíes, a sus filiales o a intermediarias desde el 7 de octubre de 2023, que ascienden a 1.044 millones de euros.

Todo esto debería ser suficiente para que cayeran algunas caretas: el Gobierno de España no puede ser referente en políticas de paz ni en apoyo al pueblo palestino mientras mantenga estas políticas de defensa. Su apuesta por la militarización es ahora más cristalina que nunca y liga su destino, y de paso el nuestro, a líderes políticos y empresas de armamento de la OTAN e Israel.

Si prestamos atención al mantra del 2% del PIB en gasto militar que exigía la OTAN hasta ahora (parece que el objetivo subirá pronto al 3%), los juegos de prestidigitación del Gobierno vuelven a dejarnos con la boca abierta. Es cierto que este Ejecutivo (y los anteriores) ya nos tenía acostumbradas a las trampas al solitario (esconder partidas de carácter militar en otros ministerios para que parezca que el gasto militar es inferior), pero en esta ocasión el engaño ha sido clamoroso: se han cambiado las normas del juego, han aparecido cartas bajo el tapete y dentro de las mangas y se ha pintarrajeado alguna que otra para que parezca lo que no es. Tal y como explicamos en el informe *El gasto militar y el rearme de España en 2025*, el plan con armamentos camuflados y otras artes similares han conseguido que el gasto militar español se dispare hasta los 33.123 millones, alcanzando el tan ansiado 2% del PIB, según los cálculos del

Gobierno de Sánchez. Aunque no contamos con el desglose de esta cifra, una simple suma entre lo que se asigna al Ministerio de Defensa y sus organismos autónomos, los créditos extra aprobados en Consejo de Ministros para este año (casi 4.000 millones más) y los 10.471 millones del plan, nos confirma que, por primera vez, el Gobierno ha incluido en sus cálculos partidas distribuidas por otros ministerios (posiblemente Industria y Exteriores).

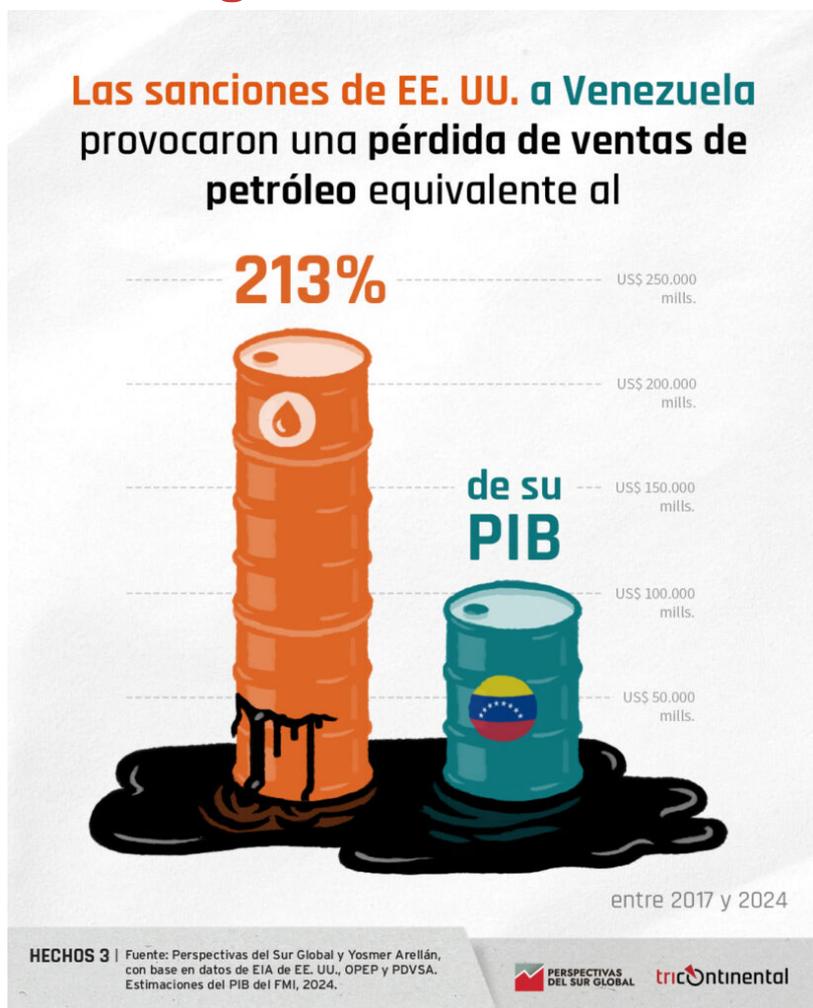
Parece que la persistencia y enfado de la OTAN han obligado a sacar a la luz algunas cartas que, hasta ahora, gobiernos de distinto signo se guardaban en la manga. Pero, pese a todo, aún quedan algunas por mostrar: según los cálculos del Centre Delàs (explicados en el informe), el gasto militar real del Estado español para 2025 será aún superior a lo presentado por el Ejecutivo de Sánchez, alcanzando los 40.457 millones de euros, lo que representa casi el 2,5% del PIB.

Episodios como el gran apagón del lunes 28 de abril demuestran, muy a pesar del Gobierno y de quienes defienden la militarización, que la seguridad genuina se encuentra en unos servicios públicos bien financiados y de calidad, además de en la cooperación con otros países, especialmente los vecinos. Y si no nos dejamos engañar por juegos de trileros, entenderemos que los presupuestos de un país son, más bien, un juego de suma cero: lo que se gasta en un lado se deja de gastar en otro (a no ser que se tire de deuda pública). Durante este ejercicio, un gasto militar de esta magnitud significa dejar de gastar en otros sectores (imaginen, por ejemplo, cuánta vivienda pública se podría crear con 10.471 millones). En los próximos años, mantener o aumentar un gasto militar así significará necesariamente recortar en gastos sociales y medioambientales y en políticas de paz, precisamente lo que el momento actual exige y lo que provee verdadera seguridad a las personas.

[Fuente: [Público](#). Quique Sánchez Ochoa es investigador del Centre Delàs d'Estudis per la Pau]

Vijay Prashad

«Hacer gritar la economía» de Venezuela



Queridas amigas y amigos,

Saludos desde las oficinas del [Instituto Tricontinental de Investigación Social](#).

Ningún país debería atravesar lo que ha vivido Venezuela desde 2017.

El gráfico de HECHOS que acompaña este boletín muestra que las sanciones impuestas por Estados Unidos, más adecuadamente denominadas [medidas coercitivas unilaterales](#) (MCU), provocaron que Venezuela perdiera ingresos petroleros equivalentes al 213 % de su PIB entre enero de 2017 y diciembre de 2024. En total, el país sufrió pérdidas estimadas en 226 mil millones de dólares, alrededor de 77 millones de dólares por día, durante ese período. Estos datos, elaborados por Global South Insights y el Instituto Tricontinental de Investigación Social a partir de un análisis del actuario venezolano Yosmer Arellán, fueron calculados comparando las cifras reales con una estimación de la producción petrolera venezolana en ausencia de la campaña de “máxima presión”, iniciada por el entonces presidente estadounidense Donald Trump.

Antes de 2017, Venezuela [dependía](#) del petróleo para el 95 % de sus ingresos por exportaciones. Además, estos ingresos eran fundamentales para financiar la agenda social progresista del gobierno. Esta pérdida ha provocado un aumento desmedido de la inflación: según [cifras](#) oficiales del Banco Central de Venezuela de 2019, la tasa de inflación interanual más alta fue de 344.510 %, lo que significa que los precios aumentaron 3.400 veces en un solo año. Este nivel de catástrofe es inimaginable para cualquier país y representa una carga inmensa para la población.

Aunque Venezuela ha estado bajo ataque del gobierno de Estados Unidos y sus aliados desde la primera elección del expresidente Hugo Chávez en 1998, la [Orden Ejecutiva 13808](#) firmada por Trump en 2017, desencadenó una nueva ola de sanciones financieras que negaron al país el acceso a los mercados internacionales de crédito, socavando gravemente su capacidad para vender petróleo en el exterior. Lo que hizo esta orden fue impedir que cualquier ciudadanx estadounidense adquiriera nueva deuda del gobierno venezolano o comprara bonos existentes que habrían permitido su refinanciamiento. Los pagos de dividendos de CITGO (la filial en EE.UU. de la petrolera estatal venezolana Petróleos de Venezuela, S.A., PDVSA) fueron suspendidos más tarde, en enero de 2019, cuando la empresa fue confiscada y puesta bajo el control de Juan Guaidó, la persona impuesta como “presidente” por Estados Unidos. Esto impidió que PDVSA obtuviera cartas de crédito para garantizar los envíos de crudo, contratara seguros para los buques petroleros, realizara tareas de mantenimiento en los campos petroleros y llevara a cabo transacciones con personas no estadounidenses que tenían ser objeto de sanciones secundarias. Dos órdenes ejecutivas adicionales impuestas por Trump (la [13850](#) del 1 de noviembre de 2018 y la [13857](#) del 25 de enero de 2019), restringieron aún más el acceso de Venezuela al financiamiento y apuntaron directamente a compradores de su petróleo, particularmente en Europa e India.

Trump agarró por el cuello a la economía venezolana y la apretó con toda la fuerza que pudo.

El terrible impacto de las órdenes ejecutivas fue evidente de inmediato para el gobierno de Trump. El 11 de marzo de 2019, Matt Lee, de *Associated Press*, le preguntó al entonces secretario de Estado de EE. UU., Mike Pompeo, sobre la crisis humanitaria en Venezuela causada por las MCU. La [respuesta](#) de Pompeo fue directa:

El cerco se está cerrando. La crisis humanitaria se agrava por horas. Anoche, a eso de las siete u ocho, hablé con nuestra persona de más alto rango en el terreno en Venezuela. Puede verse el aumento del dolor y el sufrimiento que está viviendo el pueblo venezolano.

Ese *dolor y sufrimiento* lo sentían, justamente, quienes eran el verdadero objetivo de las MCU: el

pueblo venezolano. Dos años más tarde, Alena Douhan, relatora especial de las Naciones Unidas sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales en el ejercicio de los derechos humanos, visitó Venezuela y presentó un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Lo que encontró fue catastrófico: el colapso del precio del petróleo en 2014 había provocado una escasez generalizada de alimentos y medicinas, situación que se agravó con la campaña de máxima presión iniciada por Trump en 2017. Esta crisis contrastaba fuertemente con el incremento significativo en los niveles de vida que había experimentado la población desde el inicio de la Revolución Bolivariana en 1998. Como [escribió](#), Douhan, “el endurecimiento de las sanciones a partir de 2017 socavó el impacto positivo de múltiples reformas y la capacidad del Estado para mantener la infraestructura y continuar implementando programas sociales”. De manera contundente, explicó también que “las exenciones humanitarias existentes son ineficaces e insuficientes, están sujetas a procedimientos largos y costosos y no incluyen el suministro de repuestos, equipos ni maquinaria indispensables para el mantenimiento y la recuperación de la economía y los servicios públicos esenciales”. Esto significa que todo el régimen de MCU, pese a las exenciones, obligó al pueblo venezolano a pagar un altísimo costo, como demostramos en nuestro reciente [dossier](#) *Guerra imperialista y resistencias feministas en el Sur Global*.

Contrario al relato promovido por personas como Trump y Pompeo, no hay forma de que la mala gestión y la corrupción, por sí solas, hayan provocado este nivel de devastación económica en apenas siete años (2017–2024). Quienes han estudiado con seriedad la economía venezolana coinciden en que el desastre ha sido impulsado, de forma directa, por la intensificación de las MCU promovida por la administración Trump a partir de 2017.

En aquel momento, el equipo de Trump para América Latina estaba conformado por personajes como Mauricio Claver-Carone, abogado cubano-estadounidense y director principal para Asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional. Claver-Carone era considerado el autor de la campaña de “máxima presión” contra Venezuela y, según funcionarios de alto nivel del Departamento de Estado, incluso redactó personalmente las órdenes ejecutivas firmadas por Trump. Tras un escándalo en el Banco Interamericano de Desarrollo, ahora ocupa el cargo de enviado especial de Trump para América Latina. Su objetivo declarado es derrocar tanto la Revolución Cubana como la Revolución Bolivariana, por todos los medios posibles.

En abril de 1976, el Comité Selecto del Senado de los Estados Unidos para el Estudio de Operaciones Gubernamentales en relación con Actividades de Inteligencia, presidido por el senador Frank Church, publicó su informe final. En el [informe](#), *Covert Action in Chile, 1963–1973* [Acción encubierta en Chile, 1963-1973], se recopilaron documentos sobre la desestabilización del gobierno del presidente Salvador Allende. Incluye una nota manuscrita del entonces director de la CIA, Richard Helms, sobre una reunión celebrada el 15 de septiembre de 1970 en la Casa Blanca, con el presidente Richard Nixon, el fiscal general John Mitchell y el asesor de seguridad nacional Henry Kissinger. La reunión tuvo lugar 11 días después que Allende, del Partido Socialista de Chile, ganara la presidencia. Nixon aconsejó a su equipo que “salvaran a Chile” poniendo en el trabajo a “los mejores hombres que tengamos”. El plan de acción: “hacer gritar a la economía”.

Unas semanas después de aquella reunión, el 9 de noviembre, Kissinger [presentó](#) el *Memorando de Decisión de Seguridad Nacional 93*, que detallaba este “plan de acción”. Con una postura

pública “correcta pero fría”, escribió Kissinger, Estados Unidos debía aplicar la máxima presión para impedir que Chile accediera a nuevos fondos, incluidos los provenientes de bancos internacionales, organismos financieros multilaterales y empresas privadas estadounidenses. Tras la nacionalización de la industria del cobre en Chile, las empresas mineras multinacionales estadounidenses, como Kennecott, intentaron interceptar barcos chilenos y confiscar su cobre o impedir que el país lo vendiera a terceros, incluidos países europeos. Estados Unidos utilizó su poder en el Fondo Monetario Internacional (FMI) para bloquear préstamos y presionó a organismos internacionales para evitar que Chile iniciara procesos de arbitraje en defensa de sus minas. Las compañías navieras comenzaron a evitar los puertos chilenos y las exportaciones de cobre del país se volvieron menos atractivas. La caída del precio y del volumen exportado —el cobre [representaba](#) el 80 % de las divisas de Chile— afectó gravemente a la economía. Esta caída derivó en una crisis económica generalizada, con escasez de bienes importados y suministros industriales y una tasa de inflación que alcanzó el 200 % en 1973.

En nuestro [dossier](#) de septiembre de 2023, *El golpe contra el Tercer Mundo: Chile, 1973*, demostramos cómo el golpe contra el gobierno de Allende fue, en realidad, un golpe contra cualquier intento de los países del Sur Global de ejercer soberanía sobre sus recursos naturales y construir una economía socialista a partir de ellos. Exactamente los mismos motivos están presentes en el caso de Venezuela. En febrero de 2019, Trump pronunció un discurso en Miami sobre Cuba, Nicaragua, Venezuela y el socialismo, en el que [declaró](#) que “ha llegado la hora del ocaso del socialismo en nuestro hemisferio”. Trump no se refería solo a América Latina, sino también a Estados Unidos, país que, insistió, “nunca será una nación socialista”.

Lo que Estados Unidos hizo en Chile entre 1970 y 1973 es precisamente lo que ha venido haciendo con Venezuela desde al menos 2017. En 1972, Víctor Jara capturó la sensibilidad de la guerra económica contra Chile —y el espíritu de resistencia del pueblo— con su canción *El hombre es un creador*. Es una canción sencilla, sobre la clase trabajadora en las fábricas, en el campo y bajo tierra en las minas. La última estrofa es poderosa:

Aprendí el vocabulario
del amo, dueño y patrón,
me mataron tantas veces
por levantarles la voz,
pero del suelo me paro,
porque me prestan las manos,
porque ahora no estoy solo,
porque ahora somos tantos.

Víctor Jara fue torturado y asesinado durante el golpe que derrocó a Salvador Allende. Su tumba, en Santiago, es hoy un lugar de peregrinación para lxs soñadorxs y sus sueños. Los sueños valen la pena: nos dan esperanza. Son mejores que la amargura de hombres como Nixon y Trump, Kissinger y Claver-Carone.

Cordialmente,

Vijay

[Fuente: [Instituto Tricontinental de Investigación Social](#)]

Sebastian Faber

Alex Gourevitch: «Las universidades han traicionado su razón de ser»

Los ataques del Gobierno norteamericano a las universidades del país, [constantes desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca](#), han revelado una serie de vulnerabilidades preocupantes que se han manifestado como capitulación inmediata (el caso de Columbia), formas de “obediencia anticipada” (para usar la frase de Timothy Snyder) o un silencio atronador (la gran mayoría). ¿Cómo se explica que incluso poderosas instituciones privadas como las Ivy League se vean tan débiles ante los instintos autócratas del presidente?

Entre las voces más lúcidas que se han pronunciado sobre el tema está la de Alex Gourevitch, politólogo afiliado con la Universidad de Brown (Rhode Island). En [un largo ensayo](#) en *The Boston Review* llama la atención sobre la represión sistemática de las protestas políticas en los campus universitarios durante los últimos años, en particular en torno a la guerra de Gaza. Según Gourevitch, se trata de un nuevo régimen disciplinario que refleja problemas estructurales de más largo plazo. En su lugar, reivindica el “derecho a la hostilidad”. Desde luego —escribe— hay que proteger a todos los miembros de la comunidad universitaria de cualquier daño físico. Pero esto no significa reprimir toda actividad que pueda producir una *sensación* de incomodidad u ofensa, como lo son, a menudo, la expresión y crítica de ideas políticas; o sea, las protestas.

Para Gourevitch, el hecho de que estas se vean hoy como problemáticas o simplemente intolerables tiene una explicación clara: a medida que se ha venido equiparando el daño *físico* con el daño *psíquico*, “las autoridades ... han redefinido, gradualmente, el derecho de *estar* seguro como un derecho a *sentirse* seguro”. Los colectivos de estudiantes, a su vez, han apelado a esas mismas autoridades para que hagan lo necesario con el fin de garantizar esa sensación de seguridad, incluidas la prohibición o represión de protestas u otras expresiones de disenso.

Esto, sin embargo, ha socavado seriamente la misión y convivencia universitarias. Es más —concluye Gourevitch—, la “sensación de fragilidad” que han venido “promoviendo” las universidades y otras instituciones es “democráticamente incoherente y políticamente paralizante”: “Cuanto menos capaces seamos de tolerar la libertad del otro, más dependeremos de las autoridades, a las que apelamos para que nos protejan —lo que, a su vez, nos anima a sentirnos cada vez más vulnerables ante el otro—”.

Gourevitch (San Diego, 1978), doctor por la Universidad de Columbia, es autor del libro *La República Cooperativista. Esclavitud y libertad en el movimiento obrero* (Capitán Swing). Colabora de forma regular en *Jacobin*, *Dissent* y otros medios. Es nieto, por el lado materno, del economista Albert O. Hirschman.

El proceso que usted critica en su ensayo en la *Boston Review* —la confusión entre sensaciones y hechos, entre daño psíquico y físico— se puede describir como una paulatina erosión de la tolerancia.

Muy de acuerdo. En resumidas cuentas, hemos perdido la capacidad de tolerar el disenso. Pero

no solo eso: también hemos redefinido el disenso en sí como una forma de daño. Esto significa dos cosas. Primero, que hemos perdido la capacidad de distinguir entre *sentirnos* amenazados y *estar* amenazados. La erosión de esa distinción ha sido realmente corrosiva. Segundo, hemos perdido la capacidad de distinguir entre diferentes *tipos* de daño. Mira, todo conflicto siempre traumatiza un poco. Tener que oír la expresión vociferante de ideas que a uno le parecen repugnantes es algo que causa cierta angustia psíquica, sobre todo en un entorno –como lo es la universidad– que anima a todo el mundo a tomarse las ideas de forma muy seria y muy personal. Pero ese daño es menor y lo tenemos que asumir como el precio de admisión a una sociedad democrática. Es el precio de la libertad. De ahí la importancia de distinguir ese daño de otros tipos de daños –estos sí, intolerables– como lo son las intimidaciones, las amenazas y los actos de violencia física.

¿Dónde ubica el origen de esta confusión entre distintos tipos de daño? ¿Refleja un cambio cultural o un cambio político? ¿Y nace en la izquierda o la derecha? Se me ocurre, por ejemplo, que la paulatina expansión de términos como *harm* (daño), *trauma*, *trigger* (desencadenante) o *harrassment* (acoso) en la izquierda es paralela a la expansión de la categoría legal de *terrorismo* en la derecha.

Sin entrar en un largo debate sobre los orígenes de la política del miedo, creo que cabe distinguir tres fases históricas. La más inmediata es la que hemos vivido en los campus universitarios durante los últimos 15 ó 20 años, donde cierta izquierda ha introducido una forma nueva de pensar la identidad y el acoso. Por un lado, se han expandido cada vez más los aspectos que cuentan como parte de la identidad; por otro, se ha equiparado la crítica de esos aspectos con el acoso. Al mismo tiempo, ha habido una asunción entusiasta de la idea de que, si ciertos grupos –sobre todo si son minorías– se sienten vulnerables o experimentan miedo, les toca a las autoridades intervenir para minimizar ese miedo mediante la supresión o el castigo de lo que lo produce –pero, y esto es importante, sin antes determinar si hay alguna razón objetiva para sentir miedo, o si hay alguna amenaza real o probable–.

Es una dinámica que también se ve en otras partes.

Claro, lo que acabo de describir es parte de una reorganización política de la sociedad mucho más amplia, que ha ido justificando el uso de la fuerza para tranquilizar a una población que siente miedo, independientemente de que haya motivos para sentirlo, o siquiera de la efectividad de las medidas tomadas. El ejemplo más dramático de este fenómeno es lo que George W. Bush llamaba “la guerra al terror”, que, no lo olvidemos, justificó las invasiones militares de varios países, la suspensión de libertades civiles y una gran expansión del poder ejecutivo. Y, ojo, todas esas medidas se tomaron tras el 11 de septiembre sin que hubiera amenazas reales de más ataques. Fue absurdo. Sin embargo, en ese entonces una parte de la izquierda liberal, como el jurista Bruce Ackerman, se subió entusiasta al carro.

¿Y la tercera fase?

Si adoptamos una perspectiva un poco más amplia todavía, me parece que esta reorganización política parte de una sensación ampliamente compartida de vulnerabilidad que responde, a su vez, a cambios sociales que se producen durante el periodo neoliberal. Aquí me parece muy convincente lo que argumenta el jurista británico Peter Ramsay: el neoliberalismo, al destruir los tejidos colectivos –irónicamente, en nombre de la libertad individual– nos convirtió a todos en

individuos enfrentados al todopoderoso mercado. Así, todos hemos acabado mucho más vulnerables que antes ante unas fuerzas que no controlamos. Esta es una verdad objetiva. Pero en un régimen así, lo único que nos queda es exigir a las autoridades que nos protejan.

En los ataques actuales al mundo educativo, y al universitario en particular, llama la atención la facilidad con la que la derecha se aprovecha de armas creadas por la izquierda. Pienso, por ejemplo, en la legislación diseñada para garantizar un acceso equitativo a la educación. En este país, su parte central es el Título VI de la Ley de Derecho Civiles, que prohíbe la discriminación en todo programa que reciba financiación federal. Cerrar el grifo del dinero –que es lo que están haciendo Trump y compañía– es una medida perfectamente prevista por la ley. ¿Hay alguna táctica que pueda servir en esta situación?

Es una buena pregunta. Toco el tema en la *Boston Review* pero lo he estado pensando más desde entonces. El Título VI es crucial porque vincula la discriminación y el acoso con la identidad. La ley y su burocracia asociada castigan duramente a las universidades que no emprendan acciones ante casos sospechosos de discriminación. Ahora bien, lo que yo no tenía presente es que muchas universidades, de forma voluntaria, han ido expandiendo el número de “colectivos protegidos” (*protected classes*) más allá de lo que estipula la ley federal. Y fíjate: grupos sionistas han presionado a universidades para incluir, como categoría protegida, a ciudadanos de una nación identificada primordialmente por su religión. Es obvio a qué país se refieren: Israel.

Qué locura.

Una locura, en efecto. Porque es obvio que la libertad de religión –incluida en la Primera Enmienda– exige la libertad de *criticar* cualquier religión. En cambio, la expansión del Título VI ha fomentado la idea de que criticar a una persona por sus creencias –íntimamente asociadas con su identidad– es una forma de acoso.

Este uso perverso de la Ley de Derechos Civiles, ¿es inherente a su diseño? ¿De aquellos polvos, estos lodos?

No lo creo. Para explicar qué ha pasado, hay que comprender hasta qué punto se ha degradado el mismo concepto de las libertades civiles. Cuando se escribe la Ley, a comienzos de los años sesenta, aún existe una comprensión básica del valor fundamental de las libertades civiles: se ven como constitutivas de la ciudadanía, una ciudadanía a la que todo el mundo aspira, y que implica la libertad de protestar a favor de esos derechos, de denunciar a supremacistas blancos o, simplemente, de votar. En fin: hacer cosas que puedan molestar a otros ciudadanos pero que constituyen el ejercicio de un derecho fundamental. Ahora, es verdad que la Ley de Derechos Civiles asume un gobierno federal fuerte, capaz de contrarrestar focos regionales de resistencia. Pero es un gobierno federal no concebido como alta autoridad, sino como expresión de la legitimidad democrática.

¿Qué ha ocurrido desde entonces?

Ha ocurrido lo que ya hablamos: se ha reescrito la relación entre derechos civiles y seguridad. Y esto, a su vez, ha redefinido la relación entre gobierno y ciudadanía. Hoy estamos en una situación donde lo que nos hace sentir inseguros es el hecho de que otros ciudadanos *ejercen sus libertades civiles*.

El papel principal de la autoridad ya no es garantizar los derechos, sino garantizar la seguridad. Y cualquiera que busque ejercer sus libertades tiene como obligación primero demostrar que, al ejercerlas, no amenaza la sensación de seguridad de los demás.

En su ensayo, subraya que todo esto, incluida la dependencia cada vez mayor de una autoridad protectora, acaba por reforzar las relaciones de poder existentes. Al fin y al cabo, solo ciertos grupos –los que ya tienen poder o cuentan con el apoyo de las autoridades– pueden hacer valer su supuesto derecho a sentirse no amenazados. Otros tienen menos suerte.

Es lo que pasa cuando se dejan de garantizar los derechos por principio.

Y no ayuda que tanto universidades como estudiantes vean su relación cada vez más en términos transaccionales: la universidad proporciona un servicio a un estudiante consumidor.

Exacto. Hoy lo que se vende, además de la credencial que te servirá en tu vida profesional, es una *experiencia* de cuatro años. Dentro de ese marco consumista, se entiende que cobre más importancia la sensación de seguridad.

También se entiende que las universidades están tan dedicadas a promover su marca que su prioridad principal es evitar el riesgo del daño reputacional.

En este sentido, me parece que hay una pregunta central que se ha perdido de vista. ¿Cuál es el origen de la autoridad de las universidades? ¿Qué justifica que el gobierno financie, al menos de forma parcial, estos extraños lugares elitistas que la gran mayoría de las personas nunca pisarán? Desde luego, su autoridad no es que haga sentirse seguros a las personas que sí están allí. Su autoridad tampoco consiste en su capacidad de mantener una política de relaciones públicas que evite todo riesgo. Mira, siempre habrá personas que odian las universidades y la libertad de cátedra, sobre todo en la derecha. Esto nunca va a cambiar. Aun así, las universidades tienen mucho crédito social. Lo que ocurre es que durante las últimas décadas lo han malgastado de forma espectacular, traicionando su razón de ser, refugiándose en una insularidad totalmente injustificable. En ese sentido, toda la energía institucional que se ha invertido en la mitigación de riesgo ha sido contraproducente, hasta destructiva. Al fin y al cabo, asumir la misión universitaria, incluida la libertad de cátedra, significa asumir riesgos. En cambio, fingir que quienes están en la universidad son aún más vulnerables que los que viven fuera de ella –que lidian con problemas mucho más graves– es de locos.

Al final de su ensayo, reivindica “una cultura de la tolerancia, incluso ante lo que, a veces, parece intolerable”. Y agrega: “Si esta visión parece demasiado permisiva, valga esto como límite inherente: cualquiera que sea el derecho que reivindican para sí mismos quienes protestan, ese mismo derecho lo están reivindicando para sus enemigos”. ¿Es un regreso a un liberalismo clásico?

Sí y no. Es importante que la institución sea neutral y que proteja la libertad académica de cualquiera de sus miembros –un derecho que será ejercido en la medida en que esos miembros estén convencidos de que contarán con esa protección–. Esto significa que la propia universidad se comprometa con la libertad de cátedra como principio, sin adoptar posiciones partidistas en

otros debates políticos. Esto tiene mucho del liberalismo clásico. Pero mi posición también reconoce los límites de ese liberalismo porque parte de determinados factores materiales y económicos. Entre ellos figura una realidad institucional que incluye una clase administrativa profesionalizada muy bien remunerada y en permanente expansión, además de una clase de donantes y unos consejos rectores poblados de empresarios y políticos cuya experiencia académica es nula.

En otras palabras, no podemos fiarnos de las autoridades universitarias para la protección de los principios.

Para nada. Tendrá que ser un proceso comunal que empiece por exigir a las administraciones un nivel de transparencia mucho mayor. Que se abran los libros de contabilidad, que se dejen de crear nuevos puestos administrativos y que las universidades vuelvan a ser gobernadas por las y los académicos.

[Fuente: [Ctxf](#)]

Meagan Day

Las «tradwives» presagian un colapso sistémico

Conversación con Kristen R. Ghodsee

Las revistas femeninas, que antes estaban repletas de reglas arcanas para la sumisión de la mujer, evolucionaron hasta quedar irreconocibles desde la publicación del clásico feminista de Betty Friedan, La mística de la feminidad (1963). Ahora, las feministas del siglo XXI observan con horror cómo las autodenominadas tradwives llenan sus páginas con consejos sobre [el matrimonio](#) (“Como esposas tradicionales, estamos llamadas a honrar y elevar a nuestros maridos, no a derribarlos”) y [el trabajo](#) (“No hay nada de malo en tener un pequeño trabajo, tal vez hacer de canguro alguna noche”).

La antropóloga Kristen Ghodsee considera que el fenómeno de las tradwives es más que una simple moda en las redes sociales. La nostalgia pasajera por un régimen de género romántico y pasado refleja presiones sistémicas más amplias, tanto sobre las élites, que se enfrentan a importantes cambios económicos con el potencial de generar malestar masivo, como sobre las mujeres corrientes, que están ansiosas por escapar de la doble expectativa opresiva del trabajo explotador y el cuidado sin apoyo.

Kristen Ghodsee es autora, entre otros libros, de [Why Women Have Better Sex Under Socialism](#) (‘Por qué las mujeres tienen mejor sexo en el socialismo’) y [Everyday Utopia](#) (‘Utopía cotidiana’) y dirige el departamento de estudios rusos y de Europa del Este de la Universidad de Pensilvania. Basándonos en sus investigaciones sobre las dimensiones de género del socialismo en Europa del Este y la transición al capitalismo, hablamos con ella sobre cómo se utilizaron los roles de género tradicionales para gestionar las crisis económicas, los usos sociales de la autoridad patriarcal y la forma en que la insatisfacción real de las mujeres con malas condiciones laborales (remuneradas y no remuneradas) se desvía de la acción colectiva hacia fantasías individuales de renuncia que, en última instancia, socavan su autonomía.

¿Por qué se está produciendo ahora el fenómeno de las tradwives?

Estuve pensando en ello desde la perspectiva de una antropóloga e historiadora de Europa del Este. Tengo dos observaciones relacionadas entre sí. En primer lugar, en el *Leviatán*, de Thomas Hobbes, obra fundamental para la civilización occidental y justificación del Estado, se sostiene que las personas no obedecen de forma natural al soberano, aunque lo necesiten. Deben ser entrenados en los hábitos de obediencia. Explica que las personas aprenden la obediencia del paterfamilias, el padre de la familia y cabeza de hogar.

Concretamente, Hobbes basó su teoría en el ideal republicano romano de la [patria potestas](#), según el cual el padre tenía un poder incuestionable sobre la vida y la muerte de sus hijos y esclavos. Los roles de género tradicionales dentro de la familia nuclear preparan a las personas para aceptar sin cuestionamientos el liderazgo del soberano o del dictador.

Por lo tanto, no es de extrañar que, al tiempo que asistimos a un giro global hacia la neodictadura y la política de hombres fuertes de derecha, también veamos un renovado énfasis en la familia

nuclear tradicional liderada por un padre masculino fuerte que educa a las personas para que sean obedientes. El fenómeno de las “esposas tradicionales” y la “manosfera” son dos caras de la misma moneda, que reflejan este giro hacia la política autoritaria.

Mi segunda observación se refiere a las crisis económicas. Tras la caída del Muro de Berlín en 1989, cuando la economía de Alemania Oriental se dismanteló mediante la privatización y liquidación de las empresas estatales, el desempleo alcanzó alrededor del 40% en 1991. ¿La solución? Devolver a las mujeres al hogar. Los funcionarios razonaron que, dado que las mujeres son amas de casa por naturaleza, tenía sentido reducir las tasas de desempleo sacándolas de la población activa.

En 1991, el ministro de Finanzas de Bulgaria, Ivan Kostov, que más tarde se convirtió en primer ministro, declaró al Banco Mundial que “el desempleo es un problema acuciante, que alcanza el 10% este año. Una solución podría ser animar a las mujeres, que representan el 93% de la población activa, a abandonar la fuerza laboral y volver con sus familias, incluso si esto supone una pérdida temporal del poder adquisitivo de las familias”.

Esta estrategia se utilizó en repetidas ocasiones. Cuando se produce una crisis económica, ya sea con la introducción del capitalismo en sociedades anteriormente socialistas o, en nuestro momento actual, por la llegada de la inteligencia artificial (IA), los gobiernos necesitan reducir rápidamente la población activa sin provocar disturbios sociales. Empujar a las mujeres de vuelta al hogar es una solución. Hay precedentes históricos de esto incluso en Estados Unidos, cuando se incorporó a las mujeres a la población activa durante la Segunda Guerra Mundial y luego se las envió de vuelta al hogar al terminar la guerra.

No creo que Donald Trump esté jugando al ajedrez en cuatro dimensiones, la gente le da demasiado crédito. Pero personas como Elon Musk están pensando sin duda en las perturbaciones que la IA causará en el mercado laboral. La IA pronto eliminará muchos puestos de trabajo. Existe una necesidad apremiante de evitar un alto desempleo, que podría provocar el caos social. Promover los roles de género tradicionales con esferas separadas de trabajo, trabajo remunerado y trabajo doméstico no remunerado, tiene el bonito efecto de reducir la población activa formal cuando desaparecen los puestos de trabajo. Es probable que algunas de las personas poderosas que promueven los roles de género tradicionales se den cuenta de ello.

Pero hay una contradicción: estas mismas personas están creando productos que reducen la necesidad de mano de obra humana y, al mismo tiempo, dicen que necesitamos más humanos. En una reciente entrevista en Fox News, cuando se le preguntó qué le quitaba el sueño, Musk [dijo que](#) era la caída de la tasa de natalidad. Esa es su principal preocupación. Esto tiene sentido si eres un oligarca, ya que dos tercios de la economía estadounidense provienen del gasto de los consumidores. Y tendrás un problema si no hay suficiente gente que vaya a comprar tus productos.

Los roles de género tradicionales son útiles para abordar ambos problemas, ya que promueven la idea de que las mujeres abandonen la fuerza laboral y tengan más hijos. Las élites a las que representa Musk se dan cuenta de que reforzar los roles de género tradicionales incentiva a las mujeres a aceptar no tener trabajo y depender económicamente de sus parejas, lo cual es una forma de capear el próximo choque exógeno del sistema, así como impulsarlas a tener más hijos, lo cual es importante para evitar el colapso del consumo.

¿La idea es que enviar a las mujeres al hogar reducirá la mano de obra lo suficiente como para aumentar los salarios de los trabajadores que quedan –los hombres– y así resucitar el mítico modelo de la familia con un solo ingreso?

Sí, en teoría, porque una mano de obra más reducida significa una presión al alza sobre los salarios. Pero hay otros efectos, y ahí es donde entra en juego la teoría hobbesiana. Si hay un único patriarca con un salario familiar, se refuerza la familia nuclear patriarcal tradicional que genera obediencia entre las mujeres y los niños que dependen del padre para su sustento material.

Esto crea una dinámica familiar patriarcal que enseña a las personas a ser deferentes con la autoridad arbitraria, frena la disidencia y deteriora la autonomía de las mujeres y su capacidad para salir de situaciones abusivas. En realidad, no sabemos con certeza si enviar a las mujeres a casa aumentaría los salarios de los hombres, especialmente con un impacto tan profundo como el de la IA. Pero incluso si fuera así, los problemas culturales serían insoportables desde la perspectiva de los derechos de las mujeres.

Hablamos de lo que está pasando en la mente de las élites, pero ¿qué hay de la gente corriente? ¿Por qué las mujeres normales consumen contenidos sobre *tradwives*?

No es bueno, divertido ni agradable ser una trabajadora estadounidense. El capitalismo es horrible. Muchas mujeres que trabajan no lo pasan bien. Les intrigan las alternativas, pero no hay ninguna, así que buscan un pasado idealizado.

Ahora esto tiene una nueva cara, pero no es algo del todo nuevo. Recuerdo que cuando Trump fue elegido en 2016, se hizo una encuesta en la que se preguntaba a las mujeres estadounidenses si querían ser como Hillary Clinton o como Melania Trump. Y la imagen de Melania, tumbada en la piscina en traje de baño con unas grandes gafas de sol Gucci, le ganó a la de la política culta Hillary Clinton.

Esto refleja una corriente de misoginia en la cultura estadounidense que nunca desapareció del todo y que las propias mujeres interiorizan. Las niñas crecen con cuentos de Cenicienta de todo tipo, desde la versión original de Disney hasta *Pretty Woman*, en los que son elegidas y salvadas de una vida de trabajo brutal y horrible por un hombre rico. Estas narrativas son poderosas.

Las personas quieren ser valoradas, y en la sociedad capitalista, el prestigio está vinculado a la riqueza (riqueza en dinero, pero también en tiempo). El contenido de las *tradwives* es pornografía de la riqueza, pero de otro tipo. Todo se basa en la existencia de un marido con altos ingresos.

¿Conoce la tendencia de la *soft life* ('vida suave')? Se trata de contenido en las redes sociales, principalmente creado por y para mujeres de la generación Z y *millennials*, sobre cómo vivir una "vida suave": no trabajar tanto, no esforzarse, dejar de luchar,

reducir el ritmo, relajarse. En su mayoría, es contenido muy esteticista sobre beber zumos verdes y cuidarse.

No es tan ideológico como el contenido de las *tradwives*, pero expresa la misma insatisfacción con el trabajo. Es atractivo. Pero la realidad es que una verdadera “vida suave” bajo el capitalismo requiere un marido rico o unos padres ricos. No es posible vivir así todo el tiempo sin renunciar a la independencia y la autonomía que tanto costó conseguir. Dadas las presiones del trabajo en general, por no hablar del equilibrio entre el trabajo y las responsabilidades familiares, algunas mujeres se preguntan sinceramente si ese intercambio merece la pena.

Es triste, porque aquí hay un impulso anticapitalista incipiente que está siendo secuestrado con fines reaccionarios. La sensación de mirar las relaciones de explotación de clase del capitalismo y decir “no quiero seguir participando en esto” podría convertirse en una organización colectiva, pero en cambio se convierte en fantasías de escape individual. El camino de la *tradwife* parece más fácil y socialmente más aceptable que unirse a una organización política y luchar por la justicia.

La verdad es que la izquierda tiene algunas buenas respuestas a las preguntas que se plantean las mujeres, respecto de la forma de conciliar la vida laboral y familiar, o incluso tener hijos, si eso es lo que quieren. La derecha, por el contrario, no tiene realmente buenas respuestas.

Existe la visión misógina de que el feminismo volvió egoístas a las mujeres, que no están haciendo lo que les corresponde por naturaleza –tener hijos– y que, en cambio, se están convirtiendo en “mujeres sin hijos y con gatos”. Pero las mujeres son seres racionales que analizan el mercado laboral, los costos de criar a un hijo, la falta de apoyo estatal y todas las renuncias que tendrían que hacer, y algunas de ellas deciden no tener hijos.

En la Alemania Oriental y Bulgaria bajo el socialismo, el Estado subvencionaba el cuidado de los niños. Había subsidios por hijos, permisos parentales remunerados con protección del empleo y otras políticas favorables a la familia. Era un sistema que apoyaba a las mujeres para que trabajaran y tuvieran hijos si lo deseaban, y la mayoría hacía ambas cosas. Más importante aún, cuando se les preguntaba, la mayoría de las mujeres respondían que querían hacer ambas cosas.

Cuando esas empresas se privatizaron con la introducción del capitalismo, esos recursos desaparecieron. Los funcionarios intentaron empujar a las mujeres al hogar, pensando: “En lugar de que el Estado pague por estos servicios, las mujeres lo harán gratis porque eso es lo que se espera de ellas”. Creían sinceramente, al igual que la derecha estadounidense actual, que la mayoría de las mujeres serían más felices en casa con sus hijos, haciendo yoga, viendo telenovelas, haciendo pan de masa madre u ordeñando vacas. Pensaban: “Enviaremos a las mujeres a casa a hacer el trabajo por el que antes pagábamos, tendrán más hijos y todos serán más felices”.

Pero la evidencia contradice esto. [Según las Naciones Unidas](#), Bulgaria es el país que más rápido se está despoblando en el mundo debido a la emigración y a tasas de natalidad muy bajas, y esto ocurre desde la introducción del capitalismo. Vemos patrones similares en Corea del Sur y Japón. Una vez que las mujeres tienen independencia económica y pueden tomar decisiones sobre sus vidas, tener un hijo significa perder esa autonomía a menos que haya un

apoyo estatal masivo. La evidencia histórica [sugiere que](#) empujar a las mujeres de vuelta al hogar sin inversiones de este tipo va a reducir las tasas de natalidad, no a aumentarlas.

Las ideas de la derecha pueden no ser funcionales, pero siguen siendo atractivas para algunas personas desesperadas por imaginar una alternativa a la insostenible situación actual. ¿Cómo podemos convencer a las mujeres que quieren escapar de las presiones del trabajo bajo el capitalismo para que miren hacia un futuro progresista en lugar de hacia un pasado reaccionario?

Hay un hermoso ensayo de Nadezhda Krupskaya de alrededor de 1899 titulado [La mujer trabajadora](#) sobre qué hacer con las campesinas rusas, que en su mayoría eran analfabetas y carecían de conciencia política. Ella sostiene que las mujeres solo se politizan asistiendo a eventos políticos: hay que reunir a la gente, y cuando una mujer siente la fuerza de sus compañeras, de repente, comprende su poder. Cuanto más asiste, más se radicaliza.

Las feministas liberales son miopes cuando piensan que se puede convencer a la gente de que el mundo podría ser diferente. Tenemos que entender que lo que más necesita la gente después de lo básico –como agua, refugio, comida, asistencia sanitaria y educación– es estima. Necesitan sentirse parte de una comunidad que las ama, las admira y las aprecia. La experiencia de formar parte de esa comunidad puede transformar la conciencia muy rápidamente. Es el antídoto contra navegar por las redes sociales de forma aislada y caer en la trampa de las *tradwives*.

Esto tiene que empezar desde abajo, organizando reuniones en las que la gente pueda hablar y conocerse, o incluso simplemente salir a tomar algo y a hablar de política y de sus vidas. Tenemos que ser creativos. La clave está en construir un contexto de contención para que las mujeres conecten sus luchas personales con el sistema en general. Porque si no lo hacemos, la derecha aprovechará el descontento de las mujeres para promover su agenda, que es lo que estamos viendo hoy en día.

[Fuente: [Ctxt](#). Esta entrevista [se publicó originalmente en Jacobin](#). Trad. de Pedro Perucca]

Gustavo Duch

Aforismos necrocomerciales

Al mismo tiempo que el Centre Delàs revelaba los [contratos de compra de armas entre Israel y España](#), el sindicato agrario COAG volvía a recordarnos que al entrar en el mes de mayo, desde hace ya varios años, las grandes cadenas de distribución inundan los lineales con [patatas importadas de Israel](#), mientras en nuestros campos ya se está cosechando la patata nueva. Si con las guerras se enriquecen las empresas armamentísticas, con la importación masiva de patatas foráneas lo que se consigue es forzar al campesinado local a malvender su patata a precios de miseria. Ambos son negocios de explotación.

[Hace diez años ya se publicaban](#) noticias sobre camiones españoles cargados de patatas nuevas que viajaban hacia Francia; en el trayecto de vuelta, la carga era de patatas viejas del país vecino, de peor calidad. El poder en el libre mercado lo ejerce el poder adquisitivo.

En 1925, ocho empresas, entre ellas Bayer y Basf, fundaron la compañía química más grande de aquel entonces: IG Farben. En 1933, IG Farben brindó apoyo financiero al partido nazi que, una vez en el poder, le devolvió el favor comprándole millones de latas de uno de sus más efectivos pesticidas, el Zyklon B, que se utilizó en las cámaras de exterminio. El negocio de matar, la guerra y la agroindustria, siempre han ido cogidos de la mano.

Se llamó 'agente naranja' al herbicida con el que las tropas estadounidenses rociaban los bosques y campos de cultivos en la guerra del Vietnam. Fabuloso veneno para descubrir los escondites del enemigo, fabuloso para hacerles sufrir hambre. Uno de sus máximos productores, Monsanto, patentó años después el que hoy sigue siendo el pesticida más vendido en el mundo, el glifosato. No consuela que Monsanto desapareciera, se lo comió Bayer.

El glifosato es, producción y ventas, la principal arma química agrícola. Y en el [ranking](#) de las cinco mayores productoras de esta sustancia cancerígena encontramos a Bayer y Basf, así como a Syngenta (en manos de la compañía estatal china ChemChina) y Adama, una de sus divisiones. El glifosato es un digno sucesor del Zyklon B y el agente naranja. Para quienes negocian con él, quema y rinde por igual.

Como dicen en su web, la historia de ADAMA comienza con cuatro jóvenes emprendedores cuya pasión por la química los llevó a poner en marcha dos empresas de protección de cultivos (eufemismo), Agan (1945) y Makhteshim (1952). Ambas empresas se fusionaron en 1997 para crear Makhteshim Agan que en 2014 pasó a llamarse ADAMA. Que Agan y Makhteshim fueran empresas israelitas y que la sede central de ADAMA siga en este país dice mucho de su poderío agroindustrial.

Israel es una potencia en armamento y agroquímicos. Como hemos visto, fabricar armas, exportarlas y explotarlas, y fabricar pesticidas, exportarlos y rociarlos, son dos negocios hermanos.

El problema de los círculos es que se cierran.

[Fuente: [Ctxf](#)]

Clément Quintard

Militarizar la ecología, el nuevo espíritu del imperialismo

Las desgracias nunca vienen solas. Teníamos ya el aumento de la temperatura, la acidificación de los océanos, la contaminación atmosférica, la intensificación de las catástrofes meteorológicas, la multiplicación de los incendios forestales y la erosión de la biodiversidad, pero faltaba el aliño indispensable para ligar todos los sabores del caos: la amenaza de un nuevo conflicto mundial.

Para salpimentarlo todo, las [crisis geopolíticas actuales](#) se hibridan con las convulsiones ecológicas y allanan el camino a nuevos envites imperialistas. Los diplomáticos y militares de las grandes potencias son ahora conscientes de que el calentamiento del planeta tiene unas implicaciones estratégicas profundas. La crisis ecológica es para ellos no solo un factor de riesgos inéditos (sumersión de territorios, escasez de recursos, migraciones masivas, epidemias, disturbios civiles), sino también de oportunidades que hay que aprovechar (nuevas rutas terrestres y marítimas en las que invertir, acceso a filones de minerales y de hidrocarburos que hasta ahora eran inexplotables). Tanto más cuanto que los recursos de los que se trata de apoderarse son a la vez los de la «transición» y los del *business-as-usual*.

Así, la codicia del presidente estadounidense Donald Trump por [Groenlandia](#) y [Canadá](#) se explica por la presencia en el círculo polar de yacimientos mineros estratégicos (uranio, grafito, oro, cobre, níquel...) y de [hidrocarburos](#) (al parecer el subsuelo ártico contiene el 13% de las reservas mundiales de petróleo por descubrir y el 30% de las de gas natural), pero también por la voluntad de implantar nuevas bases militares para cuestionar la supremacía de Rusia en la zona, país que ya dispone de varios puertos en las costas de Siberia.

El telón de fondo de los [continuos enfrentamientos militares en Cachemira](#) es una «guerra del agua» entre un país que está aguas arriba, India, y que amenaza con desviar parte del río Indo gracias a sus presas, y un país que está aguas abajo, Pakistán, para el que cualquier reducción del caudal constituye un «acto de guerra». Recordemos de paso que ambos países poseen la bomba atómica.

El marco de seguridad y las mentiras del Estado

El clima de destrucción mutua se manifiesta en el aumento vertiginoso del gasto militar. En 2024 aumentó casi el 10 %, el mayor incremento desde el final de la Guerra Fría según [un informe reciente](#) publicado por el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI, por sus siglas en inglés).

Evidentemente, Francia quiere mantener su rango de potencia imperialista en este contexto belicoso. El pasado 20 de febrero Emmanuel Macron [anunció](#) que quería aumentar el presupuesto militar desde el 2,1% del PIB al 5% y plegarse a [la «petición» de Estados Unidos](#), que había amenazado con retirarse de la OTAN si sus aliados europeos no llegaban a esa cifra y que pretende inundarlos con armas *made in USA*. En caso de que Estados Unidos deserte, el

presidente francés, cuyo [tropismo militar](#) es conocido desde hace mucho, sueña con ser [el jefe de la guerra europea](#).

Como señala el [economista Claude Serfati](#), relanzar la carrera de armamentos permitiría a Francia compensar su retroceso en los mercados mundiales potenciando los principales sectores de rendimiento económico e innovación franceses: la energía nuclear, la aeronáutica y la producción de armas, con todo lo que implican la ultracentralización autoritaria y la aureolada existencia de mentiras de Estado de estas industrias.

Guerra total y guerra social

Unas nuevas ambiciones militaristas por las que los grandes empresarios franceses apenas pueden disimular su entusiasmo. El director general de Total [Patrick Pouyanné](#) ve en ello una oportunidad de ganancia ya que, en su opinión, no se puede preparar la guerra militar sin llevar a cabo una guerra social: «¡Para aumentar el presupuesto de defensa a un 5% del PIB, habrá que encontrar dinero en alguna parte! Si se considera que la libertad y la soberanía (y, por tanto, tener los medios para defenderse) deben prevalecer sobre la solidaridad, hay que tener el valor de revisar determinados presupuestos sociales», afirmó el 17 abril 2025 en [una entrevista que le hizo el diario francés Figaro](#).

Frente a las crisis ecológicas, el capitalismo nos acerca cada día un poco más a la aniquilación generalizada, ahora con la ayuda de la fuerza armada. Un «llevar las cosas hasta el final» que Marx describía ya en 1867 en *El Capital*: «Todo el mundo sabe que un día llegará la debacle, pero todo el mundo espera que arrase a su vecino después de que él mismo haya recogido la lluvia de oro a su paso y la haya puesto a buen recaudo. “¡Après moi le déluge!”», ese es el lema de todo capitalista y de toda nación capitalista».

Todo ello son razones para que el movimiento ecologista recupere sus raíces antiimperialistas, antimilitaristas y antiautoritarias. En ello está el movimiento *Soulèvements de la terre* que en [una campaña reciente](#) llama a crear una amplia coalición para «hacer a guerra a la guerra». Pero no es eso en lo que está esta socialdemocracia belicista que, cuando se avecinan grandes acontecimientos históricos, nunca deja pasar la oportunidad de ser [oportunista](#) e [inconsecuente](#) a partes iguales. Más que nunca hay que elegir en qué bando se está.

[Fuente: [Rebelión](#). Texto original en [Fracas](#). Trad. de Beatriz Morales Bastos]

La Biblioteca de Babel

El problema de la vivienda

Cómo desactivar la bomba de relojería que amenaza con colapsar España

Arpa & Alfíl Editores Barcelona 2025 280
A. R. A



La vivienda es ahora la principal preocupación de la población. Especialmente para jóvenes, inmigrantes, y cualquiera que necesite un nuevo hogar. Es un problema que atraviesa la historia urbana reciente, y cuyas formas cambian con el tiempo. Javier Burón, experto en el sector, con experiencia en políticas progresistas, y buen conocimiento, elabora una interesante reflexión, analítica y propositiva. El libro está organizado en cuatro partes. En la primera se identifica el problema. La segunda repasa la historia de la cuestión en España, desde el desarrollismo franquista hasta la crisis actual. La tercera, la más sugerente, está dedicada a repasar las políticas propuestas y a exponer las que en su opinión y experiencia mejores resultados pueden dar. La última, con el título «¿Por qué no lo solucionamos?», trata de analizar las razones sociales que frenan la adopción de buenas políticas, y la necesidad de desarrollar algún tipo de acuerdo social intergeneracional para resolverlo. Concluye con una breve exposición de experiencias americanas. Bien escrito, con sentido del humor, y con muchas ideas y conocimiento detrás. Propone una batería de propuestas, no revolucionarias, factibles en el marco actual. Aunque necesariamente disruptivas frente a un mundo dominado por rentistas y especuladores. Seguramente complementario de otros trabajos, como el de Jaime Palomeras (a quien aludió amistosamente el día de la presentación del libro en Barcelona). A Javier Burón le tenemos que agradecer el impulso que dio en política de vivienda en Barcelona en el anterior mandato (una de sus propuestas, la reserva del 30% de las nuevas promociones para vivienda pública, es el centro de la contrarreforma emprendida por el actual consistorio de Jaume Collboni). Este libro va a ser imprescindible para pensar políticas de respuesta a una cuestión urgente.

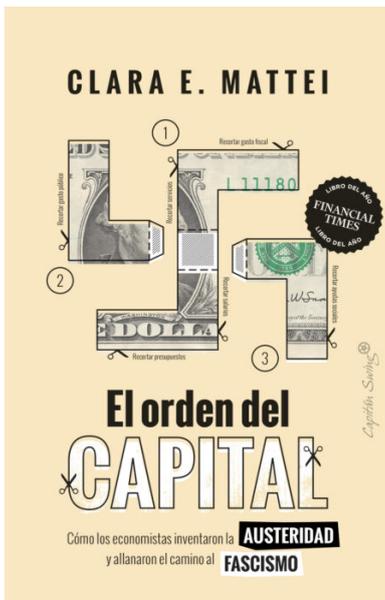
El orden del capital

Cómo los economistas inventaron la austeridad y allanaron el camino al fascismo

Capitán Swing Madrid 2025 512

La ideología de la austeridad como bastión de defensa del capitalismo

Francesc Bayo



La editorial Capitán Swing acaba de traducir al castellano el libro titulado *El orden del capital: Cómo los economistas inventaron la austeridad y allanaron el camino al fascismo*, en el que la economista italiana y profesora de la Universidad de Tulsa, Clara E. Mattei, indaga en los orígenes hace un siglo de la construcción de la ideología de la austeridad, cuya intención era proporcionar unos mecanismos correctores a favor del capital para contrarrestar las mejoras salariales y de las condiciones de trabajo, obtenidas mediante los avances de organización y acción del movimiento obrero en Gran Bretaña e Italia en el periodo de entreguerras. En la elaboración del libro su autora ha efectuado una investigación minuciosa en diferentes archivos británicos e italianos, donde ha trabajado con documentación oficial de los gobiernos y otras instituciones públicas, en particular las vinculadas a la banca y las finanzas, y también ha efectuado un vaciado muy importante de los medios de comunicación de la época, tanto los de orientación burguesa como los de la amplia gama de prensa de izquierdas.

La elección de estos dos países obedece a la hipótesis de la autora, que pretende mostrar cómo la austeridad funciona como un mecanismo de disciplina que permite frenar el avance del poder de las clases subalternas y así recuperar el dominio del capital. Es importante reseñar que el fenómeno funcionó igual en una economía industrial más avanzada y regida por un sistema político liberal (Gran Bretaña), como en una economía algo más atrasada que tenía por un lado unos enclaves avanzados de organización y movilización obrera de orientación socialista, mientras que por otro las organizaciones fascistas apuntaban hacia avances significativos (Italia). En lo que coinciden ambos casos de estudio es que el sufragio universal se estaba empezando a consolidar, aumentando la participación popular, y en la evolución de un movimiento obrero con

un importante crecimiento organizativo que permitía mejoras salariales y sociales, y sobre todo con la capacidad de desarrollar una ideología alternativa precisamente en unos momentos —tras la Primera Guerra Mundial— en que el sistema capitalista había estado prácticamente intervenido por el Estado para focalizar todos los esfuerzos en la economía de guerra.

En ese contexto derivado del reconocimiento de la posibilidad de que el Estado organizara a la sociedad en dirección a un objetivo colectivo concreto como en su momento fue la guerra, ganó impulso la capacidad del movimiento obrero organizado para generar un discurso alternativo al del capitalismo, porque se entendía que ese objetivo colectivo podría ser reconducido en tiempo de paz a mejorar el bienestar de toda la población. En el caso de Italia ese pensamiento se articuló alrededor de la revista *Ordine Nuovo*, que fundaron Antonio Gramsci, Palmiro Togliatti y otros intelectuales el 1 de mayo de 1919 en Turín, y fue la antesala de la fundación del Partido Comunista de Italia dos años más tarde. En cuanto a Gran Bretaña, el movimiento obrero había logrado importantes avances organizativos con formaciones sindicales potentes en diferentes sectores industriales y en la minería, que habían logrado aumentos salariales y otras mejoras sociales, y además también habían desarrollado un discurso alternativo al sistema capitalista donde la clave consistía en la participación democrática sobre la organización económica y social del país.

Es cierto que tanto en el movimiento obrero británico como en el italiano había una división importante entre los partidarios de una alianza de los gremios y las cooperativas con el Estado, y los partidarios de una acción colectiva más directa a través de los denominados consejos de fábrica. Pero lo más relevante de la tesis del libro es la reacción del entorno del sistema capitalista para construir una ideología reparadora del orden del dominio del capital en un momento que parecía perder fuerza, y además aderezada con la consagración de la tecnocracia como instrumento para llevarla a cabo. De ese modo se separó la dirección política de la dirección económica, atribuida esta última a menudo a una pléyade de asesores externos a los gobiernos, que a partir de entonces construyeron una esfera reservada a los expertos —que fundamentalmente estarían exentos del control democrático de la ciudadanía.

El fenómeno de la creación de la esfera tecnocrática es el otro pilar de la tesis del libro de Mattei, ya que la construcción de la ideología de la austeridad se concibió en dos encuentros internacionales, uno organizado por la Sociedad de Naciones en Bruselas (1920) y otro por el Consejo Supremo de los Aliados en Génova (1922), en los que se reunió a lo más granado de los economistas conservadores vinculados a las finanzas públicas y a los bancos centrales de los países europeos del capitalismo avanzado de la época. Además, a diferencia de la convención general entre los historiadores que considera que esas reuniones acabaron en fiasco, porque no lograron alcanzar consensos sobre mecanismos de cooperación para la reconstrucción de la Europa de posguerra, en particular sobre el tratamiento de las deudas de guerra y los arreglos del desorden de las balanzas de pagos, la autora sostiene que sí que se alcanzó un consenso en lo relativo a promover la austeridad para volver a disciplinar los salarios y revertir las mejoras laborales. Y el otro gran logro de esos encuentros fue conseguir un consenso entre expertos de diferentes países respecto a la elevación de su papel tecnocrático como rectores de la política económica, o como mínimo de asesores especializados de los gobiernos, en detrimento de la democratización del control de la organización del desarrollo económico de los países.

Sintetizando la tesis de Elena Mattei, la ideología de la austeridad construida mediante el

consenso de esos expertos tecnócratas se ha sostenido en tres ámbitos donde se establecieron una serie de medidas coercitivas, y por ello la ha denominado también la ideología de la «trinidad de la austeridad». Es relevante la importancia que le da la autora a relacionar el entramado de los tres ámbitos, porque habitualmente es costumbre vincular la austeridad a las políticas presupuestarias y a las diferentes modalidades del gasto público, a lo que se junta a lo sumo algunas referencias a las políticas monetarias.

El primer ámbito, denominado «de la austeridad industrial», consiste en no considerar la función del trabajo como el fundamento de la actividad productiva, y en cambio mediante la supuesta mano invisible del mercado se adjudica la función imprescindible de la acumulación de capital a los que la autora denomina «los ahorradores/inversores». En consecuencia, para sostener el crecimiento económico y la prosperidad se ha considerado preciso el trasvase de las rentas del trabajo hacia los capitalistas, y para ello había que contener los salarios y frenar las demandas de mejoras en las relaciones laborales (limitación de jornada, vacaciones, prestación por desempleo, derecho a pensión de jubilación, etc.), así como limitar o eliminar el derecho de huelga para anular la capacidad combativa de los trabajadores.

Es interesante el punto de vista moral del argumento, porque estos expertos consiguieron así vestir la figura del capitalista/ahorrador/inversor no como un expropiador de la plusvalía del trabajo de otros sino como un eslabón necesario en la cadena de la acumulación del capital. A diferencia de los trabajadores, que en su ignorancia sobre los entresijos de la economía podrían malbaratar su parte de la ganancia, el empresario sí que tenía un criterio adecuado para saber cómo reinvertir los beneficios y además esa era en su concepción ideológica la única forma de hacer crecer la economía. De ese modo, al trabajador no sólo se le acabó desposeyendo de su papel preponderante en la función productiva —y por esa vía se le podía limitar el salario—, sino que además se le declaraba incapacitado para poder participar en la orientación y en la planificación de la producción. En definitiva, de esta forma se naturalizaba el orden del capital en el funcionamiento de la economía, estableciendo de facto un control con tintes autoritarios de la economía porque se alejaba la posibilidad de ejercer un auténtico control político democrático.

Después estaba el ámbito de la austeridad fiscal, porque se consideraba que el crecimiento del gasto público en los presupuestos (en particular todo aquel destinado a fines sociales) drenaba recursos financieros para la acumulación de capital. Por último, el ámbito de la austeridad monetaria se aplicaba para restringir el aumento del crédito y la liquidez en los momentos que los salarios aumentaban, y de ese modo mediante una recesión inflacionaria controlada se devaluaba el poder adquisitivo de los trabajadores. En estos dos casos también se consideró como muy importante la función de los expertos tecnócratas al margen del control democrático de su tarea, generalmente a través de los Bancos centrales, porque la capacidad de dirección de la política monetaria e incluso hasta cierto punto de las políticas presupuestarias se argumentaba que no se podía dejar al albur de cualquiera. En resumen, en los tres casos la ideología de la austeridad se sustentaba en dos principios fundamentales: el consenso, que se lograba imponiendo el criterio acordado exclusivamente por los tecnócratas, y la coacción que se perpetraba alejando a la ciudadanía de la capacidad de decisión democrática sobre las políticas y las regulaciones económicas del Estado.

En conclusión, el libro de Clara Mattei sobre los orígenes del concepto austeridad desde la perspectiva de clase dominante del capitalismo consigue acercarnos, desde un enfoque histórico,

una aproximación a una cuestión muy presente en las políticas económicas actuales. También es importante cómo desvela la forma en que la clase dominante se apropia de las virtudes del vocabulario del trabajo o la honestidad, para ponerlo al servicio de los intereses del capital. De este modo, la autora nos recuerda que el concepto y las políticas de la austeridad entendidas desde esa perspectiva de clase son anteriores al giro neoliberal de finales de los años setenta, y de hecho es consustancial a la evolución del capitalismo, motivo por el cual ha encontrado un arraigo tan importante en las interpretaciones de la economía y las políticas económicas en la época contemporánea.

Finalmente, la editorial menciona en la biografía de la autora que está trabajando en un nuevo libro donde reevalúa, desde un punto de vista crítico la denominada «era dorada del capitalismo (1945-1975)» y el keynesianismo, analizando ese período desde la perspectiva del capitalismo de austeridad.

20 5 2025

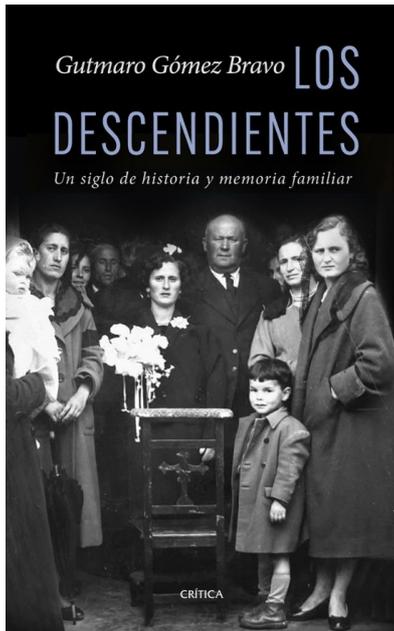
Los descendientes. Un siglo de historia y memoria familiar

Un siglo de historia y memoria familiar

Crítica Barcelona 2025 240

Un día, tú ya libre de la mentira de ellos, me buscarás

Isabel Alonso Dávila



Los versos de Luis Cernuda que dan título a esta reseña vieron la luz en Buenos Aires en 1943 y es una de las citas que elige Gutmaro Gómez Bravo para encabezar éste, su último libro, *Los descendientes. Un siglo de historia y memoria familiar*. Los versos de Cernuda que continúan también aparecen en la cita y dicen: «Entonces ¿qué ha de decir un muerto?».

Y en este libro, un ensayo de un historiador sobre su propia familia, escrito en primera persona, podemos ver que los muertos dicen y logran desvelar parte de sus secretos para entregárselos a los descendientes, aquellos hijos que ahora son padres y abuelos. Y a aquellos nietos que ahora son ya padres.

Gutmaro Gómez Bravo es un historiador bien conocido, tanto por sus libros como por sus colaboraciones en *El País*. Para el análisis de este su último libro quizás sea importante señalar que nació en 1975, al final del *baby boom*. Así que en este libro encontramos escribiendo a un *boomer*, que fue niño durante la Transición y joven en los años noventa. Es catedrático de Historia Contemporánea en la Complutense y, además de dedicarse al estudio de la violencia política y el control social en la España de la Guerra, el franquismo y la transición, también se ocupa frecuentemente de los temas relacionados con la memoria.

La lectura de este libro de Gutmaro me ha llevado a recordar otros que transitan también entre la memoria familiar y el contexto más amplio de la historia. Por ejemplo, *Los amnésicos, historia de una familia europea*, de Geraldine Schwarz (2019), y *Calle Este-Oeste*, de Philippe Sands (2017).

Pero Geraldine es periodista y Philippe abogado. Mientras que Gutmaro es historiador y, como profesional de la historia, aunque aquí le veamos ejercer como memorialista familiar, le vemos transitar cómodamente entre la memoria familiar y la historia colectiva. Hay múltiples ejemplos en el libro de esto. Por citar alguno de ellos, es interesante ver cómo pasa de las cartas que se escribían sus padres durante el noviazgo a una sociedad teñida de un nacional-catolicismo que lo impregnaba todo, o a la inauguración del «Valle de los Caídos» que se produjo el mismo año en que sus padres iniciaban su noviazgo, o al estreno teatral de *Ama Rosa* y el seguimiento masivo que tuvo en aquellos años, tan radiofónicos, y la cantidad de lágrimas que se vertieron escuchando la historia de la joven viuda que entrega su hijo en adopción a una familia rica entre la que se queda a «servir», teniendo que sufrir los desplantes de su hijo biológico que, desconociendo su origen y dada la mala educación clasista a la que ha sido sometido, desprecia a su madre biológica. Al recordar esta trama, explicada por Gutmaro, nos vamos directamente a temas como la cantidad de hijos y madres, que, mediante robos, separaciones forzadas o adopciones ilegales después de partos anónimos, terminaron viviendo situaciones marcadas por enormes secretos de familia que fueron tan abundantes en aquellos momentos y que dejaron un rastro de continuidad posteriormente.

Nos dice el autor que este libro —diferente del resto de las publicaciones académicas que nos ha entregado, como muestra, por ejemplo, la ausencia de notas al pie— nace de «una necesidad personal», que intuimos que está relacionada con la enfermedad degenerativa que sufre su madre, además del ictus y la caída de su padre, que llevan a Gutmaro a la urgencia de ordenar sus recuerdos, contar su historia a los hijos de sus hijos, que son los del historiador, nietos por tanto de los padres de Gutmaro, todos ellos «los descendientes» que dan título al libro. Esta necesidad de acercarse a su propia historia familiar la organiza de forma generacional, en un libro que se compone de una introducción, tres partes y dos epílogos, a través de cuatro generaciones.

La generación de los abuelos y las abuelas del autor, y la de su padre y de su madre, ocupan las dos primeras partes del libro. Por sus páginas vamos a ver aparecer a unos personajes que se mueven durante la Restauración, la guerra de Marruecos, el Desastre de Annual, el golpe de Estado de Primo de Rivera, la Segunda República, la guerra, la posguerra, la emigración del campo a la ciudad y de España a Europa. A veces, se alargará el autor hasta los bisabuelos y los hermanos de su abuelo, maestros como él, represaliados todos. Y la puerta que abre todo este mundo es «la bolsa desastre», una imagen genial que, nos cuenta el autor, se refiere a una bolsa de plástico que tenía tu madre siempre cerca. Con fotos, cartas, papeles, y que Gutmaro enlaza con los comentarios que hacía ella sobre estas fotos, estas cartas, estos papeles. Por ejemplo, de su abuela decía que «lo arreglaba todo llorando». También vemos aparecer en estas primeras partes las diferencias entre las familias de los abuelos maternos y paternos. Y las distintas versiones familiares sobre el abuelo Gundemaro Bravo. Unas, las versiones de los que se quedaron en Jerez. Otras, de los que se fueron. También los recuerdos del hambre, que llegan al autor fundamentalmente de boca de tu padre. También los de las maestras. Y hay que señalar una fuente fundamental para acercarse a la etapa de juventud del padre y la madre: las cartas que se escribieron. «Se escribieron todas las semanas durante más de dos años» y, en años sucesivos, incluso más, hasta dos cartas al día. ¡Qué volumen de fuentes! sobre la vida cotidiana, sobre los usos amorosos. Y es que, además, algunas de estas cartas se enviaron desde Gustavsborg (sur de Hesse, Alemania), acompañadas de giros de dinero. Y, claro, eso nos da muchas pistas. Y esta frase en una de ellas, acaba por cerrarlas: «Hay aquí una fábrica en la que admiten mujeres», que significa una propuesta y, nos dice el autor, que significó para los

protagonistas, su padre y su madre, que «habían encontrado una salida».

Como Gutmaro es historiador, de la fábrica en la que trabajaba su padre en Alemania nos lleva a los bombardeos aliados, a la entrada de las empresas americanas en Europa, como la General Motors y, de nuevo, de manera magistral, une la historia familiar con la colectiva. Así, por ejemplo: «De no ser por la decisión del mando aliado, que dejó intacta buena parte de la industria alemana, un millón de españoles, entre los que estaban mis padres, no hubieran podido emigrar en los años sesenta y setenta a Alemania». Emigración, la de sus padres, al margen de los sistemas oficiales del Instituto Español de Emigración. Esta etapa de Alemania es interesantísima en el libro, por las fotos, por la comparación entre vivir con libertad sindical, con derechos laborales, con memoria del Holocausto, también sabiendo de la deportación de republicanos españoles, y los silencios de España. Lo que les contaban los compañeros alemanes de trabajo sobre la Guerra, la diferencia de trato con los prisioneros entre los rusos y los alemanes: «[...] los rusos se habían portado mejor que ellos, te soltaban con un letrado con la dirección de tu casa, mientras nosotros matábamos a todos los prisioneros». Y la vuelta a España y lo que significó para la madre del autor, que pasó de ser una madre trabajadora, con guardería para su hijo, y que compartía las actividades de cuidado con el padre del niño, a ser ama de casa sin trabajo exterior y con división sexual del trabajo de forma tradicional, la que consideraban apropiada los cánones del nacionalcatolicismo.

Las generaciones del propio autor y la de sus hijos, que ocupan el resto del libro, nos llevan al presente y nos acercamos a unos hijos adolescentes «que consumen el pasado en formato virtual». Con ellos, entramos en la era de la desinformación, de los bulos, y vemos aparecer en Gutmaro el conflicto entre historiador y padre, en una sociedad en que «las formas tradicionales de transmisión del relato se han roto» y, esto es más grave, «a través del lenguaje virtual se consigue que el revisionismo y el negacionismo lleguen a calar en la cuarta generación, que recibe, de forma pasiva y voluntaria, la misma versión impuesta a sangre y fuego que recibió la primera. La memoria franquista, blanqueada en miles de memes [...]. La mayor parte de la sociedad española, de hecho, no considera que Franco fuera un dictador como Hitler, Mussolini o Stalin». Esto último lo tenemos muy claro quienes nos hemos dedicado a la enseñanza de adolescentes.

El libro consta de dos epílogos. Y el segundo consigue dejarnos en ascuas, ya que queda flotando en el aire un misterio sin resolver del todo. Un misterio que ya ha quedado anunciado en la introducción, cuando el autor nos ha dicho que, terminado el primer borrador, pudo acceder al expediente de su abuelo, conservado en el Archivo del Ministerio del Interior, con 308 páginas. Un acceso que ha sido costoso y tardío y que, además, significa «un descubrimiento que lo cambia todo. Un hallazgo, quizás el más importante, que resulta imposible incorporar al relato, a la propia versión familiar». Le dedica cuatro páginas y nos quedamos con la sensación de que, en este expediente, en estas 308 páginas rescatadas del archivo, hay materia para otro libro. Porque ya nos había advertido en la primera parte de que las cartas confirmaban la temprana colaboración del abuelo con los sublevados. Y nos había dicho que «nunca se ha abordado familiarmente un asunto en el que se ha dado por sentado todo lo contrario». Es decir, Gutmaro Gómez Bravo nos deja en un auténtico *cliffhanger* que, esperemos, tendrá su resolución en una próxima publicación del autor.

Nos dices que “nuestra propia familia” es “el más difícil de los sujetos de estudio”. ¿Nos podrías señalar alguna de estas dificultades y cómo las has superado en este libro?

En la lectura del libro nos enteramos del origen de que lleves este nombre tan poco frecuente, tan característico pero que, curiosamente, no reproduce exactamente el de la persona de tu familia que está en el origen de la opción. ¿Nos lo podrías explicar?

Hay un cierto pesimismo cuando cierras la introducción diciendo: “Todo es opinión en un tiempo en el que hemos renunciado a explicar, a entender el mundo. Las páginas siguientes pretenden dar fe de la facilidad con la que es posible mentir usando el pasado en nuestros días”. ¿Así ves la situación actual?

30 5 2025

En la pantalla

Pepe Mujica

Arte TV 2014, 88 min

José Mujica falleció el martes 13 de mayo, a los 89 años. Un retrato inspirador de una personalidad fuera de lo común. El exguerrillero, preso en varias ocasiones, presidió Uruguay entre 2010 y 2015, y lo hizo conformándose con el 10 % de su salario.

30 5 2025



<https://www.arte.tv/embeds/es/048584-000-A>

Sicilia, azotada por la sequía

Arte TV 2024, 30 min

En Sicilia los veranos cada vez son más calurosos y los expertos temen que un tercio de la isla quede desierta en 2030. Un escenario comparable al de Libia y Túnez. Por no hablar de las fugas en las tuberías de agua y los embalses en mal estado. Como consecuencia, el agua potable está siendo racionada en muchos lugares y los camiones cisterna se han convertido en parte del paisaje.

30 5 2025



<https://www.arte.tv/embeds/es/118265-021-A>

Documentos

Teresa de Fortuny y Xavier Bohigas

Informe 73: De la mina al campo de batalla. Materiales críticos para la industria de defensa

De un tiempo atrás, el Norte global manifiesta su preocupación por la dificultad de acceso a ciertos recursos materiales que le son necesarios. Primero se trataba de los combustibles fósiles. Preocupaba que, por ejemplo, el petróleo y el gas alcanzaran en breve sus máximos de producción, a partir de los cuales su extracción sería mucho más costosa (económica y energéticamente hablando) y que, además, iría disminuyendo la calidad del producto a extraer. Hoy la preocupación se centra en las llamadas materias primas críticas, imprescindibles para la transición energética y las tecnologías emergentes. Como dice la propia Unión Europea, la dependencia de materias primas críticas pronto puede sustituir a la dependencia actual del petróleo.

En este informe nos ocupamos de cómo esta problemática afecta a la industria de defensa. Y, de paso, al suministro a las fuerzas armadas. Hemos querido conocer la visión que sobre ello tienen la UE, Estados Unidos y la OTAN. Y también qué vías plantean para hacerle frente.

Existe un consenso bastante amplio a la hora de catalogar cuáles son las materias primas que pueden considerarse críticas para la defensa. En esta catalogación se tiene en cuenta, para cada material, el uso que hace el sector de defensa y el peligro de interrupciones en la cadena de abastecimiento.

En este trabajo se exponen las dificultades, actuales y futuras, de abastecimiento de materiales imprescindibles para la industria de defensa. Estas dificultades de abastecimiento, teniendo en cuenta el belicismo imperante, podrían conducir a conflictos armados que fomentarían aún más la carrera armamentística. La alternativa es clara: es necesaria una disminución radical de la militarización mundial, acompañada de la transformación de las actuales políticas basadas en el enfrentamiento y la amenaza a posiciones basadas en la colaboración y el diálogo. Sería una contribución a los esfuerzos contra la emergencia ecológica.

Lee y descarga [el resumen ejecutivo en castellano](#), [en catalán](#) y [en inglés](#), y [el informe completo en castellano](#), [en catalán](#) y [en inglés](#).

[Fuente: [Centre Delàs d'Estudis per la Pau](#)]

Ecologistas en Acción

Más de 200 organizaciones europeas denuncian que la UE está ocultando información sobre los proyectos mineros declarados estratégicos

La Comisión Europea ha publicado recientemente la lista de “proyectos estratégicos” bajo el Reglamento de Materias Primas Fundamentales para acelerar la obtención de minerales considerados estratégicos para la transición energética y digital y otras industrias como la armamentística. La consideración de proyecto estratégico permite la tramitación acelerada de permisos de explotación e impide una participación efectiva de las poblaciones locales.

Estos proyectos también tendrán un estatus prioritario en procesos administrativos y judiciales y recibirán ayuda de la Comisión Europea para obtener financiación. Otro aspecto muy preocupante es que una parte muy importante de los yacimientos de los llamados “minerales críticos” se encuentran muy cerca o dentro de zonas de protección especial como la Red Natura 2000 y los proyectos seleccionados podrán considerarse “de interés público superior”, debilitando la aplicación de las directivas ambientales de protección de la naturaleza.

Alertados por esta situación, numerosas organizaciones ecologistas y colectivos sociales de toda Europa [se han dirigido a la Unión Europea solicitando información](#) sobre estos proyectos para poder evaluar el impacto ambiental y social que causarán en el entorno. Ante la negativa de los organismos europeos a facilitar información básica relativa a estos proyectos mineros, 230 organizaciones (ONGs, bufetes de abogados y grupos formales e informales que trabajan en el estado de derecho, la protección del medio ambiente, los derechos humanos, el extractivismo...) han escrito una carta a la Presidente Metsola y a los Grupos Políticos en el Parlamento Europeo solicitando que se les permita ejercer su derecho de acceder a la información pública y ambiental.

Para las organizaciones firmantes esta falta de transparencia arroja incertidumbre sobre los criterios aplicados para otorgar a determinados proyectos una calificación que les otorgará privilegios económicos y administrativos, tales como la tramitación acelerada de concesión de autorizaciones. Además, supone una vulneración del Convenio de Aarhus sobre información, participación y justicia ambiental.

Las organizaciones advierten que las actuales políticas sobre minerales críticos, lejos de garantizar una transición ecológica justa, ahondan en las desigualdades sociales y territoriales existentes y pueden aumentar la desafección hacia las políticas climáticas. Tampoco resuelven, sino que profundizan en el expolio de recursos del Sur Global, sin garantizar los derechos de los pueblos indígenas ni de las comunidades locales en estos países.

Demandan, con carácter inmediato, una revisión de los proyectos estratégicos seleccionados de forma que se garantice que no recibe esta calificación ningún proyecto con malas prácticas ambientales y sociales, ni proyectos ubicados en espacios naturales protegidos, así como en otros que hayan sido merecedores de protección incompatible con las actividades extractivas.

Asimismo, recalcan que es imprescindible un giro de 180° en las políticas sobre materias primas minerales de forma que se priorice la reducción de la demanda y el reciclaje de metales, y que se ponga en el centro de la toma de decisiones el bienestar de la población y su entorno.

“Para que la política minera de la UE sea creíble y sostenible, debe basarse en una planificación espacial estratégica que defina con claridad qué materias primas se necesitan, en qué lugares pueden extraerse sin poner en riesgo el medio ambiente ni las comunidades, y bajo qué condiciones deben desarrollarse. Esta planificación debe construirse con criterios de interés general y con una participación pública real y reforzada. No podemos dejar que el rumbo lo marquen propuestas dispersas impulsadas únicamente por los intereses particulares de las empresas”, afirman desde el conjunto de organizaciones firmantes de la carta.

Las organizaciones y plataforma españolas firmante de la carta denuncian, además, que en España se hayan escogido minas con un amplio historial de irregularidades y malas prácticas ambientales, como son las de Las Cruces (Sevilla), La Parrilla (Cáceres) y Aguablanca (Badajoz), y proyectos con amplia contestación social por sus previsibles impactos en espacios protegidos como los de Las Navas (Cáceres), Doade (Ourense) y El Moto (Ciudad Real). Recuerdan que la mina de La Parrilla fue sancionada y cerrada en 2022 por carecer de autorización ambiental y por construir ilegalmente balsas de residuos mineros, mientras que la Mina de Las Cruces acumula más de 6.5 millones de euros en sanciones e indemnizaciones por extracciones ilegales de aguas del acuífero de Gerena y Guillena-Cantillana, masas de agua consideradas como reserva estratégica de emergencia para el consumo humano de Sevilla en caso de escasez. En el caso de la mina de Aguablanca, Denarius está liderada por empresarios con un amplio historial de vulneraciones de derechos humanos en sus explotaciones de oro y petróleo en Colombia.

[Descargar la Carta al Parlamento Europeo por los proyectos estratégicos mineros](#)

[Fuente: [Ecologistas en Acción](#)]

...Y la lírica

Marta Valdés

Canción desde otro mundo

Bajo este sol aunque
haya sol en todas partes
vivo.

Frente a este mar
aunque yo sé que hay otros mares
sigo.

Voy a morir sin ver la nieve
pero te miro cuando llueve.

Yo sé que hay en el mundo
palacios y castillos,
no me lo digan más:
otro paisaje crece
bajo este sol,
frente a este mar.

Quiero nombrar
todos los sueños que no caben
en París.

Quiero gritar
que tú no estabas en Venecia
sino aquí.

Quiero esta isla donde a veces
el año dura tantos meses

y tropezar por donde voy

pero saber quién soy.

[Canción dedicada a Frantz Fanon, de Marta Valdés, compositora, guitarrista e intérprete cubana, cultora del bolero y el «feeling». Fue escrita entre el 25 y el 26 de abril de 1969. Publicado en *Leer a Fanon, medio siglo después*, Clacso, Buenos Aires, 2017]